

MFA-219

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROVINCIA DEL CHUBUT

SE. C.O.P.L.A.D.E.

INFORME FINAL

1

ELABORACION DE CRITERIOS PARA UNA LEGISLACION ESPECIFICA ACTUALIZADA,

EN CHUBUT,

EN ORDEN A LA PROTECCION AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO, EN AREAS RURALES DE LA
PATAGONIA ARGENTINA

2



Exp. N° 2614 / C.F.I.

Experto: Dra. Oro Zulma Iglesias

01277
I 14
Surf final
III

Buenos Aires, 8 de junio de 1995

39777



2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

(Area Geográfica Árida-Semiárida)

INDICE TEMATICO

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

(Area Geográfica Árida Semiárida)

2.1. MEDIO AMBIENTE

2.1.1. Consideraciones Generales 118

2.1.2. Aspectos Legales

2.1.2.1. Legislación General 131

2.1.2.2. Legislación Seleccionada 194

2.2. RECURSO FORESTAL

2.2.1. Consideraciones Generales 205

2.2.2. Aspectos Legales

2.2.2.1. Legislación General 211

2.2.2.2. Legislación Seleccionada 218

2.3. RECURSO AGUA

2.3.1. Consideraciones Generales 230

2.3.2. Aspectos Legales

2.3.2.1. Legislación General 235

2.3.2.2. Legislación Seleccionada 245

2.4. RECURSO SUELO

2.4.1. Consideraciones Generales 256

2.4.2. Aspectos Legales

2.4.2.1. Legislación General 265

2.4.2.2. Legislación Seleccionada 286

2.5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(Formas de tenencia de la tierra)

2.5.1. Consideraciones Generales 330

2.5.2. Aspectos Legales

2.5.2.1. Legislación General 332

2.5.2.2. Legislación Seleccionada 335

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.1. MEDIO AMBIENTE

2.1.1. Consideraciones Generales.

2.1.1.

ENFOQUE GENERAL DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

La Conferencia de Estocolmo 1972, promovida por Naciones Unidas, provocó un movimiento internacional, iniciando un proceso de concientización sobre la finitud de los recursos naturales y la necesidad de cambiar la relación del hombre con su entorno.

La medida que se avanzó en el conocimiento de la problemática ambiental, se desarrolló una concepción sistémica, en la que cada uno de los factores ambientales debía tratarse en un sistema de interrelaciones, interdependencias e interacciones.

Se han determinado distintos tipos de ecosistemas, con características peculiares, singularidades propias y diferentes grados de deterioro.

El agua, es el factor más limitante del crecimiento vegetal, de allí la importancia de su calidad y la necesidad de evitar su contaminación. Todo ecosistema posee un límite para su autodepuración; pasado éste el sistema colapsará. La degradación fluvial puede tener repercusiones en ecosistemas agrarios y forestales subyacentes. Estos, al recibir flujo hídrico contaminado, terminan sufriendo deterioros con peligro de rotura del ecosistema y la posterior aparición de la desertificación.

Los bosques, son los sistemas naturales más evolucionados. Aseguran gran cantidad de biomasa y oxígeno a la biósfera, garantizando un necesario equilibrio ecológico. Estos cumplen funciones esenciales en el medio natural, como la creación de un microclima interior; modifican la temperatura, humedad atmosférica y la velocidad del viento, amortiguando o anulando el efecto de la erosión del suelo por causas de impacto de aguas salvajes, de escorrentía superficial y generan oxígeno.

La degradación del bosque se produce por tallas, incendios provocados para la implantación de suelos agrarios, transformaciones de suelos forestales a suelos agrarios y por inadecuadas técnicas de manejo forestal.

Vegetación natural de la zona. Hacia fines del siglo pasado y principios del actual, la Patagonia estaba cubierta por pastizales naturales que a pesar de su baja productividad, satisfacían las demandas forrajeras de la fauna herbívora nativa y la protegían de la acción erosiva del viento y la lluvia.

Degradación. Con la introducción de ganado lanar, a partir del sobrepastoreo y el corte de leña, se produce una gradual regresión de la vegetación natural (disminución de la cobertura vegetal, del número de plantas, de las especies más valiosas, en definitiva de la oferta forrajera).

Suelos. Degradación. Los suelos, al perder gran parte de la cobertura vegetal, quedan expuestos a la desecación, al viento, a las lluvias y al congelamiento invernal, perdiendo su horizonte orgánico con su fertilidad, su capacidad de absorción y retención de la humedad. Este cuadro de situación da lugar a la degradación por los factores de bajas temperaturas, erosión hídrica, erosión eólica, exceso de sales, degradación química, física y biológica.

Se hace necesario considerar la erosión humana ya que el hombre con sus pautas económicas, culturales y sociales en general, condena el agotamiento del recurso natural. El corte indiscriminado de arbustos para leña es un motivo que agrava la situación debido a la explotación comercial de la misma.

El proceso descrito, propio de las zonas áridas y semiáridas, presenta las siguientes consecuencias:

- . Disminución de la productividad bovina y ovina.
- . Mortandades de hacienda por factores climáticos.
- . Disminución de las existencias ganaderas.
- . Disminución de los ingresos.
- . Migración de la población rural.

De este cuadro de situación, surge con palmaria claridad la relevancia de utilizar métodos, tecnologías y prácticas adecuadas para evitar la degradación del ecosis-

tema, promover su restauración, tratando de neutralizar los procesos de desgaste y agotamiento.

Las soluciones deben ser integradas. Como consecuencia de esta estrecha relación de factores, la norma legal que los rija, debe partir de premisas de base que lleven a englobar en un marco común, la normatización de ecosistemas semejantes.

Con este presupuesto, partiendo del estudio de los ecosistemas de la Provincia de Chbut, se extenderá el relevamiento de áreas geográficas argentinas análogas y también internacionales, de semejante condición.



AREA GEOGRAFICA ARIDA-SEMIARIDA

En el desarrollo del presente estudio, se ha considerado oportuno analizar la legislación existente en un conjunto de provincias, cuyas características biofísicas guardan estrecha similitud con la provincia de Chubut. Se adopta este criterio en el supuesto que, en un mismo ecosistema y en el mismo momento histórico, el hombre se expresa con soluciones legislativas similares, ante problemas ambientales similares.

En este orden, se ha hecho extensivo el análisis a las siguientes provincias:

- . Catamarca
- . Córdoba
- . Chaco
- . Jujuy
- . La Pampa
- . La Rioja
- . Mendoza
- . Neuquén
- . Río Negro
- . Salta
- . San Juan
- . San Luis
- . Santa Cruz
- . Santiago del Estero
- . Tierra del Fuego

Catamarca

Se registra en la Provincia unas 40.000 ha. afectadas por formaciones medanosas activas ubicadas principalmente en el depto. Tinogasta. En algunas localidades, los médanos cortaron caminos y cubrieron poblaciones y fincas aledañas y avanzan en dirección este-oeste con una velocidad del frente erosivo de 200-300 m. por año. Sólo en el depto. Santa María, en el límite con el depto. Belén, existen 10.000 ha. afectadas por erosión edólica, en un área de intenso sobrepastoreo.

La zona crítica de erosión edólica se ubica en el oeste de Catamarca, en un ambiente árido, con suelos arenosos, vegetación esteparia arbustiva (jarilla, alpataco, etc.) y vientos frecuentes e intensos del sudoeste. Los factores determinantes de la degradación han sido el sobrepastoreo y el desmonte para leña.

Córdoba

La erosión, tanto hídrica como edólica, constituye un serio problema que se acrecienta con el tiempo, reduciendo el potencial productivo agrícola-ganadero. La acción antrópica, a través de un uso inadecuado del suelo, falta de rotaciones, deforestación, etc. hace su aporte a la degradación natural.

Chaco

La erosión hídrica es más frecuente y espectacular en el tercio oriental. El uso y manejo de la tierra y la magnitud de los registros pluviales acelera los procesos erosivos.

El efecto se aprecia sobre una decreciente productividad de los establecimientos agrícolas, así como una menguada receptividad de los campos de pastoreo.

Entre las causas, cabe destacar el uso impropio de los instrumentos de labranza, aplicación de prácticas de manejo no adecuadas a las características ambientales, la quema de pastizales y rastrojos, el desmonte incontrolado y el sobrepastoreo.

Jujuy

La erosión hídrica protagoniza la degradación en esta provincia. Desde los amplios valles y bolsones de la Puna, bajando por la quebrada de Humahuaca, pasando a los deptos. de Valle Grande, Ledesma y San Pedro, en toda la región se registra una importante superficie afectada por la erosión hídrica. También en el área productora de tabaco, que abarca los deptos. Capital, El Carmen y San Antonio.

La Rioja

Ubicada en la región árida, con variaciones climáticas que van desde desértico hasta semiárido seco.

Dos grandes regiones caracterizan el paisaje riojano: occidental (montañas) y oriental (llanos). Entre ambas, la región del piedemonte. En todas ellas se observa la coexistencia de erosión eólica e hídrica.

La Pampa

Esta provincia comprende dos grandes regiones agropecuarias naturales: la semiárida, que ocupa el 47% de la superficie provincial y se ubica al noroeste; y la árida o subregión del monte, que ocupa el 53% restante de la superficie, con muy pocas posibilidades de producción, salvo en áreas bajo riego sobre las márgenes del río Colorado.

La erosión hídrica provoca un acelerado desgaste de los suelos en las grandes depresiones, principalmente en Realicó y Chapaleofú.

Los vientos (de hasta 180 km/h) transforman a determinados sectores de la región en verdaderas ollas de polvo, sumando a veces su efecto erosivo a períodos de prolongada sequía.

Las causas no difieren de las ya conocidas para otras zonas, tales como: a) métodos de labranza inadecuados; b) rotaciones incorrectas; c) deforestación irracional; d) laboreo de tierras no aptas para agricultura; e) sobrepastoreo. G. Covas y A. Glave señalan un factor más: la subdivisión de la tierra.

Mendoza

Dividida en dos áreas definidas, cuyas modalidades de explotación configuran paisajes de distintas características: el área regada y el área no regada.

En el área regada la erosión eólica es mínima. La erosión detectable es hídrica-ligera, aunque se presentan problemas de de-

gradación del suelo por efecto del mal uso del agua de riego y la falta de drenajes, que determinan la elevación de la capa freática y aumento de salinidad y/o alcalinidad en algunas zonas.

En el área no regada se observa erosión eólica y erosión hídrica (incluye la acción de la nieve en zonas de cordillera). La conjunción de ambas se manifiesta en las mesetas, los cauces inferiores en las huayquerías y el área inundable de los ríos Mendoza, San Juan y Desagüadero.

Neuquén

En el sector oriental de la provincia, naturalmente árido, hay manifestaciones de actividad eólica que se presentan en forma de acumulaciones de arena y médanos; ello, en zonas altamente degradadas por el sobrepastoreo y extracción de madera para leña.

Río Negro

Erosión hídrica no grave. Erosión eólica perceptible en forma de médanos continentales y dunas marítimas (Deptos. Adolfo Alsina y San Antonio).

Salta

Se divide en dos áreas, de cuencas altas y cuencas bajas. En las cuencas altas, los condicionantes de la erosión hídrica son: el clima, la topografía y la acción antrópica (desmonte parcial de laderas, tala de árboles, quema de pastizales y sobrepastoreo).

El sector de las cuencas bajas, donde se manifiestan proce

Los degradatarios que afectan tanto a tierras bajo cultivo, como a tierras no cultivadas. En las primeras, los problemas derivan del exceso de agua de riego sin apropiadas prácticas de drenaje. En ambas se manifiesta la erosión hídrica.

Los valles Calchaquies sufren daño por erosión eólica grave.

San Luis

Dos grandes regiones naturales contrastantes en sus fenómenos de degradación dominante: la llanura medanosa y las sierras del Norte.

Al sur, la llanura medanosa, semiárida, donde la actividad agrícola ha originado gran cantidad de médanos. El sobrepastoreo es el principal desencadenante de la erosión actual, y se localiza en todos los lugares de acción antrópica.

La segunda región natural, las sierras del Norte, que se subdividen a su vez en dos porciones: a) sierras y valles interseccionados al este y b) serranías bajas al oeste. Las primeras constituidas por las sierras de San Luis, Comechingones y El Morro, de clima semiárido. Erosión hídrica importante en áreas de cultivo, acelerada por técnicas de cultivo inadecuadas y sobrepastoreo. Las segundas pertenecen a un sector árido, con erosión de severa a grave, por acción antrópica.

San Juan

La acción antrópica, directa o indirecta, acelera los mecanismos de erosión en que convergen factores naturales, tales como el relieve montañoso, los materiales superficiales (arenas eólicas, vientos severos y pobres condiciones hidroclimáticas.

Se esquematizan cuatro áreas generales de erosión, a saber: a) Montañas; donde la escorrentía y el viento desempeñan un rol importante.

b) Piedemontes (centro de la Provincia). La erosión es hídrica.

c) Valles y Bolsones. La erosión es hídrica.

d) Llanuras. La erosión es intensa y grave, con salinas y médanos grandes.

Santa Cruz

Grave erosión hídrica, con localización preponderante en la Precordillera, en zonas de lagos Viedma y Roca.

Grave erosión eólica en todos los departamentos, debido a características climáticas altamente agresivas, sumadas al manejo inadecuado que desde el inicio de la monocultura ovina se ha dado a la región. Obvia consecuencia primera de ello es la disminución de la rentabilidad, por reducción progresiva de la receptividad de los campos.

El sobrepastoreo acelera la degradación del ambiente. La erupción del volcán Hudson, en Chile, afectó con sus cenizas el

40% de la superficie de la provincia. Sus efectos inmediatos fueron el cierre de unos 400 establecimientos ganaderos; sobre este fenómeno no hay un criterio uniforme sobre las perspectivas a largo plazo.

Santiago del Estero

Esta provincia sufrió un importante deterioro del bosque como consecuencia de la explotación irracional del mismo, especialmente para la producción del tanino. La vegetación y el suelo sufren deterioros significativos, como consecuencia del sobrepastoreo de vacunos y caprinos y el desmonte irracional.

Otro proceso de degradación muy importante se debe a la salinización de suelos en las áreas bajo riego ubicadas en el Dulce-Salado. Se atribuye ésto a los excesivos volúmenes de agua aplicados a los predios, así como una deficiente red de drenaje; su consecuencia, la salinización, afecta y amenaza a tierras destinadas a la producción frutihortícola, de gran importancia socio-económica para la región.

Tierra del Fuego

Por sus particulares condiciones de humedad, la abundante vegetación y la naturaleza de los suelos, la erosión en esta provincia no reviste la gravedad que presenta en otras zonas.

Tanto en los aspectos hídricos como eólicos, para Tierra del Fuego puede afirmarse la existencia de un proceso erosivo no espectacular.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.1. MEDIO AMBIENTE

2.1.2. Aspectos Legales

2.1.2.1. Legislación General

2.1.2.2. Legislación Seleccionada

2.1.2.1.

CONSTITUCION NACIONAL-CONSTITUCIONES PROVINCIALES Y LA VARIABLE AMBIENTAL

La Argentina ha adoptado una organización federal que conlleva la coexistencia de dos niveles de gobierno, uno el nacional y otro local o provincial.

La Constitución Nacional no contiene normas específicas referidas al ambiente, ni nada dice expresamente sobre el dominio de los recursos naturales, su administración y el poder de policía que debe ejercerse.

Del art. 104 y 108 de la Constitución Nacional, emergen las atribuciones que las provincias conservan y aquellas que fueron delegadas a la Nación.

De la interpretación armónica de los preceptos constitucionales, surge que el gobierno federal es de excepción, con respecto a las provincias, en temas relacionados con los Recursos Naturales, su régimen jurídico y lo inherente al medio ambiente.

Específicamente en materia agraria, en general y las diferentes proyecciones de la actividad, encontramos la coexistencia de poderes que las provincias han delegado en la Nación, poderes concurrentes y poderes reservados por las provincias.

De la interpretación restrictiva del art.67 inc.11 de la Constitución Nacional, se postuló la doctrina del que al no existir una delegación expresa de formular un Código Agrario por el

Congreso Nacional, las provincias se reservaron la facultad de dictarlo;ésto trajo como consecuencia la sanción del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires de 1865 y ésto era constitucionalmente posible en virtud de lo normado por el art. 108 de la Constitución Nacional. Si bien es cierto que el Código Civil tiene normativa general sobre el punto, el Código Rural mencionado se anticipó a éste y además posee una especificidad propia de la legislación especial aplicable a la actividad.

El comentado inc.11 del art.67, consagra el principio de unidad legislativa; ésto se basa en antecedentes históricos, ya que la Revolución de Mayo produjo un profundo cambio político,pero mantuvo incólumne las instituciones tradicionales del derecho español; como consecuencia la Nación se reservó derechos legislativos cuando los intereses a tutelar eran tales que hacían a la integración nacional de acuerdo a la concepción del derecho propia de la época; como consecuencia el Congreso Nacional se reservó la legislación "común" de fondo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "Oberti c/Panzirraghi" (Juris, 18-119) ha sostenido que las leyes -que aún no mediando declaración expresa de delegación- sean dictadas por el Congreso Nacional,que integren,modifiquen o amplíen las expresamente delegadas, está facultado para dictarlas.

Los poderes implícitos emergen como consecuencia del art. 67 inc.28 y es la que en doctrina es denominada cláusula elástica,por la cual compete al Congreso "hacer todas las leyes y re-

glamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina"; la teoría de los poderes implícitos emerge ante la imposibilidad de pretender una enunciación completa y taxativa de aquéllo en que la Nación tenga competencia, mas la asignación de implícita debe derivar de un criterio basado en cuál es el interés que se pretende proteger, si general o local, para delimitar las facultades reservadas a las provincias.

Un debate interesante sobre el punto, se efectuó cuando se discutió en el Congreso la sanción de la ley 3959 de policía sanitaria animal.

Joaquín V. Gonzalez sostenía que el poder de policía está reservado a las provincias por ser una facultad no delegada expresamente en la Nación y sólo como excepción puede concederse al Gobierno Federal.

Ramos Mejía, con fundamento en el art.67 inc.28, afirmaba que corresponde a la Nación proveer lo conducente para la prosperidad del país, el bienestar y adelanto de las provincias.

Quintana señalaba que el poder de policía podía reputarse como concurrente, mas en virtud de lo normado en el art.31 de la Constitución Nacional, la legislación provincial cedía ante la nacional.

Cullen, basándose en Story, decía que debía mirarse a los intereses afectados, si éstos eran generales era válida la intervención legisferante del Congreso Nacional, reforzando este criterio por lo prescripto en el art. 67 inc. 16 de la Ley Fundamental.

Los poderes concurrentes emergen de los arts. 67 inc. 16 y 107. El primero es importante en el tópico en análisis por cuanto el Congreso Nacional debe promover todo lo conducente a la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de las provincias promoviendo la inmigración y la colonización de tierras de propiedad nacional; a su vez el art. 107 establece que las provincias pueden promover la inmigración y la colonización de tierras de dominio provincial.

Las facultades concurrentes, se deben a relaciones de coordinación, debiendo descartarse la simultaneidad.

Algunos doctrinarios colocan a la reglamentación del Régimen forestal y a la facultad de la Nación de promover la colonización de tierras privadas que se encuentren en el ámbito provincial, dentro de las prevenciones emergentes de los poderes implícitos.

Los poderes reservados por las provincias surgen del art. 104 de la Constitución Nacional; en materia rural podemos citar la reglamentación de la Unidad Económica, el de la colonización sobre tierras de dominio provincial.

Con la reforma al Código Civil, la facultad de reglamentar sobre la unidad económica, se funda en el art. 2326, que prohíbe la división de las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento y confiere a las provincias el poder reglamentario. Esto constituye una clara restricción al dominio y afecta derechos reales; por lo tanto y en virtud de la letra constitucional, podría reputarse como de inconstitucional a este artículo del Código Civil reformado. Lo cierto es que diversas leyes provinciales han seguido distintos criterios para definir la unidad económica y esto se observa en provincias que tienen tierras de semejante composición agroeconómica.

Resulta necesario rever la legislación sobre los recursos naturales y ensamblar una proyección ambiental en el tema agrario, basándose en los modernos principios del constitucionalismo social.

El derecho público provincial ha tomado la iniciativa de la cuestión ambiental, siendo este derecho de raigambre constitucional en muchas de nuestras provincias.

Normas de este contenido se encuentran en la Constitución de la Provincia de Córdoba (art. 11; 38 inc. 8; 53; 66 y 110 inc. 19), en la Constitución de Formosa (art. 30), en la Constitución de Jujuy (art. 22; 43 inc. 5; 123 inc. 25), en la Constitución de La Rioja (art. 66), en la Constitución de Mendoza (art. 1, Decreto 3133), en la Constitución de Río Negro (Preámbulo y arts. 46 y 84), en la Constitución de Salta (Preámbulo y arts. 30 y 78), en la Constitu

ción de San Luis (Preámbulo y art.47), en la Constitución de Santiago del Estero (art.115 inc.36), en la Constitución de Tierra del Fuego (art.25;54 y 55) y la Constitución de Tucumán(art.36).

Dentro del ámbito de protección constitucional provincial encontramos el general ambiental y el particular a los recursos de acuerdo a la valoración que el legislador le ha dado, encontrando que,por motivos económicos culturales de cada territorio provincial, frecuentemente se le da preminencia a unos sobre otros.

La Constitución de Córdoba protege al medio ambiente en su totalidad; se debe evitar la contaminación y participar en la defensa ecológica, se legitima a toda persona en defensa de los intereses difusos y ecológicos.El agua,el suelo,el aire son considerados elementos vitales que merecen especial protección, preserva los recursos naturales ordenando su uso y explotación,de acuerdo a un aprovechamiento racional e integral,considera a la tierra como bien permanente de producción, procura evitar su pérdida de fertilidad,erosión y regula el empleo de sus tecnologías de aplicación.En las aguas que sean de dominio público su aprovechamiento está sujeto al interés general. El Estado resguarda la supervivencia y conservación de los bosques, promueve la forestación y reforestación. Corresponde al legislativo provincial dictar normativas sobre el uso y enajenación de la tierra propiedad de la provincia y reglar el ordenamiento territorial.

La Constitución de Catamarca establece que la distribución de la tierra se hará preferentemente por medio de la colo-

nización. Considera a las aguas que nacen en un dominio privado en todo lo que trasciendan del límite, como dominio público del Estado Provincial.

La Constitución de Corrientes atribuye a su poder legislativo la facultad de ordenar la disposición de uso de la tierra pública de su territorio.

La Constitución del Chaco prevé sobre tierra pública, riqueza forestal, el dictado del Código Rural y colonización.

La Constitución del Chubut, considera a la tierra como un bien permanente de producción y desarrollo, que cumple una función social. "La ley garantiza su preservación y recuperación, procurando evitar tanto la pérdida de fertilidad como la erosión y regulando el empleo de las tecnologías de aplicación". En el más amplio sentido, el Estado promueve el racional aprovechamiento de los recursos naturales.

La Constitución de Entre Ríos reserva el derecho a la Provincia de legislar sobre tierras públicas.

La Constitución de Formosa, consagra como un deber-derecho la protección al medio ambiente, siendo obligación de los poderes públicos proteger al medio ambiente y los recursos naturales, promoviendo su uso racional. También protege la flora y fauna, así como su restauración. Protege las aguas, tanto superficiales como subterráneas de todo tipo de contaminación. La prevención y con-

trol de la degradación de los suelos. El correcto uso y comercia lización de agroquímicos, el derecho a gozar de un aire puro, li- bre de contaminantes gaseosos, líquidos o acústicos. La tierra es considerada como un bien de trabajo, se requiere su explotación racional, por ley se establece el manejo de la tierra pública. Se promoverá el aprovechamiento racional de los bosques. El Estado Provincial contribuirá a combatir plagas vegetales y animales , particularmente aquellas que afecten el normal rendimiento de la tierra. Reserva a la Provincia el dominio de los recursos minera les. Establece que un Código reglamentará al recurso agua. Se re- serva taxativamente el poder de policía.

La Constitución de Jujuy, consagra el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de defenderlo. Promueve el aprovechamiento racional de los recursos naturales, se deben eliminar las fuentes de contaminación del ai re, agua, suelo. Tiene un punto especial de consideración para tierras fiscales, régimen de aguas, régimen forestal, siendo fun- ción específica del poder legislativo provincial el dictar leyes de preservación del medio ambiente y los recursos naturales, de las especies animales y vegetales útiles o autóctonas, de fores- tación y reforestación. En caso que no se cumpla con la normati- va, cabe una acción de amparo contra organismos públicos o parti culares.

La Constitución de La Pampa, consagra la función social de la propiedad, las tierras fiscales destinadas a la explotación agropecuaria, deberán ser colonizadas, su explotación debe ser ra-

cional. Reserva para la provincia el derecho de legislar sobre tierras públicas, bosques, colonización, Códigos Rural y de Agua, defensa contra la erosión y protección de riquezas forestales.

La Constitución de La Rioja, declara la función social de la propiedad, da a la Provincia el dominio sobre sus recursos naturales, también el dominio y uso de las aguas en forma específica, consagra el deber-derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el objetivo es lograr una óptima calidad de vida. Reserva al Estado Provincial el derecho de dictar Códigos Rural, de Recursos renovables y no renovables y otros que se consideren necesarios dentro de la competencia provincial. Toda persona puede pedir por vía de amparo que se la restituya en su derecho conculcado.

La Constitución de Mendoza protege el recurso agua, sus yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, situados en su suelo y subsuelo, su explotación debe ser preservada en beneficio de generaciones futuras.

La Constitución de Misiones, considera que la propiedad es inviolable y cumple una función social. Establece un punto sobre régimen agrario en donde se contempla la colonización, la protección del bosque, la reforestación, la conservación y mejoramiento de suelos, la flora y la fauna. Consagra el dominio provincial sobre las fuentes naturales de energía existentes en su territorio. Es función del poder legislativo provincial, promover la colonización, fomentar el incremento de actividades agropecuarias ,

la planificación forestal, la explotación racional de bosques.

La Constitución de Neuquén reserva para su poder legislativo, la facultad de legislar sobre reforma agraria y el régimen de la tierra pública, dictar los Códigos Rural y de Aguas , dictar leyes referentes a bosques, minería, energía hidroeléctrica. Dictar disposiciones para preservar los bienes naturales. Protección de animales y especies vegetales útiles, la forestación y reforestación. Se establece que la tierra es un bien de trabajo y la ley promoverá una reforma agraria integral. Los bosques situados en tierras fiscales son propiedad del Estado provincial; los bosques naturales situados en tierras particulares que no cumplan con los preceptos establecidos por la ley, serán objeto de explotación con intervención del Estado provincial.

La Constitución de Río Negro, contempla dentro de sus puntos garantías procesales específicas, la posibilidad de articular un Mandamiento de Prohibición para que cese la turbación a un derecho emergente de la Constitución, la ley, decreto u ordenanza y también un Mandamiento de Ejecución para el caso de incumplimiento por un funcionario o ente público administrativo a lo preceptuado por la Constitución, ley, decreto u ordenanza.

Consagra el deber de evitar la contaminación ambiental. Reserva a la provincia la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en su territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas. Establece que un Código de Aguas reglará al recurso. La Provincia con los municipios ordena el uso

del suelo y regula el desarrollo urbano y rural, estableciendo como pauta que el uso del suelo debe de ser compatible con las necesidades generales de la comunidad. Dentro de régimen de tierra, la ley establece las condiciones de su manejo como recurso renovable y desalienta su explotación irracional. En materia agraria la Provincia propiciará la expropiación de latifundios inexplorados o explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a agua que con motivo de obras que se realicen puedan beneficiarse. El Estado promueve el aprovechamiento racional de los bosques, fomenta la forestación y reforestación. Impone la defensa del ambiente como un deber-derecho, controla la contaminación del aire, del suelo y del agua, conserva la flora, la fauna y el patrimonio paisajístico, protege la subsistencia de especies autóctonas, legisla sobre la introducción de especies exóticas que pueden ser un peligro para la producción agropecuaria o los ecosistemas naturales . Reglamenta la producción, liberación y aplicación de productos agroquímicos, establece programas de difusión y educación ambiental, exige el cumplimiento del estudio de impacto ambiental sobre los grandes emprendimientos que pueden alterar el ambiente, custodia los ecosistemas naturales, faculta al poder legislativo para instruir los Códigos Rural, de Aguas, leyes de Bosques y viales. Establece que el municipio organiza y reglamenta el uso del suelo.

La Constitución de Salta, pone como fin desde su Preámbulo, la protección al medio ambiente. Considera el deber de conservar el medio ambiente y el derecho a disfrutarlo. Consagra la función social de la propiedad. Pone como obligación en cabeza del

estado y de los particulares la defensa de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de vida. Considera a la tierra como un instrumento de producción y objeto de explotación racional, con función social y económica. Consagra el derecho de uso a favor de la población de las aguas de dominio público, que no podrán ser objeto de concesiones privadas. Promueve el aprovechamiento racional de los bosques. Brinda protección a los intereses difusos y concede amplia legitimación procesal, permite la acción popular por inconstitucionalidad ante una norma de alcance general contraria a la Constitución.

La Constitución de San Juan, consagra el deber-derecho a un ambiente humano salubre y ecológicamente equilibrado. Permite la iniciativa popular para prevenir o controlar la contaminación y sus efectos, la erosión, el ordenamiento del espacio territorial, crear y desarrollar reservas y parques naturales, proteger especies animales. La tierra es considerada factor de producción y no de renta y debe ser objeto de explotación racional. La Provincia promoverá la forestación y reforestación de su suelo. Se reserva la facultad de reglar el uso y aprovechamiento de todas las aguas del dominio público existentes en su territorio.

La Constitución de San Luis desde su preámbulo consagra la protección al medio ambiente. Consagra explícitamente en su articulado, el respeto y la protección a la vida, al medio ambiente y a la calidad de vida. Considera la función social de la propiedad privada, teniendo en mira el bien común. Permite la Acción de Amparo, legitimando a toda persona a efecto de que cese una prác

tica contraria a los derechos que explícita e implícitamente re conoce la Constitución Provincial, siempre que sea necesaria la reparación urgente del perjuicio y la cesación inmediata de los efectos del acto.

La Constitución de Santa Cruz, considera a la tierra como bien de trabajo y no de renta y debe ser objeto de explotación racional. La ley agraria tenderá a la defensa del suelo, fomentando la forestación, reforestación, riego, defensa de las especies vegetales y velará por la explotación racional de los ecosistemas. Al Poder Legislativo le corresponde disponer el uso y enajenación de tierras públicas, conforme al régimen que emerge de esta Constitución.

La Constitución de Santa Fe promueve la racional explotación de la tierra, faculta al poder legislativo para dictar leyes de protección y fomento de riquezas naturales y a dictar el Código Rural. Consagra la inviolabilidad de la propiedad y su función social.

La Constitución de Santiago del Estero, dispone que las tierras que sean declaradas de uso forestal conservarán esta prioridad, aunque sean privadas, debido al carácter social de las mismas, se deberá asegurar su explotación racional a perpetuidad y al equilibrio ecológico regional. El uso del agua del dominio público es un derecho inherente a los predios. El bosque será protegido con el fin de asegurar su utilización racional y lograr me

jor aprovechamiento económico social. Es atribución de la legisla
tura dictar disposiciones para preservar los bienes naturales, es
estableciendo una adecuada protección del equilibrio ecológico y me
dio ambiente sancionando daño y destrucciones innecesarias. Esta-
blece Acción de Amparo para garantizar todos los derechos y liber
tades reconocidos expresa o tácitamente en la Constitución.

La Constitución de Tucumán, establece que la provincia ar
bitrará los medios legales para proteger la pureza del ambiente,
preservar los recursos naturales, prohibirá la introducción de ma
teriales o sustancias consideradas basura ecológica, acordará con
la Nación y las otras provincias la prevención de daños ambienta-
les, prevendrá y controlará la contaminación y la degradación de
ambientes por erosión, ordenando su espacio territorial para con-
servar y acrecentar ambientes equilibrados, protegerá las reser-
vas naturales declaradas como tales, fomentará la forestación, es
pecialmente con plantas autóctonas, reglamentará la producción,
formulación, comercialización y uso de productos químicos. Corres
ponde al Poder Legislativo disponer del uso y de la enajenación de
tierras de propiedad provincial. La ley determinará las funciones
a cumplir por la municipalidad en materia de protección al medio
ambiente.

La Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, consagra como derecho social el goce del medio am-
biente sano, la conservación de los recursos naturales y la pre-
servación de la flora y de la fauna. Es un deber constitucional el
de evitar la contaminación y participar en la defensa del medio am

biente. Se protegen los intereses difusos, merecen explícita mención el agua, el suelo, el aire, que por ser vitales para el hombre, son materia de especial protección por parte del Estado provincial. El Estado protege el medio ambiente, resguarda los ecosistemas, preserva los recursos naturales ordenando su uso y aprovechamiento, resguarda el equilibrio de los ecosistemas; para todo ello dictará la normativa necesaria. Considera a los Recursos Naturales superficiales y subyacentes, renovables y no renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, del dominio exclusivo público del Estado Provincial, inalienable e imprescriptible. Considera a la tierra como un bien permanente de producción y desarrollo que debe ser objeto de explotación racional. La ley garantizará su preservación y recuperación, procurando evitar la pérdida de fertilidad y degradación del suelo. Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento, están sujetas al interés general. Los bosques situados en tierras fiscales, son propiedad del Estado Provincial; una ley reglamentará el aprovechamiento, conservación y acrecentamiento, debiendo contemplarse el uso racional del recurso boscoso. Es función de la legislatura provincial dictar leyes de defensa de la ecología y medio ambiente, sobre los recursos renovables y no renovables, ley de sanidad animal que contemple la especial condición de la Provincia como zona libre de sarna y aftosa. La Constitución otorga legitimación a toda persona, para obtener de las autoridades la protección de los intereses ecológicos.

Este análisis del Derecho Público Provincial demuestra que

éste marcha en delantera respecto del Nacional. Los recursos naturales y el suelo, específicamente, están contemplados en un gran número de ellas, la variable ambiental ha sido extensamente incorporada a los textos constitucionales. El ambiente ha sido elevado a la categoría de bien jurídico que merece tutela jurisdiccional.

Dra. Mirta Santiago

MEDIO AMBIENTE.

LEGISLACION NACIONAL

Pacto Federal Ambiental 1993.

La Nación y las Provincias representadas acuerdan: promover políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el Territorio Nacional, estableciendo acuerdos marco entre los Estados Federados y entre éstos y la Nación que agilicen y den mayor eficiencia a la preservación del ambiente teniendo como referencia los postulados del "Programa 21", aprobado en la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS para el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD'92).

- ."Promover a nivel provincial la unificación y/o coordinación de todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la fijación de las políticas de recursos naturales y medio ambiente.
- .Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de Medio Ambiente como un instrumento válido para la coordinación de la política ambiental de la República Argentina.
- .Los Estados signatarios se comprometen a compatibilizar e instrumentar en sus jurisdicciones la legislación ambiental.
- .En materia de desarrollo de una conciencia ambiental, los Estados Signatarios se comprometen a impulsar y adoptar políticas de educación, investigación científico-tecnológica, capacitación, formación y participación comunitaria que conduzcan a la protección y preservación del ambiente.
- .Los señores Gobernadores propondrán ante sus respectivas legislaturas provinciales la ratificación por ley del presente acuerdo, si correspondiere".
- .El Estado Nacional designa ante el Consejo Federal del Medio Ambiente a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, para la implementación de las acciones a desarrollarse a los efectos de cumplir los principios contenidos en este acuerdo.

Decreto 2148/90 Reservas Naturales estrictas.

Ley 24051/92. Residuos Peligrosos

Decreto 181/92 Reglamentario del Art. 3º de la ley 24.051/92.

Decreto 831/93. Reglamentario de la ley 24051.

Ley 22351/80 Areas Protegidas.

CATAMARCA

Ley 4395 Plaguicidas. Decreto Reglamentario 3175/87.

CORDOBA

Ley 7343/85 Ley Provincial del Ambiente.

Decreto 3290/90. Evaluación de Impacto Ambiental.

Ley 8300/93. Modif. a la ley sobre preservación y conservación del medio ambiente.

Ley 5480 Instituto de Saneamiento y Ciencias del Ambiente.

Ley 6964/83 Ley de áreas naturales de la provincia, de los ambientes y áreas naturales en general. Administración, Manejo, Planificación de los Ambientes. Categorías de Áreas Naturales.

Ley 7682 Clasificación y ordenamiento de la legislación vigente sobre medio ambiente y recursos naturales.

Ley 8145 Aprobación del Acta Constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente.

Ley 8197 Comisión Bicameral para el ordenamiento y clasificación de la legislación vigente relacionada con el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

CHACO

Ley 1478 Establecimientos Faenadores de Ganado para consumo-normas-higiene-seguridad. Se crea la policía ecológica.

Ley 2494/80 Adhesión a la Ley Nacional 20284.

Ley 3138. Sanidad Vegetal.

Decreto 2483/73 Creación de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en Jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ley 2232/78. Creación del Instituto de Ecología, Recursos Naturales y Tecnología.

Ley 3912/93 Ratifícase el Pacto Federal Ambiental entre la Nación y las Provincias, suscripto el 5/7/1993.

Ley 3911/93 Protección de los intereses difusos o colectivos, relacionados con el Medio Ambiente.

Ley 2489 Comercialización y aplicación de plaguicidas.

Ley 3378 Actos derivados del expendio, aplicación aérea y transporte de plaguicidas.

Decreto 1057/79 Crea la Comisión Educación de uso de plaguicidas agrícolas.

JUJUY

Decreto 1624/83 Contaminación Ambiental. Normas de aplicación de la ley 3932/83.

Ley 4052/83 Asignación de responsabilidades a los Ministerios.

Ley 4399/89. Régimen Procesal para la cautela de los intereses difusos o derechos colectivos.

Ley 4711/93. Adhiérese la Provincia de Jujuy al Consejo Federal del Medio Ambiente.

LA PAMPA

Ley 1352/91. Régimen de procedimientos para el amparo de los intereses difusos o derechos colectivos.

Ley 1321/91 Crea el sistema provincial de áreas protegidas.
Ley 1173/89 Agroquímicos. Decreto 249/89.
Decreto 618/90. Autoridad de aplicación de la ley 1173/89.

LA RIOJA

Ley 5728/92 Creación del Consejo Federal del Medio Ambiente.
Ley 5929 Protección Ecológica del Medio Ambiente (Zona del Valle de Antinaco, Los Colorados, Famatina y Los Sauces).

MENDOZA

Ley 5961/92. Preservación del Ambiente. Decreto 3435/93.
Decreto 2357/90 Crea el Consejo Provincial del Medio Ambiente.
Ley 5803/91. Ratifica el Acta Acuerdo de Creación del Consejo Federal del Medio Ambiente.
Ley 6045/93 Areas Naturales Provinciales y sus Ambientes Silvestres.
Ley 6021/93. Atlas Ecológico. Decreto 778/93
Ley 5917 Residuos Peligrosos. Adhesión a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
Ley 5665/91 Agroquímicos.
Decreto 209/90. Adhesión a la Red Nacional de Cooperación Técnica en Areas Naturales Protegidas.
Ley 5963/92. Ratificación del Pacto Legislativo Ambiental del Nuevo Cuyo suscripto por Legisladores Ambientalistas en las Provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza.
Decreto Ley 3884/72 Creación del Instituto Argentino de Zonas Áridas (I.A.D.I.Z.A.)
Ley 5330/88. Protección Ecológica. Prospección Nuclear en zonas mineras (Convenio entre la Provincia y la C.N.E.A. s/disposiciones Decreto Ley Nac. 22477/56).
Resolución 634/87 Normas de procedimiento para el control de la contaminación industrial.

NEUQUEN

Ley 1875/90 Ordenamiento territorial, utilización racional del suelo, etc. en función de los valores del ambiente.
Ley 1914/91 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Decreto 3836/91.
Ley 1611 Defensa de los Recursos Naturales.
Ley 4865 Creación del Consejo Provincial del Medio Ambiente.
Ley 1926/91 Policía en Hidrocarburos.
Decreto 4334.
Decreto Ley 1165. Mejoramiento Educación Rural.

RIO NEGRO

Ley 1791 Crea el Ministerio de Recursos Naturales. Decreto Reglamentario 1595/85. Decretos 906-907-908-909 relacionados con el Ministerio de Recursos Naturales.
Ley 2615/93 Adhiere al Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA)
Decreto 1684/91 Acepta en lo formal y conceptual los términos del Acta de Acuerdo de la tercer reunión del COFEMA.

Ley 2626/93 Declara de interés provincial la concertación de un Pacto Ambiental Patagónico a formalizarse entre las Provincias integrantes del Parlamento Patagónico.

Ley 2631/93 Adhiere, adopta y declara de interés social y económico a los principios que sustentan el denominado "desarrollo sustentable". Decreto 1023/93.

Ley 3056/93 Recursos Genéticos de la Provincia. Decreto 530/93.

Ley 2581/92 Crea en el ámbito del Ministerio de Economía la "Cruz Verde Rionegrina", a fin de aplicar y reglamentar lo normado respecto al ambiente.

Decreto 2497/92.

Decreto 2463/89. Crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial el Comité de Planificación y Gestión del Medio Ambiente (COPLAGEMA).

Ley 2779/94. Derechos colectivos- Intereses difusos.

Ley 2643/93. Declara en emergencia ecológica a la Cuenca del Río Colorado y poblaciones ribereñas como consecuencia de los derrames de petróleo.

Ley 2600 Recursos genéticos, terrestres, propiedad del Estado.

Ley 2342/92. Crea la obligación de la evaluación de impacto ambiental para aquellas actividades que degraden el ambiente.

Decretos Reglamentario 1511/92.

Ley 2175/87 regula todas las acciones relacionadas con plaguicidas y agroquímicos.

Decreto 1253/87. Decreto de Promulgación de la ley 2175/87.

Decreto Reglamentario 908/88.

Decreto 2110/88. Crea el Consejo Honorario de Plaguicidas y Agroquímicos.

Ley 1334/80 de desagües industriales en la Provincia. Decreto Reglamentario 908/88.

Ley 2612/93. Establece el fomento y desarrollo de inversiones efectuadas por empresas agropecuarias, agroindustriales, etc. destinadas al mejoramiento y preservación de las condiciones ambientales y de seguridad del trabajo.

Decreto 2093/89. Ratifica el convenio de gestión ambiental suscripto entre la Provincia y la Empresa HIDRONOR S.A.

Ley 2517 Realización de la Carta Ambiental de la Pcia. de Río Negro.

Ley 2669/93 Crea el sistema provincial de áreas naturales protegidas.

Decreto 1788. Adhesión de la Provincia a la red nacional de áreas naturales protegidas (Cooperación Técnica).

Ley 2472/92. Prohibición de ingreso, transporte, o almacenamiento permanente o transitorio en el territorio de la Provincia y el mar jurisdiccional de residuos radioactivos y de residuos o desechos tóxicos de origen industrial químico o biológico.

Resolución 1302/92 Industrias Hidrocarburíferas. Régimen de calidad y protección de los Recursos Hídricos Provinciales.

Decreto 2423 Degradación del medio ambiente, petróleo, residuos sólidos, exploración, extracción, transporte, industrialización.

Ley 2380 Código Rural. Anteproyecto.

SALTA

Insersión del tema ambiental en la Carta Magna Provincial (arts. 30 y 78 al 83, Capítulos II y VIII). Protección del Medio Ambiente y Defensa de la Calidad de Vida.

Ley 6499/88. Aprobación del convenio suscripto entre la Secretaría de Vivienda y ordenamiento ambiental y el Estado Provincial de Salta con el fin de evaluar los efectos de los productos químicos en el hombre y el ambiente, los riesgos de su utilización y su vigilancia.

Decreto 1004/90. Créase el Consejo Provincial del Medio Ambiente.

Ley 5740. Educación Rural.

SAN JUAN

Ley 5824/87 Preservación de los Recursos de Agua, Suelo, Aire y control de la contaminación. Cap. 12. Control de la contaminación por efluentes industriales y agrícolas.

Decreto 1638/89 Reglamentación de la ley 5824.

Ley 6161 sobre prevención de desastres.

Ley 5765/87 Defensor del pueblo (Ombudsman). Establece su figura.

Ley 6006/89 Protección jurídica de los intereses difusos y derechos colectivos. Amparo.

Ley 6141 Código de faltas de San Juan.

Ley 6174/91 Adhesión de la provincia al acta constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).

SAN LUIS

Ley 4114 Saneamiento Ambiental. Prohíbe la elaboración, fraccionamiento, venta, tenencia y uso de detergentes no biodegradables.

SANTA CRUZ

Ley 1313/79 Adhesión de la Pcia. a la Ley Nacional 20284 de Preservación de los recursos del aire.

Ley 2249/91 Prohíbe en todo el territorio de la Provincia la instalación de centrales nucleares, depósitos transitorios o permanentes de residuos radioactivos, plantas o establecimientos de cualquier tipo que elaboren, utilicen durante el proceso de producción elementos que pudieran producir contaminación radioactiva.

Ley 949 Saneamiento Ambiental (humano, animal y vegetal-agroquímicos). Código Sanitario.

SANTIAGO DEL ESTERO

Ley 5517. Prohíbe el transporte, almacenamiento, exposición y venta simultánea de productos alimenticios y plaguicidas.

TIERRA DEL FUEGO

Ley 55/92 Establece principios rectores a los fines de perpetuar los ecosistemas como patrimonio común de todas las generaciones, asegurando la calidad ambiental y la diversidad biológica. Decreto 1333/93.

Ley 105/93 Residuos Peligrosos.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.1. MEDIO AMBIENTE

2.1.2. Aspectos Legales

2.1.2.1. Legislación General

FUENTE: Sistema Argentino de Informática Jurídica

LEGISLACION: CODIGOS TEMATICOS DE IDENTIFICACION

MEDIO AMBIENTE	1
SUELO	2
AGUAS	3
VEGETACION	4
TENENCIA	5

2.1.2.1.

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Leyes

Número:

3088.-Estado.-Territorios Nacionales.-Código Rural

para Territorios Nacionales.-Tierras Fiscales.-Ganadería.-

Agricultura.-Aguas.-(2,3,4,5).

2797.-Aguas Cloacales.-Protección del Ambiente Humano.-

Contaminación Ambiental.-Territorio.-Aguas.-Ríos.-

Residuos.-(1,2,3).

4198.-Estado.-Territorio.-Aguas.-Ríos.-Río de la

Plata.-Contaminación.-(1,3).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA: Leyes

Número:

4704.-Convenio entre el Gobierno de la Provincia de Catamarca y el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento.-(3).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA: Leyes Número:

4967.-Producción Agropecuaria.-Sanidad Vegetal.-Tierras Fiscales.-(4).

7343.-Medio Ambiente.-Contaminación Ambiental.-Bienes Jurídicos Protegidos.-Recursos Naturales.-(1).

7497.-Venta de Tierras Fiscales Provinciales.-(5).

7862.-Creación del Comité de Cuenca del Lago Medina Allende o "La Viva".-Política Ambiental.-Ríos.-Contaminación de Aguas.-(3).

7883.-Adhesión a la ley Nacional 23615 de Creación del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento.-(3).

8031.-Creación del Comité de la Cuenca Baja del Río Citalanochita.-Política Ambiental.-Ríos.-Contaminación de Aguas.-(3).

8096.-Bosques y Tierras Forestales.-(1 y 4).

8113.-Ley de Educación.-(1).

8146.-Creación del Comité de Cuenca del Valle del Sol Norte.-(3).

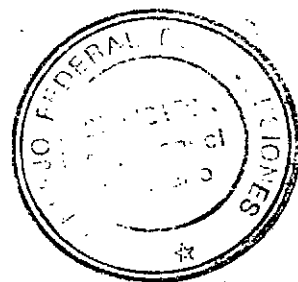
8185.-Creación del Comité de Cuenca del Río Segundo o Xanass.-(3).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS: Leyes

Número: 11

14.-Relaciones Exteriores.-Convenios Internacionales.-

Transporte.-Economía.-Territorio.-Aguas.-(2,3).



LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE FORMOSA: Leyes Número:
831.-Creación de Administración General de Obras
Sanitarias.-(3).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA: Leyes Número:

1027.-Régimen de Conservación y Uso del Agua Potable.-

(3).

1073.-Tierras Fiscales.-Propiedad de Sobrantes de Parcelas.-

(5).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: Leyes Número:

2625.-Concesiones.-Aprovechamiento.-Cauces.-Energía Hidroeléctrica.-Aguas.-Obras.-Hidráulica.-Públicas.-Electricidad.-Irrigación.-Industria.(3).

2821.-Dirección de Tierras Fiscales.-Administración
1920.- Uso Agua Pública.-Inmueble.-Desagues.-Propiedades Rurales.-Derecho de Aguas.-Aprovechamiento.-(3).

5080.-Concesión de Derecho de Agua.-(3).

5081.-Permiso de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas para uso agrícola.-(3).

2993.-Ratificación de Convenio sobre Forestación.-(4).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE MISIONES: Leyes Número:

2061.-Tierras Fiscales: Adjudicación.-(2).

2175.-Fondo de las Tierras Fiscales Provinciales.-(5).

2223.-Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural.-Convenio.-(3).

2625.-Convenio: Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural.-(3).

2827.-Educación.-Programa de Expansión y mejoramiento de la Educación Rural.-(1).

2932.-Sistemas de Áreas Naturales Protegidas.-(1,2,4,5).

2935.-Regularización en la Adjudicación de Tierras Fiscales.-(5).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN: Leyes Número:

1611.-Defensa de los Recursos Naturales.-Constitución Provincial.-Hidrocarburos.-Suelo.-Subsuelo.-Ley Nacional 17319/67.-Permisos.-Explotación.-Concesiones.-Explotación.- (2).

Decreto Ley 1267.-Convenio Interprovincial de Agua Potable.- (3).

Decreto Ley 1306.-Régimen de Tierras Fiscales Rurales.- Municipios.-Recursos Naturales.-Subsecretaría de Recursos Naturales.-Dirección General de Tierras.-Estado Nacional.-Estado Provincial.- (5).

Decreto Ley 1347.-Adhesión al régimen de Ley 22428.- Conservación del Suelo.-Recursos Naturales.- (2).

Decreto Ley 1165.-Mejoramiento Educación Rural.- (1).

905.-Adhesión Provincial al Régimen de la Ley 19288.-

Ley Nacional 19288 y 18875.-Agua Potable.-Saneamiento Rural.- (3).

897.-Código de Aguas.-Agua y Energía Eléctrica.- Irrigación.-Aguas Termales y Terapéuticas.-Energía Hidráulica.-Aguas Subterráneas.-Permiso de Perforaciones.-Exploraciones.-Depósitos Acuíferos.- (3).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Leyes. Número
 104.-Derecho Civil.-Inmuebles Rurales.-Mensura y Amojonamiento.-Cercas o Alambradas.-Medianería.-Reservas Aborígenas.--(5).
 200.-Recursos Naturales.-Río Negro.-Instituto de Desarrollo del Valle Inferior.-I.D.E.V.I.-Deberes.-Atribuciones.-Representación.-Régimen Interno.-Patrimonio.-Obligaciones-Usuarios.-Expropiación.-Inmuebles Rurales.-Programa de Desarrollo Agrícola.--(5).
 279.-Recursos Naturales.-Ley de Tierras.-Tierras Fiscales.--(5).
 285.-Obras y Servicios Públicos.-Departamento Provincial de Aguas.-Régimen del Agua Pública.--(3).
 662.-Economía.-Catastro y Topografía.-Registro.--(5).
 757.-Recursos Naturales.-Ley Forestal Provincial.-Ley de Bosques.--(4).
 1334.-Obras y Servicios Públicos.-Régimen para el Tratamiento y Evacuación de las Aguas Residuales de la Provincia de Río Negro.-Industrias.-Desagües Industriales.-Infraestructuras.--(3).
 1372.-Obras Públicas.-Estado Nacional: Convenio.-Agua Potable: Provisión.-Obras de saneamiento.-Localidades Comprendidas.--(3).
 1372.-Obras Públicas.-Estado Nacional: Convenio para la provisión de agua potable y obras de saneamiento rural.-Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural.-Servicio Provincial de Agua Potable.-Fondos.-

Cooperativas.--(3).

1452.--Recursos naturales.--Tierras y Colonias.--Tierras

Fiscales: Transferencia.--Ambito de Aplicación.--

Mensura.--Inspección.--Baldíos.--Registro de solicitudes.--

Mejoras: Tasación.--Propiedad.--Mejoras No Autorizadas.--

Licitación o Remate Público.--Adjudicación Directa.--

Transferencias.--Concesión: Revocación.--Adjudicaciones

Anteriores.--Adjudicaciones: Límites.--Adjudicaciones Múl-

tiples.--(5).

1492.--Provincia de Río Negro.--Ministerio de Cultura y

Educación de la Nación.--Expansión y Mejoramiento de la

Educación en el Medio Rural.--Convenio.--Funcionamiento.--Man-

tenimiento.--(1).

1499.--Recursos Naturales.--Código Rural.--Guía de Trán-

sito.--(5).

1511.--Provincia de Río Negro.--Provincia de Neuquén:

Convenio.--Servicio Interprovincial de Agua Potable: Neu-

quén, Cipolletti y Fernández Oro.--(3).

1511.--Provincia de Río Negro.--Provincia de Neuquén.-- /

Convenio.--Servicio Interprovincial de Agua Potable.--(3).

1516.--Educación y Cultura.--Consejo Provincial de Edu-

cación: Facultades.--Unidad Ejecutora Provincial del /

Programa de Expansión y Mejoramiento de la Educación

Rural: Creación.--Objetivos.--Funciones.--Integración.--

(1).

1537.--Gobierno.--Recursos Naturales.--Tierras Fiscales.--Zona

de Frontera.--Dirección General de Tierras y Colonias: /

Autoridad de Aplicación.-Funciones.-Inmuebles Comprendidos.-Adjudicaciones: Licitación Pública.-Personas Excluidas.-Rescisión Titular: Fallecimiento.-Cesión de Derechos.-Desalojo.-Provincia de Río Negro: Adhesión Ley Nacional 21900.(5).

1354.-Recursos Naturales.-Agricultura.-Suelos.-Ley de Conservación de suelos.-Ámbito de Aplicación.-Estado.-Provincias: Régimen de Adhesión.-Deberes.-Autoridades de Aplicación de las Provincias.-Provincia de Río Negro: Adhesión Ley Nacional 22428.-(2).

1391.-Recursos Naturales.-Minería E Hidrogeología.-Instituto Tecnológico en Minería y Aguas Subterráneas.-(3).

1743.-Provincia de Río Negro.-Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural.-Convenio de fecha 9-5-83 Provisión Agua Potable Localidades Provinciales.-(3).

1743.-Convenio suscripto entre la Provincia de Río Negro y la Nación Argentina sobre provisión de agua potable a localidades provinciales.-Obras de Saneamiento.-Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural.-Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural: Facultades.-Cuenta Especial.-Comunidades Beneficiarias: Organización.-Entes Locales.-Provincia de Río Negro.-Convenios.-Rendición de Cuentas.-Financiamiento.-Tarifas.-Incumplimientos.-Gas del Estado.-Convenio.-Construcción Easoducto Cordillerano.-Regalías.-Deuda: Cancelación total y Parcial.-Prestación de servicio de gas: Reglamentación.-Estaciones Reductores de Presión: Ubicación.-Obras com-

plementarias.-Ejecución: Plazos.-Licitación.-Gas Natural:
Abastecimiento.-Jurisdicción Impuesto de Sellos: Exención.-
(3).

1903.-Recursos Naturales.-Tierras y Colonias.-Tierras Fiscales
Venta.-Escrituras Traslativas de Dominio.-Deroga Ley 1614.-De
roga Ley 1675.-Deroga Ley 1779.- (5).

1906.-Poder Ejecutivo.-Departamento Provincial de Aguas.-Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado.-Convenio.- (3).

1996.-Provincia de Río Negro.-Servicio Nacional de Agua Potable
y Saneamiento Rural.-Convenio Adicional.- (3).

1996.-Provincia de Río Negro.-Servicio Nacional de Agua Potable
y Saneamiento Rural.-Convenio Adicional.- (3).

1996.-Provincia de Río Negro.-Servicio de Agua Potable y Sanea-
miento Rural.-Convenio Adicional.- (3).

2027.-Obras y Servicios Públicos.-Departamento Provincial de
Aguas.-Presa de Embalse Casa de Piedra.- (3).

2035.-Ministerio de Salud Pública.-Fluoración de las Aguas
Potables Provinciales.-Programa Provincial de Fluoración.-
(3).

2088.-Obras y Servicios Públicos.-Provincias.-Provincia de Río
Negro.-Provincia de Buenos Aires.-Provincia de Neuquén.-Convenios.
Recursos Hídricos.- (3).

Constitución de la Provincia de Río Negro.-Constitución Pro-
vincial.-Preámbulo.-Política Ecológica.-Régimen Econó-
mico.-Régimen Financiero.-Régimen Cooperativo.-Régimen Mu-
tual.-Política de Planificación.-Política de Regionaliza-
ción.- (5).

2316.-Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento CO-

FAPYS.-(3).

2345.-Obras y Servicios Públicos.-Recursos Naturales.-

Obras y Construcciones.-Suelos.-Fundaciones: Estudios Geo-
técnicos.-(2).

2349.-Recursos Hídricos.-Aguas Subterráneas,pluviales y
nieves.-(3).

2380.-Recursos Naturales.-Código Rural.-Anteproyecto.-(2,3,
4,5).

2371.-Aguas.-(3).

2472.-Resechos Peligrosos.-(1,3).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE SALTA: Leyes Números:

4086.-Reservas Indígenas.--(5).

4517.-Reserva Indígena Provincial.--(Embarcación, Departamento de San Martín).--(5).

4607.-Plan de Agua Potable y Saneamiento Rural.--Adhesión ley Nacional 19238.--(3).

5175.-Programa de Saneamiento Ambiental y Mejoramiento Sanitario de la Vivienda Rural, Escuelas y Postas: Convenio.--(1).

5304.-Unidad Económica.--Reglamentación del artículo 2626 del Código Civil.--(5).

5365.-Código de Aguas.--Canon de riego anual.--(3).

5430.-Investigación y Desarrollo de la Geología Minera, Aguas Subterráneas y Recursos Naturales: Convenio.--(3).

5740.-Educación Rural.--(1).

5789.-Plan para la Contaminación de los Recursos Hídricos.--Convenio.--(3).

5789.-Implementación y Desarrollo y Políticas de Control de Calidad de Aguas en Ambito Provincial: Convenio.--(3).

5697.-Propiedades Rurales Privadas.--Normas de Carácter Tributario.--(5).

5973.-Fomento de la Conservación de Suelos.--Adhesión Normas Nacionales.--(2).

6023.-Determinación Valores Fiscales de Parcelas Rurales Desmontadas: Facultad Dirección General de Inmuebles.-Beneficiarios.--(3).

6118.-Agricultura y Ganadería.-Promoción Agropecuaria.-
Convenio.-(2).

6241.-Emergencia Agropecuaria.-(2).

6321.-Regularización de la Ocupación de Tierras en
Molinos: Régimen.-(5).

6393.-Convenio.-(3).

6443.-Parque Nacional los Cardones.-Incorporación
Régimen ley Nacional 22351 Parques Nacionales.-(4).

6469.-Regularización jurídica de Asentamientos
Poblacionales.-Reservas Áreas Ecológicas.-(5).

6570.-Colonización de Tierras Fiscales.-(5).

6597.-Venta Tierras Fiscales.-(5).

6599.-Venta Tierras Fiscales.-(5).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: Leyes Números
9830.-Obras y Servicios Públicos.-Comité de Cuenca.-
(3).
10135.-Estado Provincial.-Territorio.-Aguas.-Ríos.- (3).
10134.-Estado Provincial.-Territorio.-Aguas.-Ríos.- (3).
10194.- Gravámenes.-Código Fiscal.-Impuesto Inmobilia-
rio.- (5).
10171.-Gravámenes.-Agricultura y Ganadería.- (1).
10552.-Recursos Naturales.-Suelos.- (2).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN: Leyes Números:
5294.-Comercio Industria y Minería.-Recursos Naturales.-
Conservación de Suelos.-Adhesión ley Nacional 22428.-
Autoridad de Aplicación.--(2).
5380.-Poder de Policía.-Loteos.--(5).
5637.-Comunas Rurales.-Código Tributario Comunal.-
Normas.-Organo de la Administración tributaria.-Ejecu-
ción Fiscal.-Contribuciones.--(5).

LEGISLACION DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO: Leyes

Número:

380.-Convenio.-Agua Potable.--(3).

372.-Censo Población Rural.--(1,5).

351.-Red de Comunicación de Escuelas Rurales
y Periféricas.--(1).

325.-Censo General de Tierras Fiscales Urbanas y
Rurales.--(5).

237.-Prohibición de Descarga de Fluentes Residuales
Sólidos, líquidos, gaseosos.--(1,3).

480.-Código Fiscal.--(2,5).

146.-Catastro Territorial.--(2,5).

55.-Medio Ambiente.-Recursos Naturales.--(1,2,3,4).

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.1. MEDIO AMBIENTE

2.1.2. Aspectos Legales

2.1.2.1. Legislación General

FUENTE: Congreso Nacional

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: LEYES NUMERO:

5965.-ADLA.-XVIII- p. 1431.-Protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores y a la atmósfera.-Se deroga la ley 5552.- (1)..

Decreto 2009/60.-ADLA XX p. 1180.-Reglamentación de la ley 5965.

Decreto 3125/61.-ADLA XXI p. 1351.-Reglamentación de la ley // 5965.

7846.-ADLA.-XXXII-B p. 2472.-Incremento de multas por infracción a la ley 5965.- (1).

5772.-ADLA XXXVII-B p. 1809.-Incremento de multas por infracción a la ley 5965.- (1).

Decreto 3995/84.-Modifícase el artículo 16º del Decreto Nº // 2009/60.

10408.-ADLA XLVI-C p. 3100.-Incremento de multas por infracción a la ley 5965.- (1).

Decreto 9699/87.-ADLA XLVII-A p. 867.-Modificaciones al decreto 2009/60 sobre multa por infracciones.

Decreto 3870/90.-ADLA LI-A p. 1093.-Reglamentación de la ley / 5965.-Derogación del decreto 670/60, y modificación del decreto 2009/60.

8065.-ADLA XXXIII-B p.2340.-Objeto y atribuciones.-Organización. Gestión y patrimonial económico-financiera y régimen de contrataciones.-Personal.-Régimen del servicio.-Disposiciones generales.- (3).

Código Rural aprobado por Decreto Ley 10081/83.-Libro Tercero.-

De las Aguas y la Atmósfera.-Sección Única del uso agropecuario del Agua y de la Atmósfera.--(1,2,3).

4808.-Autorización al P.E., a invertir una suma para el estudio y proyecto de canalización y limpieza de varios arroyos en el / Partido de la Plata.--(3).

5059.-ADLA VI.-p. 754.-Se destina a una suma a la profundización y limpieza de los arroyos Santo Domingo y Sarandí, en el tramo canalizado del Distrito Avellaneda.--(3).

7091.-Canalización y limpieza del río Arrecife.--(3).

Ordenanza General 168/73.-Se establece la necesidad de la aprobación previa de las instalaciones de agua de los efluentes residuales, por parte de Obras Sanitarias, para la habilitación de inmuebles e industrias.--(3).

8912.-ADLA XXXVII-D p.4141.-Ley de ordenamiento territorial y uso del suelo.-Derogación de las leyes 695, 3468, 3487, 4739, 8809, y 8684.-Implementación del ordenamiento territorial.--(1,2).

9867.--(1).

10128.-ADLA XLIV-A p. 695.-Modificación de los artículos 14, / 26 a 31, 58, 59, 83, 84, 102 y 104 de la ley 8912 de ordenamiento territorial y uso del suelo.--(1,2).

Decreto 1359/78.-Reglamentación de la ley 8912 (artículos 4º, 7º, 37º, 40º, 41º, 43º, 45º, 47º, 48º, 49º, 52º, 54º, 55º, 59º, y 69º, y 101º.--(1,2).

Decreto 1549/83.-ADLA XLIV-A p. 619.-Reglamentación parcial de la ley 8912.--(1,2).

Decreto 2389/87.-ADLA XLVII-C p. 3635.-Texto ordenado de la ley 8912.

10653.-ADLA XLVIII-D p. 3713.-Modificación de la ley 8912.-Ampliación del artículo 44.-(1,2).

8572.-Creación del Sistema Provincial para la Prevención del Medio Ambiente.-(1).

7229.-ADLA XXVI-C p. 1914.-Disposiciones sobre ubicación, construcción, instalación y equipamiento para la habilitación y funcionamiento de establecimientos industriales.-Habilitación sanitaria.-Categorías.-(1).

Decreto 7488/72.-ADLA XXXIII-B p. 2356.-Reglamentación de la / ley 7229.-Derogación de la reglamentación aprobada por decreto 9250/67.-(1).

11307.-ADLA LII-D p. 4910.-Declaración de interés provincial de la puesta en marcha del Proyecto de Educación Ambiental y Ecología Lacustre a implementarse a través de la Dirección General de Escuelas de la Provincia.-(1).

10699/88. Protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola.

11347/92 Residuos Patogénicos. Tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final.

Decreto 3232 Veto parcial de la Ley 11.347/92.

PROVINCIA DE CATAMARCA: LEYES NUMERO:

2480.-ADLA XXXII-C, 4040.-Suelos: Declaración de interés provincial la conservación de los mismos.-(2).

PROVINCIA DE CORDOBA: LEYES NUMERO:

5480.-Instituto de Saneamiento y Ciencias del Ambiente; constitución y objetivos.-(1).

6964.-Ley de áreas naturales de la provincia.-De los ambientes y áreas naturales en general.-De la administración y manejo de ambientes.-De la planificación y funcionamiento de ambientes.-De las categorías de áreas naturales.-(1).

7682.-ADLA XLVIII-D p. 5061.-Clasificación y ordenamiento de la legislación vigente sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.-(1).

8145.-ADLA LII-B p. 2210.-Aprobación del Acta Constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente, suscripto el 31-08-90 en / la ciudad de La Rioja por representantes de varias provincias y la M.C.B.A.-(1).

8197.-ADLA LII-D p. 4972.-Comisión Bicameral para el ordenamiento y clasificación de la legislación vigente relacionada con / el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.-(1).

6072.-Obras hidráulicas: Se dispone transitoriamente un "statu-quo" sobre toda el área de la Cuenca imbrífera aguas arriba del dique La Quebrada a fin de proteger las aguas de su embalse de la contaminación y resguardar su retorno ambiental.-(3).

7343.-ADLA XLV-D p. 4441.-Preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Medio Ambiente.-Título III, Cap. II "De las aguas".-(3).

7717.-ADLA XLVIII-D p. 5071.-Convenio entre el secretario de /

Recursos Hídricos Nacional del Gobierno de la Provincia destinado proveer de agua potable, evacuación de excretas y obras / de saneamiento para las poblaciones de hasta 30.000 habitantes.-(3).

7967.-ADLA LI-B p. 2409.-Declaración de interés público, la conservación y el mejoramiento ecológico del Río Suqufa.-(3).

8129.-ADLA LII-A p. 1259.-Declaración en estado de emergencia / del equilibrio ecológico del Río Calamuchita, en toda la extensión de su lecho y barrancas de cauce, motivado por la extracción de áridos y otros sedimentos menores.-(3).

8130.-ADLA LII-A p. 1259.-Creación del Comité de Cuenca del Río Chocancharava o Cuarto, con la finalidad de tender a lograr el adecuado manejo ambiental en el marco de la ley 7343.-(3).

PROVINCIA DE CORRIENTES: LEYES NUMERO:

3979.-ADLA XLV-B p. 1625.-Normas para evitar la Contaminación Ambiental.-Efluentes líquidos.--(3).

3574.-Protección del suelo, agua y atmósfera.--(1,2,3).

3642.-Conservación de los suelos.-Adhesión a la Ley Nacional.

22428.--(2).

PROVINCIA DE CHACO: LEYES NUMERO:

1323.-ADLA XXXIV-D p. 4009.-Suelos.-Normas de uso y manejo.-(1, 2).-

1478.-Establecimientos faenadores de ganado para el consumo.-... Normas de Higiene y Seguridad.-(1).

2232.-Creación del Instituto de Ecología, Recursos Naturales y Tecnología.-(1).

Decreto 2483/73.-Creación de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.-(1).

PROVINCIA DE FORMOSA: LEYES NUMERO:

Decreto-Ley 10/75.-Ley de fomento, conservación prestación y mejoramiento de los servicios del agua potable, desagües cloacales e industriales y su contralor.-(1,3).

1156.-Adhesión a la ley nacional de suelos 22428.-(1,2).

Decreto 2287/82.-Aprobación del Documento de Base del Programa "Desarrollo Integrado de la Región Ibarreta-Prodir Ibarreta".-(1,2,4).

PROVINCIA DE JUJUY: LEYES NUMERO:

6776/80.-Creación del Centro Operativo para el Control de la Contaminación de los Recursos Hídricos.-(3).

PROVINCIA DE LA PAMPA: LEYES NUMERO:

155.-ADLA XV-B p. 1581.-Conservación del suelo agrícola.--(1,2).

Decreto 758/69.-ADLA XXXIX-B p. 2319.-Reglamentación de la ley 155.--(1,2).

Decreto 1074/81.-Adhesión de la provincia a la ley nacional de suelos 22428.--(2).

Decreto 1088/81.-Designación de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios como autoridad de aplicación del régimen de fomento y conservación de los suelos.--(2).

1352.-ADLA LII-B p. 2346.-Régimen de procedimiento para el amparo de los intereses difusos o derechos colectivos.--(1).

990- Declarado de interés público la forestación en inmuebles rurales ubicados en zonas de secano.

Dec.881/80 - Reglamentación de la ley 990.

Dec. 1074/81 - Adhesión de la provincia a la ley nacional 22.428 de fomento a la conservación de los suelos.

Dec.1038/81 - Designación de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios como autoridad de aplicación del régimen de Fomento a la Conservación de los Suelos.

PROVINCIA DE LA RIOJA: LEYES NUMERO:

4295.-ADLA XLIV-C p. 3334.-Código de aguas.-(1,3).

4741.-Régimen de depuración y ficalización de las descargas de los efluentes líquidos industriales.-(1,3)

5728.-Creación del Consejo Federal del Medio Ambiente,-Aprobación del Acta Constitutiva.-(1).

PROVINCIA DE MENDOZA: LEYES NUMERO:

2686.-Obras de limpieza y profundización de los cauces de los /
Ríos Seco y Tejo.-(3).

PROVINCIA DE MISIONES: LEYES NUMERO:

9.-Declaración de interés público la conservación del suelo agrícola.--(2).

PROVINCIA DE NEUQUEN: LEYES NUMERO:

1314.-ADLA XLII-A p. 1045.-Creación de la Administración Provincial del Agua.-(3).

899.-ADLA XXXVI-A p. 799.-Código de aguas.-(1,3).

1875.-ADLA LI-A p. 1416.-Modificada por ley 1914 ADLA LI-D p. 4865, sustituyéndose los arts., 25, 27, 28 y 29 referentes al organismo de aplicación.-Creación del Consejo Provincial del / Medio Ambiente.-Ley sobre la Protección del Medio Ambiente.-(1, 2,3,4).

PROVINCIA DE RIO NEGRO: LEYES NUMERO:

2342.-ADLA L-B p. 2243.-Normas para la protección del Medio Ambiente.-Estudios de Impacto Ambiental.-(1).

2392.-ADLA LI-A p. 1422.-Régimen de Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos de la provincia.-(1,3).

PROVINCIA DE SAN JUAN: LEYES NUMERO:

5824.-Ley para la preservación de los cursos de agua, suelo y aire y control de la contaminación.-(1,2,3).

Decreto 1638/89.-ADLA L-C.p. 3537.-Reglamentación de la ley 5824. Efluentes industriales.-(1,2,3).

6174.-ADLA LII-B p. 2576.-Adhesión de la provincia al Acta Constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente.-(1).

PROVINCIA DE SAN LUIS: LEYES NUMERO:

3400.-ADLA XXXI-C, 4609.-Protección y conservación del suelo, /
las posturas y los bosques naturales.-(2).

PROVINCIA DE SANTA CRUZ: LEYES NUMERO:

229.-ADLA XXI-B, 2197.-Ley de conservación de suelos y aprovechamiento de los recursos naturales.-(1,2).

PROVINCIA DE SANTA FE: LEYES NUMERO:

4871.-ADLA XIX-B p. 1688.-Lucha contra la erosión y conservación del suelo.-(1,2).

6916.-Establece un plazo de ciento ochenta días para que los establecimientos que arrojen desechos a los cuerpos de agua construyan instalaciones depuradora.-(1,3).

10550.-Modificación del Código de Faltas Provincial penalizando Contaminación de Recursos Hídricos.-(1,3).

Decreto 2320/87.-Creación de la Comisión Coordinadora del Recurso Agua.-(3).

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO: LEYES NUMERO:

5787.-ADLA L-D p. 4644.-Normas para las áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres.-Objetivos generales.-Criterios de conservación.-Ordenamiento de los ambientes.-(1).

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO: LEYES NUMERO:

237.-ADLA XLV-A p. 663.-Efluentes residuales.-Prohibición de su descarga sin previo tratamiento o neutralización.--(3).

Decreto 1056/85ADLA XLI-B p. 1496.-Reglamentación de la ley 237.-
(3).

PROVINCIA DE TUCUMAN: LEYES NUMERO:

6253.-ADLA LI-D p. 5015.-Normas generales y metodología de aplicación para la defensa conservación y mejoramiento del Medio Ambiente.--(1).

4765-14/78.-ADLA XXXIX-B, 2333.-Centro Operativo para el Control de la Contaminación de los Recursos Hídricos.-Creación en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento y Coordinación.--(3).

5192.-Prohibición de la descarga del residuo de la industria azucarera denominado cachaza en los cursos de agua de la provincia.--(3).

Resolución 1929 (CPS): B.O. 16-10-1985.-Prohibición de la descarga de líquidos residuales que pueden causar degradación o / alteración del Medio Ambiente, en los cuerpos de agua provinciales.-Niveles de purificación o neutralización.--(3).

Decreto 25-3.-Conservación del suelo agrícola.-Declaración de / interés público.-Reglamentación de la ley 3571.-Fecha 11 de Enero 1972.-B.O.-27-01-72.--(2).

3571.-ADLA XXIX-B p. 2597.-Conservación del suelo agrícola.--(2).

4742.-Modificación del art., 10 de la ley 3571.--(2).

5047.-Modificación del art., 10 de la ley 3571, modificada por la ley 4742.--(2).

Decreto 25/3 (S.A.)-1972.-Reglamentación de la ley 3571.--(2).

Decreto 922/3 (S.A.)-1981.-Modificación del decreto 25/3 (S.A.).-1981, reglamentario de la ley 3571.--(2).

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.1. MEDIO AMBIENTE

2.1.2. Aspectos Legales

2.1.2.2. Legislación Seleccionada

2.1.2.2. LEGISLACION SELECCIONADA

Provincias de SANTA FE, CORRIENTES,

TUCUMAN y MENDOZA

Anteproyecto

Modelo de Ley

Modelo de Decreto

Modelo de Fundamenta-
ción Legal

SANTA FE. MODELO DE ANTEPROYECTO

Ley Marco de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (algunos arts. destacables).

Art.1 "La presente ley tiene por objeto: establecer dentro de una política de medio ambiente y desarrollo sostenible los principios rectores para defender, preservar, administrar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida en la provincia de Santa Fe".

Art.3 La preservación, conservación, defensa, mejoramiento y recuperación del medio ambiente comprende:

a) el ordenamiento territorial... en función de los valores del ambiente.

b) la utilización racional del suelo, subsuelo, agua... y demás recursos naturales en función de los valores del ambiente y del desarrollo sostenible.

k) la protección y administración de los recursos hídricos ...

l) la sustentabilidad del desarrollo de los asentamientos humanos...

m) la formulación de políticas para el desarrollo sostenible y de leyes y reglamentaciones específicas acordes a la realidad provincial y regional.

ñ) el enfoque integrado de la utilización de los recursos de tierra y la atención de las necesidades agrícolas sostenibles.

p) la conservación y utilización racional de los bosques.

t) la reconstrucción del ambiente en aquellos casos en que haya sido deteriorado por acción antrópica y/o degradante, de cualquier naturaleza.

Autoridad de aplicación: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible.

Art.5. Deberá: a) elaborar la política de medio ambiente y desarrollo sostenible (siguen incisos b) hasta la j)).

Art. 6. Créase el Consejo Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con carácter de órgano consultivo de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible...

Art.9. Créase el Fondo Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con los siguientes recursos:

- a) partidas presupuestarias.
- b) un porcentual de las utilidades de la Caja de la Lotería de la Provincia de Santa Fe.
- c) las donaciones y legados.
- d) el producido por la aplicación de la presente ley de de rechos, tasas, contribuciones y multas.
- e) aportes del Tesoro Nacional.
- f) aportes de Organismos Internacionales o de organizaciones no gubernamentales.
- g) y cualquier otro recurso que eventualmente se establezca.

Art.10. Los recursos del Fondo Provincial del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible serán destinados exclusivamente al desempeño de

las funciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley.

CORRIENTES. MODELO DE LEY.

Ley 4731/93 (Reproducción parcial de su articulado).

Art.1 Declárase de interés provincial a los fines de esta ley, la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de aquellos ambientes urbanos, rurales y naturales y todos sus elementos...

Art.2 La preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende: la utilización racional del suelo, flora, agua y demás recursos naturales en función de los valores del ambiente, defensa de los recursos naturales, la prohibición o represión de actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente.

Art.3 Las personas públicas o privadas, nacionales o internacionales responsables de obras y/o acciones que degraden o sean susceptibles de producir degradación del ambiente o afectar los recursos naturales de la Provincia, quedan obligadas a presentar un estudio de Impacto Ambiental en todas las etapas del desarrollo de dichas obras. Si el impacto comprendiera más de una materia, deberán expedirse los correspondientes Ministerios.

Art.7 Cualquier habitante de la Provincia que se considere afectado por obras contaminantes del Medio Ambiente o recursos naturales, podrá recurrir por la vía de Acción de Amparo a cualquier Juez Provincial a efectos de solicitar la suspensión de las obras...

Art.8 El Estado Provincial podrá accionar judicialmente por reclamo de daños y perjuicios.

TUCUMAN. MODELO DE DECRETO.

Decreto 2204/3 de 1991. Reglamentación del Título III, Capítulo II de la ley 6253/91 de Impacto Ambiental (Su parte dispositiva consta de 26 artículos).

Ley 6253/91. Sanciona el racional funcionamiento de los ecosistemas humanos (Urbano y Agropecuario) y Natural, mediante una regulación dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de Naturaleza-Desarrollo-Cultura, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán.

Decreto 2204/3 de 1991.

Considerando: que es necesario reglamentar el Título III Capítulo II de la ley 6253 de Impacto Ambiental...

que al Consejo Provincial de Economía y Ambiente le corresponde estudiar y autorizar las evaluaciones de Impacto Ambiental reguladas por los arts. 18, 19, 20 y 21 de la ley...

que la evaluación de Impacto Ambiental nace de los países industrializados como herramienta metodológica orientada a buscar una cuantificación sistemática de los efectos que tienen las actividades humanas sobre el medio ambiente...

que se enfrenta la disyuntiva entre el medio ambiente y el crecimiento económico y es necesario compatibilizar. La evaluación de Impacto Ambiental debe realizarse al mismo tiempo que las

demás evaluaciones inherentes a un proyecto (técnicas-económicas-socio-políticas).

que el medio ambiente no tiene porqué ser eximido del enfoque económico...

que hoy no es materia de discusión la estrecha relación existente entre calidad ambiental, desarrollo social y crecimiento económico. Son tres vasos comunicantes y mutuamente dependientes, por lo que, reducirse a una medida de protección ambiental única, destinada a resolver el problema dentro de los límites ambientales y criterios biológicos, es perder la perspectiva global y la posibilidad de una solución abarcativa.

que el espíritu de la ley, marco 6253 no es normativo-represor, sino por el contrario normativo-integrador con cuatro principales objetivos: preservación y control, restauración y mejoramiento ambiental.

que ello debe lograrse con la toma de conciencia y la internalización de los reales problemas socio-económico-ambientales de Tucumán, por parte de todos los miembros del Consejo Provincial de Economía y Ambiente, con una voluntad de diálogo y solidaridad.

MENDOZA . MODELO DE FUNDAMENTACIÓN LEGAL

LA LEGISLACION AMBIENTAL DE MENDOZA POLITICA AMBIENTAL Y REFORMA DEL ESTADO

I - INTRODUCCION

En el año 1989 se sanciona la Ley 5.487 de creación de los Ministerios de Salud, Acción Social y de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, sobre las estructuras del hasta entonces Ministerio de Bienestar Social. Muchas son las causas de su origen. Pero debemos destacar dos, que no son más que perspectivas de un mismo tema: la necesidad de reorganizar los despachos ministeriales del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza y la asunción de la preservación del ambiente como objetivo político del Estado. El primer tema se refiere a la reforma administrativa del Estado; el segundo, es la causa de aquella reforma y se refiere a la relación misma entre el Estado y el medio ambiente.

Hoy, el Estado -postmoderno o postindustrial como insisten en llamarlo algunos sociólogos- que emerge de las profundas transformaciones sufridas en las últimas décadas, se caracteriza por debatirse en una tensión esencial: por un lado, debe asegurar las condiciones para el desarrollo económico-social de la población y, por el otro, debe asegurar el mejoramiento de las condiciones esenciales para el sostenimiento de la vida.

Sin embargo, esta tensión desde una perspectiva teórica no debería suceder. El término ecología conduce por sí mismo, desde sus orígenes, al concepto de economía. En ambos casos se trata de la "casa", el "eco". Mientras que la economía estudia la administración de la casa, la ecología estudia la esencia de la misma. Estrictamente hablando la economía supone el conocimiento de la naturaleza. En consecuencia, el desarrollo económico no debe estar en pugna con el medio ambiente.

Pero, desde el siglo pasado con el apogeo de la Revolución Industrial, la dicotomía descripta comienza a desplegarse alcanzando en el presente niveles sin precedentes de polución y de degradación del ambiente, a tal punto que por primera vez se toma conciencia del peligro común que se cierne sobre la humanidad.

La necesidad vital de recuperar la armonía entre los intereses económicos-sociales y los concernientes al medio ambiente (Agenda 21, Sección I, capítulo 8) es hoy uno de los principales cometidos del Estado. Este objetivo se conoce universalmente con el nombre de desarrollo sustentable.

II. EL CAMBIO POLITICO Y LA PRESERVACION DEL AMBIENTE

1. Antecedentes

Sostenemos que la preservación del ambiente como objetivo político de la Provincia de Mendoza no es un fenómeno coyuntural, un hecho accidental, sino que es la consecuencia de un largo proceso cultural que encuentra en la historia provincial sus verdaderas bases.

La cultura mendocina es la cultura ambiental del oasis, forjada en la necesidad imperiosa de su pueblo de "conocer" el medio para poder administrarlo, preservarlo y desarrollarlo. Los 220 mm. anuales de lluvia, que precipitan en pocos meses del año, exige una economía del recurso hídrico que se obtiene de la nieve acumulada en la cordillera de Los Andes. Cuenta aproximadamente con 360.000 has. sistematizadas para riego de uso agrícola. Superficie que no llega al 3% de la superficie total de la provincia.

Su territorio se encuentra surcado por cinco ríos principales de los cuales ninguno supera los 50 m³/seg. del módulo anual.

A partir de ellos se han formado los oasis irrigados -Oasis Norte, Central y Sur- en los que se desarrolla toda la vida productiva, social y política de los mendocinos. En el Oasis Norte, por ejemplo, se concentra el 70% de la población de aproximadamente 1.500.000 habitantes.

Esto nos conduce a imaginar, particularmente en el caso del Oasis Norte, relaciones humanas de escala urbana y cuasi urbana, no distinguiéndose, como ocurre en la pampa húmeda, una franca transición entre áreas rurales y metropolitanas, sino más bien interacciones similares a las que ocurren en vastas porciones territoriales europeas (Puliafito, José Luis, y otros, "Bases para un programa de gobierno municipal", inédito).

No debe sorprender entonces que desde el siglo pasado haya comenzado a gestarse una sostenida política dirigida a la preservación y correcta administración de los recursos naturales. La Ley General de Aguas del año 1884, fue la primera en su género en el país, y su vigencia actual demuestra el adelanto institucional que significó para la administración del recurso hídrico y el desarrollo de la economía provincial (Magnani, César, "Administración de las Aguas en la Provincia de Mendoza", 1991, inédito).

La creación del Parque General San Martín -dispuesta por Ley 19 de 1896, entonces Parque del Oeste- constituye un ejemplo del empeño de aquella generación para mejorar las condiciones vitales del pueblo mendocino. No debemos tampoco olvidar que la visión de los grandes dirigentes de la época como Emilio Civit, Emilio Coni, Carlos Thays, entre otros, a partir de un hecho trágico como fue el terremoto de 1861, permitió inculcar en el pueblo mendocino la denominada cultura del árbol. Cultura ésta que nos caracteriza urbanísticamente como estilo de vida.

2. La legislación sobre preservación de los recursos naturales

La base de la actual legislación ambiental provincial reside en las normas que, sobre protección de los distintos recursos naturales, se fueron sancionando. La presente obra contiene las principales normas que con el fin de preservar los recursos forestales, faunísticos, el suelo, el aire, etc. rigen en nuestra provincia.

El recurso hídrico merece una especial regulación en nuestra provincia. A la ya mencionada Ley General de Aguas del año 1884, debe destacarse que la Consti-

tución Provincial de 1916 impuso al Departamento General de Irrigación como responsable de todos los asuntos concernientes a la irrigación de la provincia (Art. 188 C.P.). A este órgano constitucional extra poderes debemos gran parte del desarrollo productivo. La legislación hídrica se integra hoy con normas de aguas subterráneas, legislación sobre usos especiales; agua potable, industrial, etc. Sin embargo sus normas no forman parte del presente trabajo en la convicción de que pronto serán objeto de una modificación integral.

Con respecto al recurso aire, debe dejarse constancia de que la reglamentación de la Ley 5.100 (Dec. 2.404-89) marca el comienzo hacia una concepción ambiental de la protección de los recursos naturales que describimos a continuación. En efecto, el proyecto fue preparado por el Programa de Investigaciones Científicas y Desarrollos Tecnológicos sobre Medio Ambiente (PRIDEMA) resultado de un convenio de cooperación entre el Gobierno de Mendoza y la Universidad de Mendoza.

3. La crisis del modelo recursista

Sin embargo, esta etapa del proceso de protección sectorial -por cada recurso natural- fue superada por la característica de los nuevos problemas ambientales. La globalidad, complejidad y dinamismo de las cuestiones ambientales terminaron por agotar el modelo descripto y los efectos de la degradación y del deterioro ambiental comenzaron a ser cada vez más evidentes.

La contaminación hídrica, tanto del agua subterránea como superficial; la degradación de los suelos por desertificación y salinización; la depredación de la flora y de la fauna; la falta de reposición forestal; las explotaciones mineras de alto impacto ambiental -petrolera y uranífera-; el deterioro escénico de las áreas de secano, la contaminación el aire, provocada tanto por las fuentes fijas como móviles; el crecimiento urbano explosivo y caótico del Gran Mendoza; la ausencia de un tratamiento adecuado de los residuos urbanos y los problemas derivados de la ausencia o agotamiento de los sistemas de tratamiento de efluentes cloacales, entre otros problemas, comenzaron a deteriorar la calidad de vida a la que aspira la población mendocina.

Consideramos como el hito institucional más representativo de esta crisis, la acción de amparo interpuesta por un particular en la defensa de la Laguna de Llanquanello, en virtud del cual el juez del 4º Juzgado Civil, Comercial y de Minas de Mendoza, Dr. Javier Balducci, por sentencia dictada en el año 1986, anuló el Dec. 986-85 que disponía el levantamiento de la veda deportiva en la mencionada reserva natural.

4. La institucionalización de la cuestión ambiental

4.1. Ley 5.487 de creación del Ministerio de Medio Ambiente.

Siguiendo a Guillermo Cano respecto de la evolución de las normas ambientales, observamos una primera etapa que comprende las normas orientadas en función de los usos de un recurso (riego, agua potable, navegación, etc.). En una etapa posterior o más evolucionada, encontramos la legislación orientada en función de cada categoría o especie de recursos naturales, coordinando los distintos usos (aguas, minas, forestales, etc.). Luego, tenemos la legislación orientada hacia el conjunto de los recursos naturales. Finalmente están las normas orientadas al entorno como conjunto global, al control ecológico, tomando en cuenta los

ecosistemas. Estas últimas son las normas ambientales en sentido estricto. Estas etapas en la evolución normativa, aunque sucesivas, no se excluyen unas de otras (Cano, Guillermo: "Derecho, Política y Administración Ambientales", Depalma, Bs. As., 1978, págs. 97-98).

El paso al derecho ambiental mendocino tiene lugar a partir de la creación en el año 1989 del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda. Es entonces cuando el Estado de Mendoza asume en su derecho positivo la responsabilidad de preservar el ambiente en forma global y sistemática. Recordemos que nuestra provincia no ha modificado su constitución política que data del año 1916. Únicamente las nuevas constituciones provinciales consagran el derecho a un ambiente sano y equilibrado y la responsabilidad estatal en su preservación.

El proyecto de ley fue iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial. El Lic. José O. Bordón en el mensaje de fecha 22-8-89, que acompañó al proyecto de la legislatura, decía: "La política ambiental comprende, supone y trasciende a las políticas sectoriales sobre asentamientos humanos, protección de la flora y de la fauna, contaminación industrial, protección de las aguas contra la polución... Es la consideración del hábitat y de la naturaleza como un sistema con principios y objetivos propios. Los esfuerzos que se realizan en la prevención del medio ambiente se encuentran desperdigados en la estructura administrativa provincial, careciendo de una concepción única y coordinada, por lo que en muchos casos sus resultados son antagónicos. Por ello, el Estado debe generar una política ambiental que incorpore los principios y las técnicas de este nuevo conocimiento de la realidad, con el fin de proteger, prevenir, recuperar y conservar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia".

Con la Ley 5.487, en forma expresa, el derecho positivo consagra como responsabilidad del Estado provincial "la formulación de la política ambiental" (Art. 5). Una nueva concepción del Estado comenzaba a realizarse.

4.2. La nueva legislación.

Este proceso, entonces, no se agotó con la creación del referido ministerio. Por el contrario, se aceleró y con evidencias del mismo la sanción de un cúmulo de leyes e instituciones propios de la política ambiental. Pues es evidente la necesidad de "normas claras de derecho de observancia general y de cumplimiento inexorable por los gobernados y por los que gobiernan" (López, Joaquín: "Técnica Legislativa Ambiental" en Revista del Foro de Cuyo, Tº 8, pág. 30, Ed. Diké, Mendoza, 1993).

En este sentido corresponde a la Ley de Preservación del Ambiente N° 5.961, dar unidad al nuevo sistema. En ella se contienen los Principios de la Política Ambiental, el Plan y el Informe Ambiental, el Consejo Provincial del Ambiente, la Protección Jurisdiccional de los Intereses Difusos, la Evaluación del Impacto Ambiental. Pero también destacamos como instrumentos jurídicos imprescindibles para cumplir con los objetivos de la política ambiental la Ley 5.917 de adhesión a la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, la Ley 6.044 de Reordenamiento Institucional de los Servicios de Saneamiento y de Agua Potable y de Protección de la Calidad del Agua y la Ley 6.045 que consagra un Régimen para las Áreas Naturales Protegidas adoptando, a tal efecto, la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Sin embargo, no basta la normativa formal racional, sancionada por la pura voluntad política con fuerza o autoridad para imponerla; tampoco aquella puede significar únicamente la traducción de los desnudos factores reales de poder. "Uno y otro extremo nos llevaría a un abstracto formalismo de validez universal o a un

pragmático sociologismo de vigencia efímera". (Pérez Guillou, Dardo: "Nación y Provincias; Competencias. Enfoque histórico-político", en "Atribuciones del Congreso Argentino", Depalma, Bs. As., 1986).

En este sentido, si la política ambiental mendocina surge de la conciliación entre razón, historia y realidad, la legislación pertinente deberá contener aquellas notas a fin de alcanzar continuidad, estabilidad y vigencia.

La presente publicación contiene las normas más relevantes de esta época. Creemos que las mismas son perfectibles y que deberán ser objeto de futuras modificaciones. Pero no dudamos que las mismas representan el esfuerzo de las instituciones mendocinas por armonizar los intereses del desarrollo económico con los correspondientes a la preservación del ambiente.

Aldo Rodríguez Salas - Gladys J. Puliafito
Víctor Guillermo Hernández - Alejandra Obregón

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.2. RECURSO FORESTAL

2.2.1. Consideraciones Generales

Dra. Mirta Santiago

2.2.1.

RECURSO FORESTAL

A.- CODIGO CIVIL: El art. 2873 del C.C., que norma sobre el derecho real de usufructo del bosque, dispone: "el usufructuario de un monte disfruta de todos los provechos que pueda producir según su naturaleza. Siendo monte tallar o de madera para construcción puede hacer los cortes ordinarios que haría el propietario, acomodándose en el modo, porción y épocas a las costumbres del país. Pero no podrá cortar árboles frutales o de adorno o los que guarnecen los caminos, o dan sombra a las casas. Los árboles frutales que se secan o que caen por cualquier causa, le pertenecen, pero debe reemplazarlos con otros".

Esto ha dado lugar a la cuestión que consiste en determinar si la madera que se obtiene de los árboles es un fruto o un producto.

Si se atiende a la característica del monte tallar, está destinado a ser cortado periódicamente; estos árboles una vez cortados se restituyen, por lo que el Código Civil los equipara a los frutos y por ello el usuario dispone de todos los provechos, pudiendo realizar lo que haría el propietario; esto implica a las maderas de construcción, ya que éstas son una especie de ellos.

B.- CODIGOS RURALES: El Código Rural de la Provincia de Buenos Aires (1.865) y los que se dictaron después, son las primeras manifestaciones legislativas sobre bosques; éstos, sin ser un ordenamiento adecuado y completo, legislan sobre la guarda, conservación y fomento de los bosques fiscales, prohíben la corta de maderas y

de leña, la elaboración de carbón de palo y la extracción de hojas curtientes y de materias tintóreas y textiles, sin autorización del Poder Ejecutivo.

B.- LEY NACIONAL BOSQUES (ley Nro.13.273):La jurisdicción legislativa en los bosques y tierras forestales, recoge opiniones divi
didas. Pigretti y Colombo sostienen que es una facultad local. Pe
rez Llana, Galán y Garibotto consideran que se trata de una facul
tad concurrente. Marinelli y Almuni dicen que se trata de una fa
cultad delegada en la Nación.

La CSJN (FALLOS,246:212) sostiene:"la ley 13.273 sobre bosques y tierras forestales, es una ley de policía federal y de alcance nacional, dictada por el Congreso de la Nación como consecuencia de la facultad que le otorga el art.67 inc.16 de la Con
stitución Nacional".

Tanto en el texto originario el art.1ro. de la ley 13.273, como en su modificación por la ley 20.531, se declara de "interés público" la defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques, a
gregando esta última su regeneración y también "la promoción del desarrollo e integración adecuada de la industria forestal".

El decreto de desregulación económica Nro. 2284/91, en su art.66, último párrafo dice:"déjase sin efecto el art.1ro. de la ley 20.531".

Esta es una ley de adhesión, surge del art. 3ro.inc.b)"los

bosques y tierras forestales de propiedad pública o privada ubicados en las provincias que se acojan al régimen de la presente ley "art.4to." Las provincias que se acojan al régimen de la presente ley gozarán de los beneficios...";Art.5to. "El acogimiento al régimen de la presente ley..."

El art.7mo clasifica a los bosques en: a)Protectores, b) Permanentes, c) Experimentales, d) Montes especiales, e)De producción. El art.8vo., 9no. 10mo.,11., 12 los define.

La tierra forestal es definida por exclusión, es decir será considerada tierra forestal toda aquella que, por sus condiciones naturales, ubicación o constitución, clima, topografía, calidad y conveniencias económicas, sea declarada inadecuada para el cultivo agrícola o pastoreo.

Los bosques clasificados como protectores y/o permanentes, cualquiera sea su ubicación, se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación; esta declaración también incluye los inmuebles necesarios para efectuar trabajos de forestación y reforestación; esto será ordenado en cada caso por el Poder Ejecutivo, pese a que la utilidad pública debería ser declarada por ley del Congreso de la Nación.

Régimen forestal común: Este régimen es aplicable a cualquier categoría de bosques de los enumerados en la ley. Se prohíbe la devastación de bosques y tierras forestales y la utilización irraccional de los productos forestales.

Establece asimismo la obligación de la prevención y lucha contra incendios forestales de quien tenga conocimiento de que ésto se ha producido, estando obligada a formular la denuncia; se puede convocar para combatirlo a toda persona entre quince y cincuenta años, que habiten o transiten en un radio de 40 km. del lugar del siniestro; ésto es una carga pública.

Quienes exploten bosques no pueden iniciar los trabajos sin solicitar autorización, acompañando un plan de trabajo.

Las personas que se dediquen al corte, elaboración, extracción, industrialización o comercio de productos forestales, recolección y venta de semillas y plantas forestales, obras de forestación o reforestación, deberán inscribirse y llevar los libro y registros que determinen los reglamentos.

En los bosques de producción que no sean objeto de explotación racional, podrá intimarse para que el explotador presente un plan; en caso de no hacerlo podrá expropiarse su usufructo , procediéndose conforme se hace con los bosques fiscales.

Los planes de forestación y reforestación, deberán ser aprobados por la autoridad, sobre la base de estudios técnicos y económicos y notificada la resolución.

En los bosques protectores dichos trabajos serán realizados por el Estado, directamente o por los particulares con la supervisión técnica de éste.

Toda zona aledaña a bosques protectores, que se encuentre abandonada o inexplorada por un término de diez años, queda sujeta a la forestación o reforestación, pudiendo realizarla el Estado, sin necesidad de expropiación.

En inmuebles dedicados a la explotación agraria, se fomentará la formación y conservación de masas forestales. Para la fijación de médanos y en zonas linderas a caminos, margen de ríos, lagos y lagunas, puede ser declarado obligatorio por el Poder Ejecutivo la plantación de árboles, pudiendo hacerlo la autoridad a costa del obligado.

Régimen especial: Los bosques protectores y los permanentes deben ser inscriptos en un registro, ya sea de oficio o a instancia de parte. Esto implica restricciones al dominio; ya que debe darse cuenta en caso de venta o de cambio de régimen, realizar la explotación sujeto a normas técnicas que se aprueben, pedir autorización para el pastoreo, permitir a la autoridad realizar labores de forestación y reforestación. Los dueños de bosques que hubieren disminuído su renta por el cumplimiento del régimen especial, podrán pedir indemnización.

Bosques fiscales: Los bosques y tierras forestales, que pertenezcan al dominio privado del Estado, son inalterables salvo que se destinen a la colonización.

El aprovechamiento de superficies boscosas mayores de 2.500 ha. se efectuará por concesión, previa licitación pública. En superficies de hasta 2.500 ha., se podrán adjudicar directamen

te para instalar aserraderos o industrias forestales de avanzada.

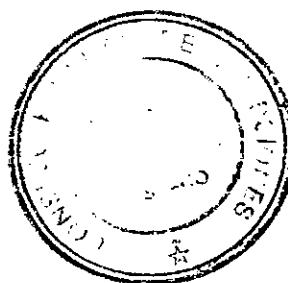
La concesión o permiso forestal estará a cargo del concesionario, y son intransferibles sin previa autorización administrativa.

La explotación de los bosques fiscales queda sujeta al pago de un canon, que se establecerá teniendo en cuenta la especie, calidad y aplicación final de los productos, los factores que determinen el costo de producción, los precios de venta y el fomento de la industrialización de la madera.

Se prohíbe la ocupación de bosques fiscales y el pastoreo, sin permiso de la autoridad administrativa.

Permiso de extracción de productos forestales: Se pueden obtener para extraer 2.500 tn. por persona y año en parcelas delimitadas o en superficies de hasta 250 ha.

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (IFONA): Disuelto por Decreto 2284/91. Creado por ley 20.531, en jurisdicción del Ministerio de Economía, organismo autárquico del Estado, autoridad de aplicación de la ley de bosques. Esta ley 20.531, fue reglada por Decreto Nro.1.553/73 y Decreto Nro.100/74.



2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.2. RECURSO FORESTAL

2.2.2. Aspectos Legales

2.2.2.1. Legislación General

2.2.2.1.

RECURSO FORESTAL

LEGISLACION NACIONAL

Ley 13.273. Defensa de la Riqueza Forestal.

Art.1º Modif. por Ley Nº 20.531 "Declárase de interés público la defensa, regeneración, mejoramiento y ampliación de los bosques, así como la promoción del desarrollo e integración adecuada de la industria forestal".

Reseña abreviada de su contenido: Régimen legal de las Provincias adheridas a la Ley Nacional. Definiciones. Clasificación de Bosques. Régimen de Producción. Régimen de Bosques Protectores, Permanentes y Experimentales. Desmonte, habilitación de tierras para uso agrícola. Protección Forestal y del Suelo - Transporte - Administración Forestal - Control Forestal - Contravenciones y Penalidades - Fondo Forestal - Impuestos Forestales - Fomento - Forestación y Reforestación - Prevención y Lucha contra incendios.

Adhesión a la Ley 13.273/48 de las siguientes provincias:

Provincia de Buenos Aires

Ley Nº 5.699.

Provincia de Catamarca

Ley Nº 1.576.

Provincia de Córdoba

Ley Nº 4.327.

Provincia de Corrientes

Decreto Nº 1.501/51

Provincia de Entre Ríos

Ley Nº 3.623

Provincia de Jujuy

Ley 114/49.

Provincia de La Pampa

Ley Nº 44/53.

Provincia de La Rioja

Ley Nº 3.974.

Provincia de Mendoza

Ley Nº 2.088.

Provincia de Neuquén

Ley Nº 65/59.

Provincia de San Luis

Ley Nº 2.323.

Provincia de Santa Cruz

Ley Nº 1.038

Provincia de Santa Fé

Ley Nº 3.657.

Provincia de Santiago del Estero

Decreto Serie B Nº 6/50.

Se mencionará oportunamente la adhesión de otras Provincias.

Ley 20.531. Reglada por los Decretos 100/74 y 1553/73

Poder Ejecutivo Nacional Decreto Nº 31.169/49

Poder Ejecutivo Nacional Decreto Nº 2131/63

Ley Nº 19.995/72 Modif. Arts. 39-41 y 42 de la Ley 13.273.

Poder Ejecutivo Nacional Decreto Nº 100/74

Ley 21.111/75 sustituye Art. 59 Ley 13.273/48

Poder Ejecutivo Nacional Ley 21.990/79 sustituye Arts. 65 y 70 de la Ley 13.273/48

Poder Ejecutivo Nacional Decreto 2148/90 Diversidad Biológica - Reserva Natural Estricta.

Poder Ejecutivo Nacional Decreto 2149/90

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Resolución 778/92 Promoción de Plantaciones Forestales.

Régimen Promocional destinado a incrementar la Producción Agropecuaria en Tierras Rurales de baja productividad. Ley 22.211.

Decreto 1848. Decreto 2392 - Resolución 571.

Decreto 2284/91. Desregulación de la Economía. Art.66 Deja sin efecto art.19 de la Ley 20.531. Sustituye el art.19 y otros de la ley 13.273/48.

Ley 21.695/77 Estímulos Fiscales para la Forestación.

Los planes de forestación y/o reforestación deberán ser presentados con la firma de un profesional responsable y adecuarse a las normas que para su presentación y aprobación dicte el Instituto Forestal Nacional. Deberán asimismo, en todos los casos, informar sobre los siguientes aspectos: a) Ubicación del predio donde se realizarán las tareas; b) Dimensión del predio; c) Características ecológicas; d) Distancia respecto de establecimientos instalados que consumen madera; e) Especies a plantar; f) Densidad por hectárea; g) Iniciación de las plantaciones; fechas de: presunta de raleo y presunta de corte.

Código Rural Ley 10.081/83 . Art. 206 2da. parte.

Se entiende por tierra forestal a toda aquella que por su naturaleza, ubicación o constitución, clima, topografía, erosionabilidad, fertilidad, calidad y utilización económica, sea inadecuada para cultivos agrícolas o pastoreo y apta para la forestación y toda otra que sea declarada necesaria para el cumplimiento de los fines del presente título.

Art.220. Los bosques protectores y permanentes quedan sometidos a un régimen especial forestal que impone para sus propietarios las siguientes obligaciones: a) Comunicar al organismo competente la venta o cambio en el régimen de tenencia del inmueble; b) Conservar y repoblar el bosque en las condiciones técnicas que se requieran, siempre que la repoblación fuera motivada por aprovechamiento o destruc-ción imputable al propietario; c) Realizar la explotación de conformidad con las normas técnicas que se establezcan; d) Recabar autoriza-ción previa para el pastoreo en el bosque o para cualquier género de trabajo en el suelo o subsuelo que afecte su existencia; e) Permitir a la autoridad forestal la realización de las labores de forestación y reforestación.

CATAMARCA

Ley 1443/53 Zona de Reserva.

Decreto 1368/53.

Decreto 2507/57 Reglamenta la Explotación de Bosques.

Decreto 2225/64. Prohibición de quema intencional de pastizales.

Decreto 2984/59 Implanta el uso de la guía forestal.

Decreto Nº 3153/64 Restringe el corte de árboles en propiedad privada.

CORDOBA

Decreto Ley Forestal 2111/56. Art.3º Inc.a) e inc.c).

Ley 6644 Modifica Decreto 2111/56 (Multas en bosques y zonas forestadas).

Leyes 6344 y 6615 Modif. del Decreto Ley 2111/56.

Ley Forestal 8066/91.

Ley 8311/93 Modif.Art.69 de la Ley 8066/91.

Ley 4296 Régimen de bosques.Modifica Ley 4186.

Ley 4405 Fondo de la Administración Provincial de Bosques y Suelos.

Ley 5268. Establece la organización de un consorcio para demonte en territorio de la Provincia.

Decreto Reglamentario 4519/71.

Decreto 9445. Crea la división de defensa y fomento forestal en la División Agropecuaria.Organigrama y funciones de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

CHACO

Ley 2386/79 Ley Forestal Provincial.Capítulo XII "Del desmonte y el equilibrio ecológico".Arts.37,38,39,40 y 41.

Decreto 1195/80. Reglamenta la ley 2386/79 .Forestación,reforestación, manejo racional del bosque nativo.

Ley 3534/89 Modif.Ley 2386/79.

Resolución Nº 111/89.Ministerio de Agricultura y Ganadería Provincial. Modif.por Circular Nº 8 (Manejo Racional del Bosque).

Decreto 1829/92 (Reserva de la Biósfera-Chaco).

Anexos y Circular Nº 14.

JUJUY

Decreto 676/72 Aprovechamientos Forestales.

Decreto 5113/78 Modif.676/72 y reglamenta los desmontes.

Proyecto Ley Provincial de Defensa de la Riqueza Forestal.

Ley 3670 Bosques y Forestación. Sanciones por infracciones.Adhesión a las Leyes Nacionales 19.995 y 21.900.Modif.de la Ley 13273/48.

Decreto s/n/41. Reglamenta la Ley 1303 de impuesto a la explotación de bosques.

Decreto 36 H/65.Declaración de bosques permanentes y protectores en relación a los bosques naturales de la margen izquierda del Río Grande.

Decreto 5828/69. Dirección Provincial de Bosques.Competencia de la Administración. Contralor y Vigilancia de los Bosques Fiscales.

Ley 4542.Protección del árbol y del bosque.

LA PAMPA

Decreto 218/55 Reglamenta ley de adhesión a la ley 13.273/48.

Ley 990/80 Forestación de Inmuebles Rurales en zonas de secano (de interés público).

Decreto 744/83 Implantación de un plan forestal en la Provincia.
Ley 1321/91. Sistema Provincial en áreas protegidas.
Decreto 92/92 específico sobre sanciones.
Decreto 2735/84 Establece la donación de material leñoso proveniente de la apertura de picadas.
Ley 963/79 Autoriza al Poder Ejecutivo a construir picadas para la prevención de incendios.
Decreto Nº 239/88. Estructuración del Ministerio de Asuntos Agrarios.
Decreto 881/80. Reglamenta la Ley 990.

LA RIOJA

Ley 1022 Explotación de Bosques Fiscales.
Ley 1372 Policía Forestal (modifica Ley 1149)
Ley 2857/62 Provincial de Bosques.
Ley 3619 Zonas de Reserva Forestal.
Disposición 1095/53 de la Administración Nacional de Bosques
Disposición 053/85 Dirección Recursos Naturales Renovables
Resolución Nº 53/85 Régimen Forestal y Permisos de Extracción de Leña: Seca.
Decreto Ley 16.836/62 Régimen Forestal (Deroga Ley 2857).
Decreto 18294/70 Bosques y Forestación (Guías, traslado de leña y demás productos forestales).
Decreto 19.926/71 Bosques y Forestación. Otorgamiento de permisos para el aprovechamiento forestal.

MENDOZA

Ley 2088/52. Exención impositiva a bosques naturales y/o artificiales; reglamentación de la ley Nac. 13.273.
Decreto Ley 4258. Modif. de la Ley 2088/52. Art. 1º y Ley 3529. Art. 9º
Ley 3524. Exención impositiva a bosques naturales y/o artificiales. Modif. de la ley 2088/52 Reglamentaria de la Ley Nac. 13.273.
Ley 3529 Art. 9º Modif. art. 1º de la Ley 2088/52
Decreto 2764/54 Reglamenta la ley 2088/52 sobre Administración Provincial de Bosques.
Decreto Ley 4258 Modif. de la Ley 2088/52.
Decretos Ley 19.995, Ley 20.531, Decreto Ley 21.990 Modif. de la Ley 13.273/48.
Decreto 311/52 Adhesión al régimen de la ley nacional 13.273 de bosques.

Decreto 2236/54 Derechos para la aplicación de la ley de bosques.
Decreto 1052/55 Creación de la Guía Forestal.
Decreto 2987/65. Exenciones.
Decreto 3283/79. Bosques y Forestación, requisitos para obtener exenciones impositivas previstas en el decreto 2987/65.
Decreto 2987/65 Exención impositiva a bosques naturales y/o artificiales. Reglamentación de la Ley Nac. 13.273.
Ley 4406 Bosques y Forestación. Normas de Protección y Conservación.
Decreto Ley 21695. Crédito Fiscal.
Ley 4468. Régimen de Subsidio Forestal para inversiones.
Decreto 654/81. Subsidio Forestal para inversiones; reglamentación de la ley 4468.
Decreto 1831/82 Subsidio Forestal para inversiones, modif. del decreto 654/81.

Decreto S/N. 40. Reglamenta la Ley 1360 de defensa y fomento forestal.

Ley 4899. Infracciones forestales. Actualización de multas.

Ley 5733. Realización de inventario forestal por el P.E. Provincial a través del Ministerio de Economía, Dirección de Bosques y Recursos Naturales Renovables.

Ley 5961. Protección del medio ambiente, fauna, flora, forestación y protección del árbol.

Resolución 1135/93. Defensa del monte nativo. Normas para la racional explotación y la prevención de siniestros (incendios).

NEUQUEN

Ley Forestal 1890/91. Decreto 3013/91. Ley 547. Riqueza forestal. Creación del Ente Forestal de Neuquén (EFONEU).

Ley 1891/91. Decreto 3014/91.

Régimen de Ahorro de Producción Forestal.

Ley 1892/91.

Régimen de Inversión para producción forestal.

Ley 1893/91. Decreto 3016/91.

RIO NEGRO

Ley Forestal Provincial Nº 757/72. Adhesión a la ley 13.273/48.

Deroga Ley 487.

Ley 1500 Modif. de la ley Nº 757.

Ley 2160/87. Creación del servicio de prevención y lucha contra incendios forestales.

Decreto Nº 601. Transgresiones Forestales.

Ley 1235/77. Bosques y forestación, sanciones por infracciones, modif. art. 39 de la ley 757.

Ley 210. Plantación obligatoria de árboles por los ocupantes de tierras de pastoreo.

Decreto 132/73. Fondo forestal, reglamentación del art. 14 de la ley 757 que lo crea.

Decreto 377/74. Fondo forestal, modificación del decreto 132/73 Reglamentario del art. 14 de la ley 757.

Decreto 446/75. Bosques y Forestación (reglamenta art. 2º ley 757)

Decreto 130/81. Convenciones Forestales (reglamenta art. 39 y 40 Ley 757).

Ley 2022. Autoriza al Poder Ejecutivo para constituir una Sociedad Anónima con partic. Estatal mayoritaria con el objeto de prestar servicios de forestación, extensión forestal, manejo y explotación de recursos forestales y actividades conexas.

Decreto 558/64. Aforos forestales.

Decreto 134/75 Productos forestales en bruto. Prohibición de su salida de la Provincia.

Digesto Forestal. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Minería (1978).

SALTA

Decreto 2123/73 Autoriza el desmonte.

Ley 5242/78 Adhesión a la ley 13273/48. Deroga la ley 4435. Modif. por la 5282/78 y 5429/79.

Resolución 372/80 Extracción forestal en propiedad del FISCO.

Ley 6635/91. Régimen de Promoción Forestal.

Decreto Ley Nº 9/75 Código Fiscal (Artículos inherentes al aprovechamiento forestal).

Ley 4435. Bosques y forestación. Adhesión a la Ley Nac. 13.273.
Decreto Nº 580/79 Explotación Forestal en Bosques Privados.
Resolución Nº 372/80. Propiedad Privada colindante con Tierras Fiscales.
Decreto 2876/44 Reglamenta la Industria Forestal en la Provincia.
Decreto 1851/50 Normas para la explotación de bosques fiscales.
Decreto Ley 2067/57 Régimen de Concesión de Bosques Fiscales.
Decreto 2404/50. Modifica el Decreto Reglamentaria de la ley de bosques.
Decreto 6399/51. Normas para la explotación de bosques de propiedad privada.
Decreto Ley 665/57. Requisitos para la concesión de Bosques Fiscales.

Decreto Ley 130/56. Convenio con la Administración Nacional de Bosques para la ejecución de obras de forestación y reforestación.
Decreto Ley 64/62. Dirección de bosques y fomento agropecuario de la Provincia.
Decreto 860/84. Delegación de facultades en los municipios.
Decreto 2453/86. Convenio Interprovincial para la formación del comité forestal región NOA celebrado con Tucumán y Jujuy.
Ley 896. Declara Zona de Reserva Forestal.
Ley 6635 Régimen de promoción forestal.

SAN JUAN

Ley 1837 Modif. ley 545 Fomento de los Bosques.
Ley 4885 Establece el Fondo Provincial de Bosques.

SAN LUIS

Decreto 2126 Decl. Bosques Protectores y Permanentes.
Ley 4848/89 Régimen Forestal. Defensa. Regeneración. Mejoramiento y Ampliación de los Bosques. Aprovechamiento racional y desarrollo de la industria forestal.
Ley 4884/90 de Fomento Forestal. Art. 2º. Inc. d) Serán objeto de fomento: la implantación o conservación de bosques útiles para la protección de cuencas, márgenes de cursos de agua, suelos en áreas erosionadas o erosionables, y todas aquellas áreas que a criterio de la autoridad de aplicación necesiten preservación.
Decreto Reglamentario 541/91.
Decreto Ley 905/57. Normas para los aprovechamientos forestales.
Anteproyecto de ley de fomento forestal. Misiones y funciones de la Dirección Provincial de Ecología y Forestación.
Ley 3469 Protección y conservación del suelo, las pasturas y los bosques naturales.

SANTA CRUZ

Ley 65/58. Régimen Forestal y sus modif. Ley 90-Ley 1154/77 Bosques y Forestación. Sanciones por infracciones modif. arts. 51 y 56 de la ley 65.
Decreto 655/59
Ley 2190/90, y Decreto 1868/90. Prevención y manejo de incendios forestales.
Proyecto de ley 175/88.
Decreto 469/79 Fondo Forestal.

SANTIAGO DEL ESTERO

Ley 2125/50 aprueba Decreto Serie B Nº 6.

Ley 2775 modifica ley 2701/59 de concesión de bosques fiscales para aprovechamiento.

Decreto acuerdo Serie B Nº 13/77. Creación del Registro Prontuario Forestal.

Ley 5113/82. Adhesión a las leyes 19.995 y 20.531.

TIERRA DEL FUEGO

Ley Provincial Nº 145/94.

Decreto Nº 750/92. Dominio y Administración del Recurso Forestal.

Decreto 1169/92. Productos Forestales Fiscales.

Resolución 504/92. Modalidades Trat. Producto Forestal

Resolución 505/92. Transporte.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.2. RECURSO FORESTAL

2.2.2. Aspectos Legales

2.2.2.2. Legislación Seleccionada

Dra. Mirta Santiago

LEGISLACIÓN SELECCIONADA

La ley de Bosques ha contado con la adhesión de la mayoría de las provincias del país.

La ley 13.273, ha cumplido una etapa importante en el desarrollo forestal; se necesita en general una nueva orientación legislativa en beneficio de las forestaciones sustitutivas.

Por ello en este título se ha analizado la legislación provincial que se encuentra fuera de la ley nacional.

- TIERRA DEL FUEGO. Lo más significativo se ha encontrado en esta provincia, en la ley provincial Nro.145, que fuera sancionada el 1ro. de julio de 1994.

Esta ley en su artículo 1 considera al recurso forestal como "patrimonio natural y bien social heredado y transmisible a las generaciones venideras, en el marco de los principios del desarrollo sustentable".

Declara de interés público provincial los "bosques, su defensa,mejoramiento,regeneración, uso integral,aprovechamiento,planificación silvícola, el desarrollo,fomento e integración adecuados de la industria forestal y los suelos forestales".

Esta ley dedica el Capítulo IV al Régimen de los bosques de producción. Establece en su art.9 cómo se organiza el aprovechamiento de dichos bosques, a través de permisos,concesiones por adjudicación directa, concesiones por adjudicación mediante lici

tación y el mecanismo dependerá de la superficie afectada.

El art.11 tiene la peculiaridad que el plan de trabajo que debe presentar el explotador forestal tendrá que ser aprobado, además de por la autoridad de aplicación de la ley, también por la autoridad de aplicación de la ley provincial del medio ambiente.

El art.16 prevé contenidos mínimos que deberán contener los planes para el aprovechamiento de áreas sujetas al uso silvo-pastoril.

El Capítulo V, referido al Régimen Forestal especial, en su art.18 impone cargas y condiciones cuando un bosque privado sea declarado como protector, permanente, experimental y degradado.

Impone la obligación de conservar los bosques permanentes y protectores y solamente podrán ser aprovechados bajo condiciones técnicas que contemplen prácticas silvícolas mejoradoras, que se ajusten a su función específica de protección y conservación. Los bosques que se declaren degradados podrán ser sometidos a prácticas silvícolas mejoradoras a efecto de cambiar su situación.

Se fomentará la formación de bosques especiales.

El Capítulo VI, de las forestaciones, permite declarar obligatoria la forestación o reforestación de áreas determinadas, previo estudio técnico.

El capítulo VIII, de la protección ambiental, prohíbe la

devastación de bosques así como también el pastoreo en las áreas de regeneración y bosques degradados.

En caso de incendio forestal en el territorio de la provincia, subordina a todos los organismos e instituciones municipales, provinciales o nacionales o privados que tengan su asiento en el ámbito de la provincia, a la autoridad de aplicación de la presente ley.

El capítulo IX, de fomento forestal, propone medidas y acciones de estímulo.

El capítulo X dispone la creación de un fondo forestal en el ámbito del Ministerio de Economía, a depositarse en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego y está afectado a costear gastos e inversiones que demande el cumplimiento de la ley y enumera el origen de los recursos que lo integran.

El capítulo XI trata sobre la autoridad de aplicación; en su art.33 designa como tal a la Dirección de Bosques, que actuará en la esfera del Ministerio de Economía. Será la Dirección de Bosques la encargada de coordinar y ejecutar la política forestal que determine el Poder Ejecutivo Provincial.

El capítulo XII crea la Comisión Provincial de bosques, que tiene la particularidad de conciliar los intereses de la industria del sector, con las políticas a adoptarse en la materia, proponiendo a la Dirección de Bosques las medidas necesarias para

superar los problemas del sector forestal.

El capítulo XIII trata de las contravenciones y sanciones. Los arts.46 y 45 definen las primeras y el art.48 prevee penas y sanciones.

El capítulo XIV trata sobre disposiciones transitorias en tre las que se destaca la realización de un inventario forestal de la provincia dentro de los tres años de promulgada la ley.

- NEUQUEN . La ley Nro.1890, del 8 de agosto de 1991.

Esta ley declara de interés provincial el uso óptimo, la defensa, mejoramiento, enriquecimiento, ampliación y aprovechamiento de la riqueza forestal, así como el fomento de los bosques de implantación y de la industria forestal.

En su artículo 3ro., deja sometido a la ley a los bosques y tierras con aptitud forestal, ubicados en el territorio de la provincia tanto en tierras de propiedad pública como privada y los bosques protectores ubicados en territorio provincial.

El artículo 4to., define los términos que se emplean.

El capítulo II, de la autoridad forestal, en su art.5to. establece como autoridad forestal de la Provincia, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, a través de la Dirección General de Bosques y Parques Provinciales. Funcionará también un Consejo de Pro moción Forestal -ad honorem-. La Subsecretaría de Asuntos Agra-

rios, a través de la Dirección General de Bosques y Parques Provinciales procederá a elaborar y actualizar mapas de clasificación de bosques de la Provincia. Establecerá además normas básicas para el manejo de cada tipo de bosque y supervisará los planes forestales que se realicen en la Provincia por entidades públicas y privadas.

El Capítulo III, de la promoción forestal, comprende la promoción de la forestación y reforestación de todas las áreas aptas del territorio provincial. El enriquecimiento, la ordenación y el aprovechamiento racional e integral de los bosques nativos e implantados. Los productos y subproductos de los bosques nativos e implantados. La regulación de la actividad forestal que derive del aprovechamiento de los bosques maderables. En el manejo de los bosques se contemplará la conservación de la fauna y flora autóctona.

El art. 12 prevé medidas de desgravación impositiva, y apoyo crediticio.

El art. 13 declara exentas del Impuesto Inmobiliario a las tierras que se destinen a la implantación de bosques, así como el incremento del valor fundiario emergente de forestaciones.

El art. 14 ampara el fomento y radicación de industrias que tiendan al aprovechamiento integral de la madera.

El Capítulo IV Regimen de los bosques nativos de propiedad privada, los somete a la letra de la ley 13.273.

El art.17 crea en el ámbito de la Dirección General de Bosques y Parques Provinciales un Registro de Obrajeros, en el que se inscribirá a toda persona física o jurídica que realice tareas de aprovechamiento forestal de bosques nativos.

El Capítulo V, de Tierras Forestales Privadas, regla qué tierras podrán ser convertidas en tierras de cultivo agrícola o forestal; se deberá solicitar la autorización a la autoridad competente, con carácter de declaración jurada, proponiendo un plan de trabajo avalado por profesionales habilitados. La autoridad de aplicación se tendrá que expedir en un plazo de 60 días corridos a partir de la presentación.

El Capítulo VII, de Tierras Forestales Fiscales, establece las condiciones para que el Poder Ejecutivo entregue tierras con aptitud forestal en arrendamiento, a particulares o a instituciones oficiales, o a empresas de economía mixta en las que el Estado Provincial participe con capital mayoritario.

También, el Poder Ejecutivo podrá ceder a las municipalidades o establecimientos escolares ubicados dentro del área de tierras fiscales, superficies que deban dedicarse a ser forestadas y posteriormente aprovechadas, con el fin de atender a sus futuras necesidades presupuestarias.

El Capítulo VIII establece el Régimen de Protección de la Especie Araucaria Araucana. El art.25 establece que los ejemplares aislados y las masas puras de la especie Araucaria Araucana, "Pehuen", que vegeten en el territorio de la Provincia, tendrán el tratamiento de bosques permanentes.

El art.27 prevee multas para quien transgreda lo prescripto por la ley sobre dicha especie. El art.30 establece que anualmente se destinará un porcentaje del Fondo Forestal para trabajos de investigación, forestación y reforestación con Araucaria Araucana.

El Capítulo IX, Régimen de los Bosques Implantados. El art. 31 crea en el ámbito de la Dirección General de Bosques y Parques Provinciales un registro de forestadores, en el que se inscribirán las personas físicas o jurídicas que realicen tareas de forestación en jurisdicción provincial.

Por el art.31 la autoridad forestal se reserva el derecho de coordinar las tareas de inspección de la implantación y aprovechamiento.

El Capítulo X, Viveros y Semilleras Forestales. El art. 35 crea en el ámbito de la Dirección General de Bosques y Parques Provinciales el Registro de Expendedores de Semillas y otros medios de propagación forestal; se obliga a todos los viveros y comercios de semillas forestales a inscribirse, crea un derecho de inspección a viveros de plantas forestales, también extenderá el

certificado de calidad ambiental.

El Capítulo XI se ocupa de los titulares de las concesiones. Su único artículo establece las condiciones de aprovechamiento a las que quedarán sometidos los bosques y tierras fiscales que integran el dominio privado del Estado. Entre otras condiciones se deberá licitar públicamente las concesiones de tierras que excedan las 10ha. La adjudicación directa solo será posible a empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado provincial.

Capítulo XII, Planes de Manejo y Ordenación. Obligaciones de los Concesionarios. El art.41 establece como condición previa a la iniciación de trabajos del bosque nativo de propiedad fiscal la realización de tareas de deslinde, amojonamiento del terreno, relevamiento de bosque y presentación de un plan de manejo confeccionado por profesional habilitado, que deberá ser sometido a la aprobación de la autoridad forestal. Todo ello será por cuenta del concesionario. Estas concesiones serán intransferibles, sin previa autorización de la autoridad administrativa.

Las concesiones otorgadas caducarán automáticamente en caso de incumplimiento de cualquiera de los aspectos del plan aprobado. Los concesionarios no tendrán derechos sobre las mejoras realizadas en el predio (excepto instalaciones industriales).

Capítulo XIII, Contralor forestal, a su vez subdividido en cuatro títulos: Sistema de medición, Derecho de Inspección, Obras y tenencia de productos forestales y Transporte y Guías Fores

tales.

Como sistema de medición, se adopta el métrico decimal, por Derecho de Inspección deberá abonarse una suma del 3% de los precios promedios de la madera, con corteza, sobre camiones y en el monte.

Créase en el ámbito de la Dirección General de Bosques y Parques Provinciales, un Registro Permanente de Concesionarios de Bosques fiscales, privados e industriales forestales, pertenecientes a personas físicas o jurídicas.

Los productos forestales no podrán ser transportados sin las correspondientes guías, que tendrán carácter de documento público.

Capítulo XIV Prevención y Lucha Contra Incendios. El organismo de aplicación deberá fomentar la creación de consorcios para la prevención de incendios.

Los concesionarios de bosques fiscales, deberán equiparse para combatir incendios, como condición para mantener la concesión.

En bosques fiscales manejados directamente por el organismo de aplicación deberá disponerse lo necesario para equiparse a efectos de combatir incendios.

El organismo de aplicación deberá propiciar cursos de ca

pacitación y adiestramiento para el personal de operación y de conducción en la prevención y lucha contra incendios, así como también cursos de divulgación y enseñanza para la sociedad en general.

Quedan prohibidas las instalaciones industriales, sin autorización administrativa previa del organismo de aplicación, en el interior de bosques o zonas circundantes, a efectos de prevenir incendios.

Capítulo XV, De Los Aforos y Demás Derechos.

El aprovechamiento de bosques fiscales queda sujeto al pago de un aforo.

Queda exenta del pago del aforo, la extracción de productos y sub-productos destinados a organismos educacionales, de salud, seguridad, municipios o centros provinciales que determine el Poder Ejecutivo, siendo prohibida su posterior comercialización por los mismos.

Capítulo XVI, Infracciones y Penalidades.

La base para fijar las multas por la violación a lo dispuesto en la ley es el valor del aforo o el del mercado según el caso, multiplicando entre 5 a 100 veces esos valores.

La ley prevee como pena accesoria la caducidad de la concesión y también inhabilitación de los profesionales intervinientes.

La prescripción de las acciones se produce a los cinco años. La prescripción del pago de multas a los tres años.

Capítulo XVII, Investigación Forestal. La Dirección de Bosques y Parques Provinciales tendrá a su cargo el desarrollo de programas de investigación que serán solventados con aportes del Fondo Forestal creado por esta ley.

Capítulo XVIII, Fondo Forestal. Este capítulo regula el mecanismo de asignaciones, erogaciones, ejercicio y administración de la cuenta "Fondo Forestal".

Se someterá a consideración del Ministerio de Economía Provincial, los planes de prioridades e inversiones.

Capítulo XIX, De los Profesionales. Las incumbencias profesionales para actuar dentro del marco de la ley, son la de Ingeniero Forestal o Agrónomo que acredite experiencia forestal.

Se crea en el ámbito de la autoridad de aplicación un Registro de técnicos forestales, habilitándose a los mismos para la ejecución de los planes de ordenación, forestación, manejo de viveros, dirección ejecutiva de lucha contra incendios forestales, manejo de aserraderos y toda otra tarea de conducción, relacionada con el sector forestal.

Cuando los planes presentados se financien con créditos, exenciones impositivas y/u otras formas de fomento concedidas por el gobierno provincial, el profesional será solidariamente responsable con el titular del plan, por el incumplimiento del mismo y la inobservancia de esta ley.

Cuando el profesional sea sancionado con suspensión por la autoridad de aplicación, ésta deberá notificar en un plazo de tres días al titular del plan y éste nombrar un profesional sustituto en el plazo de treinta días a partir de la notificación.

- LA PAMPA, por medio de la ley 990 y su Decreto Reglamentario Nro. 881/80, declaró de interés público la forestación en inmuebles rurales ubicados en zonas de secano.

Para ello se instituye un régimen de cooperación mediante convenios entre la Provincia y los productores agropecuarios que deseen adherir; las plantaciones forestales se orientarán a la formación de bosques, con el propósito de protección, producción o mixto.

La provisión de plantas producidas en los viveros forestales de la provincia y los trabajos de plantación, se realizarán sin cargo para los productores agropecuarios comprendidos en el régimen de dicha ley.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.3. RECURSO AGUA

2.3.1. Consideraciones Generales

Dra. Mirta Santiago

2.3.1.

RECURSO AGUA

La Constitución Nacional en el art.26 se refiere a la libre navegación de los ríos. El art.12 garantiza la gratuidad de la navegación ya que se encuentra prohibido el cobro de gabelas. El art.14 reconoce el derecho a navegar que tienen todos los habitantes del país, el art.67 inc.10 le da al Congreso la facultad de reglar la libre navegación de los ríos interiores y también el comercio marítimo con las naciones. La regulación de la navegación es jurisdicción federal, pero las provincias regulan el aprovechamiento de otros usos, poder conferido por el art. 121, ya que éstas conservan todos los derechos que no han delegado en la Nación.

El Código Civil, comienza por considerarlo una cosa, es decir un objeto corporal, susceptible de tener valor, que puede pertenecer al dominio público o privado, del Estado Nacional o de los Estados Provinciales.

El art. 2340 inc. 3 establece que corresponde a los Estados particulares (provinciales), el dominio público de los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiriera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Las provincias han dictado legislación sobre el uso de su recurso hídrico, su administración y utilización.

El Código Civil establece cuáles son las aguas que pertenecen al dominio público de los Estados Provinciales y ha dispuesu

to un sistema de concesión administrativa para que los particulares obtuvieran su uso. El Código Civil también establece qué aguas pertenecen al dominio privado reglando sus restricciones. Se ha normado también sobre las aguas que son "res nullius".

A las aguas consideradas públicas, les corresponde la aplicación de la legislación provincial, dentro del límite de la respectiva provincia.

Las aguas privadas están regidas por el Código Civil y las provincias ejercen sobre ellas el poder de policía.

El art. 2350 considera aguas privadas las que nacen y mueren dentro de un mismo fundo.

El art. 2365, establece que son privadas las aguas de lluvia caídas en lugares privados.

El art. 2637 dice que son privadas las aguas que brotan en terreno privado, aunque es público el caudal que dichas aguas forman.

Las aguas durmientes o dormidas, se consideran privadas, ya que no se desplazan en el terreno, formando bañados o esteros.

El art. 2340 inc. 5 establece que son del dominio público los lagos y lagunas, cuando se los pueda navegar. Caso contrario son de dominio privado.

El art.2340 considera públicas las aguas subterráneas o freáticas y subálveas; el propietario del fundo puede extraer las aguas subterráneas, con sujeción a las reglamentaciones pertinentes.

El art. 2340 inc.3 declara del dominio público del Estado a las aguas que corran por sus cauces naturales, siempre y cuando no nazca y muera dentro de un mismo fundo.

El art. 2636 establece que las aguas de lluvia que caen en terrenos de dominio público son "res nullius", sujetas a aprehensión por cualquiera.

El Código Civil establece algunas restricciones al dominio, impone así el camino de sirga y las obligaciones de recibir aguas que provengan de fundos aguas arriba, en las condiciones de los arts. 2646 y 2653.

El Código determina que los cauces y lechos de las aguas son públicas hasta la línea de ribera. La línea de ribera es fijada por el Estado Nacional en los ríos navegables, en virtud de la jurisdicción nacional. En los ríos no navegables debe ser delimitada por las provincias.

Esta línea de ribera establece el límite del dominio público del Estado del dominio privado del particular.

El título XIII del libro III, del Código Civil, legisla so

bre las servidumbres que se pueden establecer por el uso del agua: de acueducto normada en el art. 3082, de recibir aguas artificiales provenientes de riego o uso en establecimientos industriales del art. 3097 a 3099, de avenamiento del art. 3100, de recibir aguas de techos vecinos arts. 3092 a 3096 y de saca de aguas de los arts. 3104 a 3107.

El manejo integral del Recurso agua se vio plasmado en la legislación a partir de 1971 con la creación de algunos Comités de Cuencas Hídricas que se estructuran superando problemas jurisdiccionales, por Decreto 4362 del P.E.N. En tal sentido las provincias de Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro suscribieron en su oportunidad un Convenio Interprovincial, sentando las pautas para el aprovechamiento de las aguas no navegables del río Colorado, disponiéndose la creación de la Comisión Técnica Interprovincial Permanente del Río Colorado - COTIRC -

El Acuerdo Parcial entre las provincias tributarias del Río Negro en la denominada Región Comahue por el que se crea la Corporación Norpatagónica, entre las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Este organismo que concluyó con la recomendación legislativa de la construcción del complejo Chocon-Cerros Colorados, no fue ratificado por las provincias.

La condición jurídica de los Comités de Cuenca es la de organismos descentralizados, autárquicos, con personería jurídica propia, que tienen su origen en un pacto federal y tienen a su cargo la planificación y coordinación de los estudios y pro-

gramas para la administración, conservación, protección y aprovechamiento integral de la cuenca.

La protección de los Recursos Hídricos superficiales y subterráneos, contaminación industrial, prevención y control está normado por el Decreto 674/89 del P.E.N. con las modificaciones introducidas por el Decreto 776/92, que establece el poder de policía de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.3. RECURSO AGUA

2.3.2. Aspectos Legales

2.3.2.1. Legislación General

2.3.2.1.

REGIMEN LEGAL DE LAS AGUAS PARA RIEGO

Nuestro Código Civil se ocupa del régimen jurídico de las aguas pero no lo hace en forma orgánica sino en normas dispersas del Libro III del Título I "De las cosas consideradas en sí mismas".

Hace una distinción entre las aguas que pertenecen al dominio público del Estado General o de los distintos Estados que lo componen o del dominio privado de los particulares.

Este cuerpo legal reconoce la distinción entre aguas marítimas y terrestres.

En esta exposición solo vamos a considerar las aguas terrestres dado que son las únicas aptas para el riego.

Siguiendo la clasificación del Código Civil éstas se dividen entre aguas corrientes, que pertenecen al dominio público y las del dominio privado.

Según el art. 2340 modificado por la ley 17.711, son del dominio público: inc. 3): "Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación".

Inc.4) "Las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas

bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias;"

Inc.5) "Los lagos navegables y sus lechos."

Por tanto los ríos, navegables o no, pues el código no ha ce distingo, son de propiedad de las provincias, y corresponde sólo a la Nación el reglar sobre la navegación (entendiendo también en ello la flotación).

Las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad pertenecen en propiedad, uso y goce al dueño de la heredad (art.2350 CC). Cuando estas vertientes son el principal alimento para un río o necesarias para un pueblo están sujetas a la expropiación por causa de utilidad pública (arts. 2637 y 2638 CC).

La clasificación de "aguas dormidas", entendiéndose por tales la que no tienen cursos, hay que distinguir entre naturales (lagos y lagunas) y artificiales (represas o estanques).

Los lagos navegables (art.2340 CC) y los no navegables (2349) son públicos, pero en el segundo caso el uso y goce pertenece a los propietarios ribereños. Cuando los lagos no navegables están formados por vertientes que afloran en fundos privados sean del Estado o de los particulares son privados.

Las aguas subterráneas, son aquéllas extraídas del subsuelo y en cuanto a su dominio y aprovechamiento ha sido motivo de discusiones doctrinarias.

-Una primera postura y que es la sostenida por nuestro Código Civil dice que ellas pertenecen al superficiario, pudiendo éste aprovecharlas (arts.2340,2518 y 2637 Código Civil sin reformar).

-La segunda posición: sostiene que las aguas subterráneas son de dominio público y su aprovechamiento debe ser reglado por la autoridad. Este fue el criterio que adoptó la ley 17.711 y que modificó los arts.2340 y el 2637, declarando que son bienes públicos, pero reconociendo el derecho del propietario superficiario o extraerlas en la medida de sus necesidades, con sujeción a la reglamentación correspondiente.

En cuanto a las aguas pluviales (arts.2635 y 2636 CC) su uso y aprovechamiento dependerá de dónde caen, si en fundos privados o en públicos, en este último caso pertenece a las provincias y no a la Nación la regulación del uso y goce de las aguas caídas en fundos de su jurisdicción, como a la Nación cuando estas aguas caigan en los propios.

En cuanto a la legislación nacional sobre el tema de riego, se sancionó en 1909 la ley 6.546 conocida como "Ley Nacional de obras de riego" la que rige en las provincias que adhieran a su régimen. Pero ésta no es una verdadera ley de aguas sino es una ley de financiación de obras. Tiene por objeto reglamentar la irrigación de la zona servida por los ferrocarriles nacionales y establece que el Poder Ejecutivo Nacional mandará preparar los proyectos de obras de aprovechamiento de las aguas de varios ríos (Negro, Limay, Neuquén, Segundo, Tercero, Quinto, Seco, de los Sauces, Mendoza, A-

tuel, Diamante, Tunuyán, Salado, Colorado y Dulce)atendiéndose tales obras con obligaciones de irrigación. Crea un "Fondo de Irrigación" y establece la obligatoriedad del pago de un canon por uso del agua, entre otras disposiciones.

Otras leyes posteriores autorizaron la realización de de terminadas obras de riego:Entre ellas: 12.202 (Dique El Cadillal y Dique Escaba en Tucumán), 12.259 (Dique en lugar conocido como Quiroga sobre el río Dulce en Santiago del Estero) ley 12786 (obras de riego en las provincias de San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca) 12788 (que autoriza una inversión en o bras sobre los ríos Jáchal y San Juan en Pcia. de San Juan)12820 (autoriza una inversión en obras de canalización del río Toro en Salta) 15.724 (autoriza inversión sobre el río Salado en Santiago del Estero).Por decreto ley 367/57 se autorizó a Agua y Energía a realizar un importante plan de regulación de agua a realizarse en seis provincias.

En el año 1973 se sanciona la ley 20.126 por la que se crea el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH) y se derogan las leyes 18.629 y 17543 por las que fueron creados respectivamente el Instituto Nacional de Economía, Legislación y Administración del Agua y el Laboratorio Nacional de Hidráulica Aplicada. El organismo creado por la ley 20126 sucederá a los disueltos.El INCYTH se crea como ente descentralizado dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Subsecretaría de Recursos Hídricos.Y tiene por finalidad el estudio e investigación de los recursos hídricos y la capacitación de los recursos huma-

nos necesarios para el cumplimiento de dichas actividades, con arreglo a los planes y programas que elabore y que sean aprobados. Se establecen los recursos con que él contará. En 1975 el Instituto es incorporado a la estructura orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. El Instituto podrá crear Centros regionales y Centros especializados para lograr un mejor aprovechamiento del agua.

En 1974 se crea un Fondo de Estudio de Obras de Irrigación y Drenaje, por la ley 20.946, cuyo objeto será solventar los gastos que demande la realización de estudios de factibilidad de nuevas obras de irrigación y drenaje en todo el territorio de la Nación, con el destino de promover la producción agrícola ganadera en zonas no utilizadas a esos fines en el país.

Este Fondo será administrado por la Subsecretaría de Estado de Recursos Hídricos de la Nación.

Legislación Provincial

A este respecto hemos visto que es facultad de las provincias el legislar sobre el uso de las aguas que corren por su territorio. El agua, como sabemos, es de fundamental importancia para el riego en aquellas provincias de insuficiente o irregular precipitación pluvial. Todo esto es motivo más que suficiente para que ellas no abduquen a su derecho a decidir sobre el aprovechamiento de las aguas que les pertenecen ni abandonar la jurisdicción que sobre ellas tienen.

Las obras de riego y la utilización de las aguas de dominio público con destino al riego, han sido contempladas en los códigos rurales y han dictado leyes locales de carácter general o relativo a obras especiales. En algunos casos hasta tienen categoría constitucional.



AGUA

LEGISLACION NACIONAL

Ley 21.172/75 Aguas de consumo, fluoración o defluoración.
Ley 23.615/88 Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (COFAPYS). Organismo Autárquico.
Ley 23879/90 Obras Hidráulicas-Evaluación de las consecuencias ambientales que producen o podrían producir en territorios argentinos las represas construídas, en construcción y/o planificadas.
Decreto 674/89. Contaminación Hídrica.
Decreto 776/92. Control de Contaminación y Preservación de Aguas.

CATAMARCA

Ley 2577 .- Aguas.
Ley 3231 Aguas subterráneas, órgano competente de control, supervisión y expedición de permisos de perforación (Modif. ley 2577)
Decreto Reglamentario 2142/74.
Ley 4704 Convenio entre el Gobierno de la Provincia de Catamarca y el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento.

CORDOBA

Ley 7863/89 Regulación de la cuenca del Río Cruz del Eje.
Ley 7864/89 Regulación de la cuenca del Río Pichana.
Ley 7773/89 Regulación del tramo superior de la cuenca del Río I.
Ley 7862/89 Regulación del tramo superior de la cuenca Río de los Sauces.
Ley 7883. Adhesión a la Ley Nacional 23615 de Creación del Consejo Federal de agua potable y saneamiento.
Ley 8031 Creación del Comité de la Cuenca Baja del Río Calamuchita. Política Ambiental. Ríos. Contaminación.
Ley 6072 Obras Hidráulicas.
Ley 8148 Creación del Comité de Cuenca del Valle del Sol Norte.
Ley 8185 Creación del Comité de Cuenca del Río Segundo.
Ley 7967 Declara de interés público la conservación y mejoramiento ecológico del Río Suquía.
Ley 8130 Creación del Comité de Cuenca del Río Cuarto.
Ley 8129 Declaración del Estado de Emergencia del equilibrio ecológico del Río Calamuchita, motivado por la extracción de árido y otros sedimentos menores.
Ley 8291/93. Crea el Comité de Protección y Regulación de las Actividades en el Chaco Árido y Semiárido.

CHACO

Ley 3230/88 Código de Aguas.
Decreto 3083/88.
Ley 3542/90 Modif. Art. 327 de la Ley 3230/88.
... Se mencionan algunas disposiciones legales correspondientes a la Ley 3230/88 modif. art. 327. de la Ley 3542/90.
Título I. Art. 2. Recursos Hídricos. Política Hídrica. Aprovechamiento, uso, explotación. Cuenca hidrográfica -cuenca hidroecológica.

Art.3 Política Hídrica Provincial a) Interdependencia entre los distintos recursos naturales y entre los distintos usos del agua; e) impulsar el aprovechamiento de los recursos hídricos en forma racional.f) integración de las disponibilidades hídricas;i) Causas de contaminación y degradación de los recursos hídricos.Control sobre los efectos;k) coordinar acciones de los organismos públicos autárquicos y privados que tengan como objeto la defensa de los predios y del medio ambiente.

JUJUY

Decreto 220 bis op.84 Asignación de Poder de Policía de Contaminación Hídrica a la Dirección Provincial de Agua Potable y Saneamiento.

Ley 4405/89 Adhesión Provincial a la ley Nacional 23615 (creación del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento)

Ley 6776/80 Creación del Centro Operativo para el Control de la Contaminación de los Recursos Hídricos.

Ley 161/50 Código de Aguas.Modif.por Ley 4376/88

Ley 3127/74 Administración de los Recursos Hídricos

Ley 4401/88 Administración del uso del agua.

Ley 4090/84 Administración de los Recursos Hídricos y Régimen de servicios de agua,saneamiento.

Ley 4530/90 Modif.Ley 4090/84.

Resoluciones 222/344/396 y 786 Reglamentarias. Calidad de Efluentes Líquidos.

Ley 4616/92 Aprobación convenio Gobierno Provincial y C.F.I.Inversiones para la implementación del Plan Director del Sistema de Desagües Cloacales.

LA PAMPA

Ley 6044/93 Provisión de Agua Potable y Saneamiento.Protección de la calidad del agua.

Ley 5081/86 Permisos precarios para uso agrícola.Facultades del Dto. General de Irrigación.

Ley 607/74 Código de Aguas.

Decreto 3351/74.

Ley 904 Régimen de promoción del aprovechamiento de los cursos de agua en la Provincia.

Ley 894/85 Promoción del aprovechamiento hídrico en el territorio provincial;de interés público.

Decreto 527.Reglamenta Ley 894.Aprovechamiento de los cupos de agua.

Ley 1027/80 Estableciendo régimen de interés público provincial para asegurar la conservación y uso racional de las fuentes de agua potable.

Decreto 193/81 Reglamenta la ley 1027/80.

Ley 773/77 Crea la Administración Provincial del Agua.

LA RIOJA

Ley 4295/83 Código de Aguas.

Decreto 2600/86 Descargas de efluentes líquidos industriales.

Ley 4741/86.

MENDOZA

Ley 322/88 General de Aguas.

Ley 6044/93 Reordenamiento institucional de la prestación de servicios de agua potable y de saneamiento y la protección de la calidad del agua en el ámbito provincial.

Resolución 634 Control de la Contaminación Industrial.

Ley 5081/86 Permisos Precarios para uso de agua agrícola.

Ley 4035/84 Aguas subterráneas.

Ley 4386/86 Normas complementarias de la ley 4035/84

Ley 4560/81 Modif.parcial de la ley 4386

Resolución 634 DGI Normas para el control de la contaminación en cauces públicos.

NEUQUEN

Ley 899/75 Código de Aguas. Contaminación de las aguas. Agua y energía eléctrica. Irrigación. Aguas subterráneas, etc.

Decreto 2790/85-Ley 1626/85 Declara ilegítima la ley nacional 13030 en cuanto confiere a la Nación la facultad de reglar el uso y aprovechamiento de las aguas de ríos y corrientes interprovinciales.

Ley 1314/81. Créase la administración provincial del agua. Decreto 0097.

Ley 1993/93. Decreto 0097/93. Ratifícase el convenio celebrado entre el COFAPYS y el Poder Ejecutivo Provincial.

Ley 1678. Establece la fluoración y la defluoración de las aguas destinadas al consumo humano en toda la provincia.

Decreto 1267. Convenio Interprovincial de Agua Potable.

Ley Nacional 19288 y 18875. Agua Potable y Saneamiento Rural.

Ley 1314/81. Creación de la administración provincial del agua.

Ley 1875 Modif. por ley 1914.

Ley 4865 sustituye los arts. 25-27-28 y 29 referentes al organismo de aplicación. Creación del Consejo Provincial del Medio Ambiente.

RIO NEGRO

Ley 285/61

Ley 2391/90

Decreto 1894/92

Resolución 378/92

Resolución 1302/92

Ley 200/61 Créase el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de Río Negro (IDEVI), bajo la dependencia del Depto. Provincial de Aguas

Ley 2585/93 Reafirmación y reivindicación de Derechos sobre la totalidad de las obras hidroeléctricas instaladas y/o a instalarse en su jurisdicción para el aprovechamiento de los cursos de agua de los ríos Neuquén, Negro, Colorado y Limay.

Ley 2316/89 Adhesión de la Prov. de Río Negro al COFAPYS Decreto 1536.

Ley 1743 Convenio entre la Prov. de Río Negro y la Nación sobre provisión de agua potable a localidades provinciales. Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural.

SALTA

Ley 5430/79 Convenio "la Secretaría/Universidad de Salta" para la investigación y desarrollo de aguas subterráneas, recursos naturales, utilización, explotación racional.
Ley 4607 Plan de Agua Potable y Saneamiento Rural. Adhesión a la Ley Nac. 19.288
Ley 5365 Código de Aguas. Canon de riego anual.
Ley 5789 Plan para la contaminación de los recursos hídricos. Convenio.
Ley 5697. Propiedades Rurales Privadas. Normas de carácter tributario.

SAN JUAN

Ley 4392/78 Código de aguas. Título VII: Uso agrícola.
Ley 4526/79 Modif. Ley 4392/78 Art. 121
Ley 5875/88 Modif. art. 152 Ley 4392/78
Ley 5824/87 Preservación del agua (suelo y aire) y control de la contaminación
Ley 4911 crea Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE)
Ley 5194 aprueba el convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia y la Nación para el desarrollo del Plan Nacional de Agua Potable.

SAN LUIS

Ley 3876/78 Código de Aguas Provincial.
Decreto 1529/80 Aguas Subterráneas.
Uso y reglamentación del título VI, Cap. II, del Código de Aguas.

SANTA CRUZ

Ley 229 de conservación de suelos y aprovechamiento de los recursos naturales.
Ley 1005 Aguas. Declaración de interés provincial para la elaboración de un programa de aprovechamiento múltiple del río Santa Cruz.
Ley 1451. Aguas Públicas Provinciales, no marítimas, regulación de su uso y preservación.
Ley 1890/87 Declara de interés provincial a las jornadas nacionales sobre recursos hídricos en zonas áridas y semiáridas.

SANTIAGO DEL ESTERO

Ley 4869/80 Código de Aguas Provincial
Ley 4745/79 Sociedades de Usuarios de Canales Comuneros.
Ley 4513/77 Manejo del Recurso Hídrico para riego en el área del río Dulce.
Decreto 672/77 Riego eventual temporario anual.

TIERRA DEL FUEGO

Ley 380 Convenio Agua Potable
Ley 237/84 Prohibición de descarga de efluentes residuales sólidos, líquidos y gaseosos sin previo tratamiento de neutralización.
Decreto Reglamentario 1056 de la ley 237/84.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.3. RECURSO AGUA

2.3.2. Aspectos Legales

2.3.2.2. Legislación Seleccionada

2.3.2.2.

LEGISLACION SELECCIONADA

- LA PAMPA: Por ley 607/74 ha instrumentado un Código de Aguas, que consta de 270 artículos, distribuidos en siete libros.

El libro I, de Normas Generales consta de dos títulos, el I.- trata el objeto de regulación y ámbito de vigencia y el II.- Declaraciones de utilidad pública.

El Libro II de Utilización de Aguas consta de un Título I que versa sobre la utilización de aguas del dominio público, el Título II, Régimen de la utilización de las aguas del dominio privado y un Título III, utilización de categorías especiales de aguas.

El Libro III, Limitación al dominio del agua y al ejercicio de los derechos de agua. Consta de un Título I que regula sobre restricciones públicas, Título II sobre Servidumbre públicas, Título III sobre Catastro y Registro de Aguas.

El Libro IV sobre Obras Hidráulicas, consta de un Título I que legisla sobre obras de Embalse y Captación, Título II, sobre Obras de Depósito y Lagos. Título III sobre Obras de Desagües y mejoramiento integral. Título IV sobre Obras para la distribución de agua.

El Libro V se refiere a Consorcios de Usuarios de Agua.

El Libro VI, Jurisdicción, Competencia, Procedimiento y Sanciones.

El Libro VII, establece Disposiciones Transitorias.

Por Ley 894/85 se declara la promoción del aprovechamiento hídrico en el territorio provincial, de interés público. Esta ley legisla sobre la promoción del aprovechamiento hídrico, el a aprovechamiento de las aguas superficiales, sobre las preferencias en la adjudicación, los requisitos para la adjudicación, so bre penalidades-reversión del dominio-formalidades, el aprovechamiento de las aguas públicas subterráneas. La Ley 894, fue reglamentada por el Decreto 527/86.

Ley 1027/80 Estableciendo régimen de interés público provincial para asegurar la conservación y uso racional de las fuentes de agua potable. Su decreto reglamentario Nro. 193/81.

Ley 773/77 que crea la Administración Provincial del A-gua.

El Decreto 3084/85, crea el Consejo Asesor en Recursos Hídricos (C.A.R.H.) que funcionará en la esfera del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y tendrá como fin asesorar al Poder Ejecutivo Provincial.

- MENDOZA: Ley General de Aguas Nº 322/88, consta de XVI títulos que tratan: Título I: Disposiciones Generales. Título II: Del dominio de las Aguas. Título III: De las servidumbres. Título IV: De las servidumbres legales. Título V: De las concesiones. Sobre el aprovechamiento del agua. Título VI: De los canales de riego. Título VII: De los desagües. Título VIII: De los turnos para el a-

provechamiento del agua. Título IX: De las obras de defensa. Título
lo X: De las cuestiones sobre aguas. Título XI: De la Administra-
ción de Aguas. Título XII: Atribuciones y deberes del Superinten-
dente de aguas. Título XIII: De los Subdelegados de Aguas. Título
XIV: De los Compartidores. Título XV: De los Inspectores. Título
XVI: De los Delegados.

Ley Nro. 389 Obras de Irrigación y desagües.

Ley Nro. 393 Sobre puentes y caminos (Disposiciones con
exas al Régimen de Aguas)

Ley Nro. 402 Ampliatoria de la Ley 386, sobre obras de
irrigación y denuncias de cultivos clandestinos.

Ley Nro. 430 Reglamenta sobre plazos y caducidad de las
concesiones.

Ley Nro. 590 Prorroga por cinco años los plazos de las le
yes 386 y 430.

Ley Nro. 685 de adhesión a la ley nacional Nro. 6546, so-
bre aprovechamiento de aguas de los ríos.

Ley Nro. 741 entrega locaciones de agua destinada a riego
de calles y sus arbolados.

Ley Nro. 971 Construcción de desagües generales y de zona
para saneamiento de tierras. (En coordinación con leyes 1063, 1210
y 1451).

Ley Nro.1008 Fomento y defensa forestal;Arbolado de los cauces de riego.

Ley Nro. 1019 Complementa Ley 393 Construcción de desagües en caminos públicos.

Ley Nro. 1063 Ampliatoria de la Ley 971 Administración de los canales de desagüe y financiación de obras (en coordinación con las leyes Nros. 971,1210 y 1451).

Ley Nro. 1210 Crea la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas. Normas para la construcción,limpieza y conservación de acueductos, percepción de prorratas (En coordinación con Leyes 971,1063 y 1451).

Ley Nro. 1451, modifica ley Nro. 1210.

Ley Nro. 1676 Ley electoral de las autoridades de cauce.

Ley Nro. 2012 Modifica la Ley Nro. 1676.

Ley Nro. 1926 Ley Orgánica de Aguas Públicas.

Ley Nro. 2147 Modifica Ley Nro. 1926.

Ley Nro. 1981 Ley básica sobre obras menores, con fondos permanentes para aprovechamiento de aguas.

Ley Nro. 2001 Código Fiscal (Disposiciones conexas al Régimen de Aguas)

Ley Nro. 2225 sobre Obras Hidroeléctricas y la finalidad del riego.

Ley Nro. 2280 Modifica leyes 1676 y 2012 sobre elecciones de autoridades de cauce.

Ley Nro. 6044 Crea en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento.

Ley Nro. 5081 Faculta al Departamento de Irrigación a otorgar permisos precarios para uso agrícola de aguas provenientes de drenajes, sobrantes o surgencias naturales, en favor de inmuebles para cuya explotación utilicen exclusivamente aguas subterráneas.

Resolución 634 del Departamento General de Irrigación. Normas de procedimiento para el control de la contaminación industrial.

- RIO NEGRO: Ley Nro. 285 de 1961. Esta ley consta de:

Primera Parte. Agua Pública; Título I: Tutela y administración, Capítulo I: Disposiciones Generales; Capítulo II: De la administración del Agua; Capítulo III: Uso común o público del Agua; Capítulo IV: Uso privado del Agua Pública; Capítulo V: Nuevas derivaciones; Capítulo VI: De las concesiones y autorizaciones en particular. Título II: De los cauces naturales. Título III: Capítulo Único: De la regalía.

Segunda Parte: De las Obras Hidráulicas; Título I: Riego y otros usos; Capítulo I: De los canales; Capítulo II: De los desagües. Título II: De los Consorcios, Título III: Obras Patrimoniales del Es

tado; Capítulo I: Plan de obras y régimen económico; Capítulo II: Disposiciones Generales y transitorias; Capítulo III: Clasificación de las obras; Capítulo IV: Recursos del organismo; Capítulo VI: Capacitación de los usuarios (Red Oficial).

Tercera parte: Del Departamento Provincial de aguas; Título I: Capítulo I: Institución; Capítulo II: Fines; Capítulo III: Organización; Capítulo IV: Del Superintendente General; Capítulo V: De los Intendentes; Capítulo VII: De los compartidores; Capítulo VIII: Del Consejo Superior de las Aguas; Capítulo IX: Régimen Financiero; Capítulo X: Disposiciones transitorias.

Ley Nro. 2513. La provincia de Río Negro reafirma y reivindica todos sus derechos sobre la totalidad de las obras hidroeléctricas instaladas y/o a instalarse en su jurisdicción para el aprovechamiento de los cursos de aguas de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado.

Ley Nro. 2317. De adhesión a la ley Nro. 23615 de creación del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (COFAPYS).

Ley Nro. 2391 Régimen de control de calidad y protección de los Recursos Hídricos Provinciales. Reglamentada por Decreto Nro. 1894/91.

Resolución 378/92 del Departamento Provincial de Aguas. Sobre tipificación de los establecimientos industriales.

Resolución 1302/92 del Departamento Provincial del Agua. Determina que se considerará efluentes y/o aguas residuales industriales y/o hidrocarburos capaces de contaminar directa o

indirectamente a los recursos hídricos, según su procedencia.

- LA RIOJA Ley 4295/83. Código de Aguas. Esta ley consta de:

Libro I: Disposiciones generales; Título I: Ambito de vigencia, objeto de regulación y autoridad de aplicación; Título II: Principios de política hídrica; Título III: Aguas interprovinciales: su aprovechamiento; Título IV: Régimen de las aguas privadas; Título V: Registro y catastro de aguas; Capítulo I: Registro; Capítulo II: Catastro; Título VI: Sistemas de aprovechamiento.

Libro II: Uso del Agua con relación a las personas; Título I: Usos comunes; Título II: Usos Especiales; Capítulo I: Disposiciones Generales; Capítulo II: El Permiso; Capítulo III: La concesión; Secciones Generales. Sección II: Clasificación y vigencia de las concesiones. Sección III: Derechos y obligaciones del concesionario. Sección IV: Restricción, suspensión temporaria y extinción de las concesiones.

Libro III: Normas para ciertos usos especiales y concesión Empresaria; Título I: Bebida, uso doméstico y municipal y abastecimiento de poblaciones; Título II: Uso Industrial; Título III: Uso agrícola; Título IV: Uso Pecuario; Título V: Uso energético; Título VI: Uso recreativo; Título VII: Uso minero; Título VIII: Uso medicinal; Título IX: Uso Piscícola.

Libro IV: Normas relativas a categorías especiales de agua. Título I. Cursos de agua y aguas lacustres. Capítulo I: Cursos de Agua. Título II: Aguas de vertientes. Título III: Aguas de fuente. Tí

tulo IV: Aguas que tengan o adquirieran aptitud para satisfacer usos de interés general. Título V: Aguas pluviales. Título VI: Aguas subterráneas.

Libro V: Defensa contra efectos dañosos de las aguas. Título I: Disposiciones generales. Título II: Contaminación. Título III: Avenidas, inundaciones y erosión de márgenes y suelos. Título IV: Desagüe y avenamiento. Capítulo I: Avenamiento y desagües particulares. Capítulo II: Avenamiento y desagües generales.

Libro VI: Obras hidráulicas. Título I Disposiciones Generales. Título II Obras hidráulicas públicas. Título III: Obras Hidráulicas Privadas.

Libro VII: Restricciones al dominio, ocupación temporal, servidumbres administrativas y expropiación impuestas en razón del uso de las aguas o defensa contra sus efectos nocivos. Título I: Restricciones al dominio. Título II: Ocupación temporal. Título III: Servidumbres administrativas. Capítulo I: Disposiciones Generales. Capítulo II: Disposiciones especiales con respecto a la servidumbre de acueductos. Capítulo III: Disposiciones especiales con respecto a la servidumbre de desagüe y avenamiento. Capítulo IV: Disposiciones especiales con respecto a la servidumbre de abrevadero y saca de agua. Capítulo V: Extinción de las servidumbres. Título IV: Expropiación.

Libro VIII: Régimen financiero.

Libro IX: Jurisdicción, competencia y régimen contravencional. Título I: Jurisdicción y competencia. Título II: Régimen contravencional.

Libro X: Disposiciones transitorias y finales. Ley Nro. 4741 de agosto de 1986. Se establece la depuración y fiscalización de los efluentes líquidos industriales.

- CHACO. Ley 3230/88 Decto. 3083/88. Ley 3542/90 Modifatoria de la ley 3230/88.

Título I. Disposiciones Generales.

Art.2 Recursos hídricos. Política hídrica. Aprovechamiento. Uso. Explotación. Cuenca Hidrográfica. Cuenca Hidroceológica.

Art.3 Política hídrica provincial a) interdependencia entre los distintos recursos naturales y entre los distintos usos del agua'.

e) Impulsar el aprovechamiento de los recursos hídricos en forma racional.

f) Integración de las disponibilidades hídricas.

i) Causas de contaminación y degradación de los recursos hídricos. Control sobre los efectos.

k) Coordinar acciones de los organismos públicos autárquicos y privados, que tengan como objeto la defensa de los predios y del medio ambiente contra los efectos nocivos de las aguas, en especial inundaciones y salinización.

o) Propiciar y desarrollar la participación de los usuarios

a través de las comisiones de manejo de agua y suelo.

Art.16. Aplicación de la política hídrica con relación a otros Estados Provinciales con los cuales comparte cuenca interjurisdiccional.

Título II. De la clasificación de las aguas en relación a su dominio y uso.

Capítulo VI. Aguas subterráneas. Art.52 Obligaciones de los concesionarios y permisionarios.

Título III. De la protección de los recursos hídricos.

Capítulo I. De la conservación.

Capítulo II. De la preservación. Art.66. Preservación integral de los recursos hídricos (causas de la contaminación o degradación). Art.67 De aguas contaminadas. Art.68. Prohibición de vertido o emisión de residuos líquidos o gaseosos que puedan degradar o contaminar los recursos naturales. Condicionamiento para la descarga. Art.72. Queda prohibida toda acción u omisión que produzca o pueda producir contaminación de las aguas. Responsabilidad. Multas.

Título IV. Del uso y aprovechamiento del agua.

Capítulo IV. Sección II. Uso Agrícola y Selvícola. Sección III Uso pecuario o de granja. Sección IV. Uso industrial. Sección VII. Uso energético. Sección VIII. Uso minero.

Capítulo V. Del uso de cauces y lechos.

Capítulo VI. Del régimen privado de las aguas.

Título V. De las obras hidráulicas.

Capítulo II. De los acueductos.

Capítulo III. De los desagües y drenajes.

Título VI. De la defensa contra los efectos nocivos de las aguas.

Capítulo I. De las inundaciones y de la erosión.

Capítulo II. De la salinización, sedimentación y eutroficación.

Título VII. De las limitaciones al dominio privado por razones hídricas.

Capítulo I. De las restricciones al dominio.

Capítulo III. Servidumbres administrativas.

Título VIII. Del régimen financiero de los recursos hídricos.

Título IX. Del registro y catastro de aguas.

Título X. Jurisdicción, competencia y régimen contravencional.

Libro IX. De las comisiones de manejo de agua y suelo.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.4. RECURSO SUELO

2.4.1. Consideraciones Generales

2.4.1.

CONSIDERACIONES GENERALES

La República Argentina, posee el 70% de su territorio continental bajo condiciones de aridez y semiaridez. Esto equivale a una superficie de 211.000.000 ha.

Para adquirir una idea de la magnitud de la desertización en la Argentina, podemos recurrir a la información de FAO, donde se considera que en nuestro país se desertifican entre 3000 y 4000/ha. por año y cuya recuperación es imposible. Siendo así, comenzaríamos considerando el suelo supuestamente como un recurso natural no renovable, en la medida que las pautas preventivas para su conservación sean desoídas o desestimadas. Tomamos conocimiento, que la Patagonia Argentina acusa una extensión de Diez millones de hectáreas desertizadas.

Con la finalidad de adaptar la demanda de recursos naturales al interés del ambiente rural, sentamos premisas limitantes para su disponibilidad y tratamiento, bajo el aspecto económico-social biofísico, legal y político.

De este modo, a través de eventos y de seleccionados artículos sobre la materia, publicados en el ámbito nacional, entendemos reforzar las conclusiones que implícitamente surgen del presente estudio.

El Ing. Agr. Michelane, en su artículo "Degradación y Conservación de Suelos" hace un comentario a la Ley de Conservación de Suelos Nº 22428, indicando que la misma constituye una herramienta importante en la difusión y aplicación de práctica, sólo que su acción se vio muy restringida en los últimos años por falta de presupuesto.

Analiza los factores de limitación para la adopción de prácticas conservacionistas, tales como el desconocimiento de la aptitud de las tierras ó la carencia de apoyo técnico, comprometiéndolo al productor y a los dirigentes.

Considera de especial importancia la planificación orgánica de la tierra.

El Licenciado M. Thibaud en su trabajo "Medio Ambiente, Teoría y Práctica de la Realidad" considera que " la degradación ambiental es consecuencia no del desarrollo, sino de una particular modalidad del mismo.

Quienes tienen la responsabilidad dirigencial, tendrán que implementar políticas a largo plazo, desterrando las consideraciones económicas que impulsan a obtener resultados inmediatos".

El Ing. Carlos Rossi en su artículo "Zonas Áridas y Semi-áridas de la República Argentina" puntualiza como una de las principales causas de la desertificación, el implantar tecnología pampeana en las regiones áridas y semiáridas, el desconocimiento sobre las tierras con características aptas para desmonte. La maquinaria inadecuada para desmonte y la mala práctica del maquinista puede significar la pérdida de un cm. de suelo, que en estas regiones tarda en formarse entre 300 y 400 años. Por lo tanto, si el arado hunde la pala de 3 a 5 cm, la decapitación del suelo para recuperarse necesitaría de 1500 a 2000 años.

La Provincia del Chubut protege, al regular el empleo de tecnologías de aplicación por precepto constitucional en el Capítu-

lo V,art.100.

El "2do. Seminario Internacional sobre Desarrollo Agropecuario Sustentable" (INTA Cap.Fed.1993),menciona las estrategias sobre el uso del territorio y la diferencia conceptual entre uso de la tierra y uso del suelo.El uso de la tierra no sólo incorpora el uso y manejo de los suelos,sino también de la vegetación,los cultivos,el ganado,la flora,la fauna y los insumos productivos.Todo ello,dentro de un marco de restricciones ambientales,socioeconómicas y culturales.

La Constitución de la Provincia del Chubut refleja el concepto mencionado en el artículo 100 Capítulo V, Recursos Naturales. "La tierra es un bien permanente de producción y desarrollo.Cumple una función social. La ley garantiza su preservación y recuperación procurando evitar tanto la pérdida de fertilidad como la erosión y regulando el empleo de las tecnologías de aplicación".

En los ecosistemas áridos se tiende al uso múltiple del suelo para distintos fines,que significan mayores ingresos al diversificar la producción (pastizales para ganado,pequeñas áreas de cultivo). Es una necesidad que surge de la escasez de los mismos y la demanda de una población.

El "Taller Internacional sobre Recursos Fitogenéticos,Desertificación y Uso Sustentable" (Río Gallegos,Santa Cruz,1994), considera la conveniencia de adoptar los principios de diversificación y sustentabilidad para el tratamiento de los recursos naturales,de los recursos hídricos y los bosques.

Se menciona el uso inadecuado del agua,el deterioro de los

bosques andino patagónicos, los incendios, el sobrepastoreo, la desertización, la migración.

Se advierte sobre la necesaria capacitación.

La desertificación y la crisis social y económica, movilizó al productor hasta el abandono de más de 400 campos en Santa Cruz.

Se sugiere la conveniencia de un relevamiento para el ajuste conveniente de carga animal.

Se considera la importancia de tecnologías aptas para un desarrollo sustentable acompañado de rentabilidad y adecuación económico-social a la realidad de cada región.

Las economías rentables deben enfrentar a la competitividad.

Para la transferencia de tecnología se debe adoptar el sistema de información y coordinación entre las actividades del sector público y privado. A su vez, establecer un mecanismo de articulación permanente con el sector internacional.

Se reconoce la necesidad de disponer de un marco legal sobre políticas para el uso de los recursos naturales y básicamente concientizar a los organismos y a los productores.

El uso de los recursos naturales debería orientarse legalmente mediante incentivos, castigos, etc.

Se hace mención al proceso de reestructuración parcelaria en función de las explotaciones rentables.

La Unidad Económica Agraria requeriría unidades de explotación más grandes, a los efectos de contener y complementar las unida

des productivas con las improductivas.

El Ing. Kugler, en un artículo denominado "El Medio Ambiente Rural" sostiene que "otra forma de preservar las condiciones adecuadas del suelo agrícola son las instituciones jurídicas que se preocupan de normatizar un tipo de unidad económica de producción. Que garantice al empresario agrario, por modesto que sea, una dimensión de su propiedad predial que le permita un trabajo intensivo sin perjuicio para las condiciones de explotación del área".

El uso del suelo, se encuentra legislado en el Código Civil, en las leyes de tierras públicas, de colonización, de ordenamiento rural y en los códigos rurales. Asimismo las leyes sobre catastro y registros inmobiliarios, establecen las condiciones para una correcta identificación física y jurídica de las parcelas y proporcionan información sobre la riqueza territorial del país.

La ley 13.246, sancionada en 1948 sobre la base de arrendamientos y aparcerías rurales, regula las relaciones entre arrendadores y arrendatarios y por primera vez, con carácter nacional la protección del suelo queda expresamente establecida en el Art.8 "queda prohibida toda explotación irracional del suelo que origine erosión, degradación o agotamiento, no obstante cualquier cláusula en contrario que contengan los contratos respectivos".

En la anterior concepción de la ley, era inherente al derecho de propiedad, la facultad de desnaturalizar la cosa, degradarla o destruirla. Este criterio liberal de la propiedad a través de la reforma de la ley 17.711 del año 1968 (Código Civil), es reemplazado por otro, conservacionista, por lo que la acción del hombre es pautada en los arts. 2513 y 2514: "es inherente a la propiedad, el derecho a poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla o gozarla conforme a un ejercicio regular". Este ejercicio sustituye la mención anterior que decía "según la voluntad del propietario". El artículo siguiente indica que el ejercicio de estas facultades no puede ser abusivo". También la reforma de la ley 17.711, ha incorporado el concepto de Unidad Económica. El Art. 2326 dispone que "no podrán dividirse las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento". Este concepto, es de reacción contra el minifundio. El criterio que preside la indivisibilidad de las parcelas inmobiliarias establecido por ley, es puramente económico y no ambiental.

Además de esta técnica preventiva tradicional, puede señalarse los controles de policía y los campos específicos de responsabilidad civil, penal, administrativa; las técnicas nuevas de prevención, así como el estudio de impacto ambiental, la planificación o una estructura administrativa adecuada, como sustento de un régimen institucional adecuado.

El Código Rural de la Provincia de Buenos Aires de 1970, contiene normas de carácter obligatorio. Declara de interés público la conservación del suelo agrícola, entendiéndose por tal, el mantenimiento y mejora de

./.

su capacidad productiva. Al Poder Ejecutivo le cabe así, una función fiscalizadora. El conjunto normativo del Código Rural de la Provincia, da pautas conservativas para la conservación de la propiedad rural. Faulta especialmente al Poder Ejecutivo local a cumplir con los siguientes objetivos: 1) Determinar las regiones o áreas de suelos erosionados, agotados, degradados, a fin de aplicar respecto de ellos normas especiales. 2) Controlar en todos los casos la conservación del suelo. 3) Realizar investigaciones requeridas por el uso del recurso. 4) El planeamiento y la ejecución de las Obras Públicas (caminos, canales) realizadas conforme a las técnicas de conservación del suelo y el agua. 5) El establecimiento de prácticas o técnicas que deberán cumplimentar los titulares del dominio de inmuebles, al realizar sus explotaciones agropecuarias y los procedimientos para sancionar al contraventor; calificando el ejercicio irregular del dominio con las consiguientes sanciones, consistentes en la prohibición de los trabajos y en la ejecución de medidas de conservación. 6) La constitución de grupos y consorcios voluntarios de productores, con el fin de conservar el recurso.

El art. 51 permite la expropiación de las tierras de propiedad privada que se encuentren erosionadas, agotadas o degradadas, con la sola finalidad de aplicar planes de recuperación y garantizar en el futuro la aplicación de regímenes conservacionistas.

El Art. 53 impone al propietario u ocupante del predio la obligación de denunciar la existencia de erosión o degradación manifiesta en su propiedad. Asimismo impone el deber de ejecutar los planes oficiales de prevención y lucha que se establezcan.

La ley 21.111 de 1980 (tierras áridas) estableció un régimen de desgravación para inversiones en tierras de baja productividad. Impone un régimen de "Libertad Responsable", permitiendo a los contribuyentes del impuesto a las ganancias desgravar inversiones.

La ley 22.428 de 1981, de fomento a la conservación de los suelos, declara de interés general la acción pública y privada tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. Persigue fomentar técnicas conservacionistas. No tiene carácter obligatorio y en su aplicación se le dio prioridad a la degradación de los suelos originada por la erosión hídrica.

De esta manera se beneficia por medio de subsidios no reintegrables

./.

a productores agropecuarios que se comprometan a aplicar técnicas de manejo que preserven el recurso. Dichas técnicas son avaladas por la autoridad provincial de aplicación a través del Área de Recursos Naturales y Ecología. La SAG y P. es el organismo nacional responsable de la formulación y ejecución de las políticas en la creación de la ley y los estados provinciales son los encargados de su aplicación.

La ley crea la Comisión Nacional de Conservación de Suelos y además legisla sobre créditos preferenciales, extensión, difusión, creación de áreas demostrativas y experimentales. Es la primera ley nacional para el manejo y conservación de los suelos que se aplicó desde su promulgación. Su antecedente es la ley agraria de 1973, que establece en un capítulo único, las pautas para la conservación, mejoramiento y recuperación de la aptitud agrícola, teniendo en cuenta la preservación del recurso.

La autoridad provincial de aplicación, determina los distritos a crearse dentro del ámbito provincial y debe elaborar un informe (catálogo de prácticas) en donde consten qué técnicas se aplicarán, sus características y los costos de esas técnicas de común acuerdo con la SAG y P.

En la determinación de los distritos, las autoridades provinciales deben aplicar el criterio de necesidad basado en el nivel de deterioro del territorio.

Para la creación de un consorcio se debe evitar el riesgo de constituirlo por el solo estímulo del aporte financiero establecido.

Para que un productor se beneficie con un subsidio, debe cumplir ciertos requisitos, entre los que pueden citarse: a) pertenecer a una provincia adherida a la ley; b) hallarse la propiedad en un distrito de conservación creado por la autoridad de aplicación provincial; c) constituir un consorcio con otro productor que también debe aplicar técnicas de manejo conservacionista; d) elaborar un trabajo avalado por un profesional agrónomo matriculado, que a su vez será solidario y responsable de la ejecución de los trabajos subsidiados.

La ley que analizamos, constituye un instrumento que procura rescatar el interés por la conservación de los suelos, proponiendo medidas de fomento y estímulo al productor, preservando el derecho a la propiedad privada y no un régimen coercitivo y sancionatorio.

La falta de aplicación total de esta ley en varias provincias y por diversas razones, ha dado lugar a que los productores hagan un manejo del recurso suelo por cuenta propia, no obstante la gravedad de la situación de antes y ahora.

A continuación se agrega: un comentario de la ley 22.428 en el año 1981, sobre las características esenciales de fomento a la conservación de los suelos, por consulta bibliográfica basada en material de INTA y procesada en el área de recursos naturales y ecología de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, y un informe del año 1987 sobre Distritos, Consorcios y Productores adheridos a la ley, por cada provincia.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.4. RECURSO SUELO

2.4.2. Aspectos Legales

2.4.2.1. Legislación General

2.4.2.1.

LEY Nº 22.428 DE FOMENTO A LA CONSERVACION DE LOS SUELOS

Características Esenciales

Esta ley tiene por objeto estimular y canalizar acciones privadas y públicas con fines de conservar y recuperar la capacidad productiva de los suelos.

Se trata de una ley de adhesión, es decir que su aplicación se realiza a través de la acción de las provincias, con la cooperación del Estado Nacional (Ministerio de Agricultura y Ganadería).

Está destinada a prevenir y controlar o atenuar la degradación de las tierras provocada por la acción del hombre y manifestada por la aparición de erosión (por agua o por viento); salinización y alcalinización en tierras de riego, desertización de regiones áridas y semiáridas por efecto de desmonte irracional, sobrepastoreo, quema de rastrojos, etc.

No es aplicable a tierras naturalmente alcalinas o salinas, inundables, de baja fertilidad natural o que requieran riego o desmonte para entrar en producción, etc., cuya situación en general está contemplada por la ley Nº 22.211.

Destinatarios

Sus beneficios están dirigidos a los productores agropecuarios que voluntariamente integren un "Consorcio de Conservación". Dicho Consorcio funcionará en un área que la provincia respectiva haya declarado "Distrito de Conservación de Suelos" y provisto, consiguientemente, de la asistencia técnica necesaria.

Pueden gozar de los beneficios de la ley tanto los propietarios como los arrendatarios, aparceros o tenedores a título legítimo de predios rurales con la salvedad que, en caso de no ser propietarios, deberán tener el consentimiento de éste.

Beneficios

Los beneficios que otorga la Ley 22.428 son:

- 1- Subsidios no reintegrables que provee el Estado Nacional, en un monto oscilante entre el 30 y el 70% de los gastos e inversiones que realice el productor beneficiado por los trabajos u obras destinados a conservar los suelos de su predio. Los productores patagónicos ubicados en áreas no regadas podrán recibir hasta un 100% de reintegro.
- 2- Los subsidios no están gravados por ningún impuesto nacional. Están

./.

exentos del impuesto sobre el capital de las empresas y al patrimonio neto (leyes N°s. 21.287 y 21.282 y sus modificatorias) el valor impositivo de las mejoras que realicen en virtud de esta ley durante un período de hasta 5 años; esta podrá extenderse a 10 años si el predio está comprendido en "Zona de Frontera" o en la Patagonia.

3- Créditos de fomento del Banco de la Nación Argentina.

4- Medidas especiales de estímulo que pueda disponer cada Provincia que se adhiera a esta ley (P.ej.: subsidios adicionales o desgravación del impuesto inmobiliario, entre otros).

REQUISITOS Y OBLIGACIONES

El otorgamiento de los beneficios previstos a los productores está condicionado a la presentación y aprobación de planes de conservación y recuperación de suelos. Dichos planes deberán ser también suscriptos por un Ingeniero Agrónomo; éste y el productor beneficiado son responsables ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería por el cumplimiento de los trabajos conservacionistas programados.

PROCEDIMIENTO

Para una aplicación correcta de esta ley, se deberán cumplir las siguientes etapas: 1- Adhesión de la Provincia respectiva al régimen de la ley. 2- Declaración, por parte de la Provincia, de una parte de su territorio (por sí o a pedido de productores interesados) como "Distrito de Conservación de Suelos". Esta declaración presupone que: a) Los procesos de degradación de suelos observados en el área son controlables mediante técnicas probadas en ésta o en regiones similares. b) La Provincia brindará asistencia técnica para constituir los Consorcios de Conservación, colaborar con los productores, etc. 3- Constituir, dentro de cada Distrito, uno o más Consorcios de Conservación por parte de los productores. 4- Formular un programa para el Consorcio, al cual deberán ajustarse los planes individuales de los consorcistas. 5- Cada Consorcista elabora un plan de conservación y recuperación de suelos de su campo. 6- Cada Consorcio evalúa los planes presentados por sus miembros y los eleva a las autoridades provinciales para su aprobación. 7- El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, ante un pedido debidamente tramitado, otorgará los beneficios previstos por la ley.

./.

SITUACIONES DE EXCEPCION

Si ocurriera que: 1- En un Distrito de Conservación de Suelos no fuera posible constituir Consorcios, podrá crearse un "Area Demostrativa de Prácticas Conservacionistas". 2- Si no pudiese crearse un "Distrito de Conservación de Suelos", por falta de soluciones técnicas probadas, podrá crearse un "Area Experimental" a fin de desarrollar la tecnología faltante. 3- El productor subsidiado no pudiera ejecutar los trabajos previstos por razones de fuerza mayor (climáticas, p.ej.), luego de la comunicación previa del productor, podrá concedérsele plazo supletorio de ejecución.

ACCION PROVINCIAL

La ley establece igualmente que las provincias que se adhieran a su régimen deberán: a) Completar el relevamiento de los suelos y el conocimiento agroecológico de su territorio. b) Realizar las obras de infraestructura que sean necesarias para la conservación, el mejoramiento y la recuperación del suelo, en coordinación con las autoridades nacionales que correspondiere. c) Promover la investigación y experimentación en estos temas, así como difundir masivamente las normas conservacionistas necesarias. d) Propiciar la formación de técnicos especializados en la materia. e) Otorgar a través de los bancos de su jurisdicción créditos especiales a los productores que integran un Consorcio. f) Aportar recursos presupuestarios, en la medida de sus posibilidades, para ejecución de obras y trabajos conservacionistas necesarios, no efectivizables por los particulares (por magnitud o localización) o para reintegro parcial del costo de aquellos efectuados con los planes aprobados y que no fueren cubiertos por el subsidio establecido por esta ley.

REF.: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
AREA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Y ECOLOGIA.
1981.

CUADRO Nº 1

Distritos, Superficie, Consorcios y Productores Adheridos por Provincia:
al 31-2-1987

PROVINCIA	DISTRITO	SUPERFICIE (ha)	CONSORCIOS	PRODUCTORES
BUENOS AIRES	9	2.308.965	18	95
CATAMARCA	2	119.500	3	15
CORDOBA	4	1.338.596	16	197
CORRIENTES	5	810.683	13	82
CHACO	7	1.373.400	9	55
CHUBUT	5	8.732.750	10	62
ENTRE RIOS	9	1.394.600	24	210
FORMOSA	2	395.000	16	101
JUJUY	3	64.000	3	35
LA PAMPA	4	3.321.000	6	58
LA RIOJA	3	4.727.800	6	75
MENDOZA	24	199.750	47	478
MISIONES	8	467.372	23	278
NEUQUEN	7	7.462.000	11	88
RIO NEGRO	13	13.566.258	46	633
SALTA	4	620.000	4	28
SAN JUAN	7	301.125	17	77
SAN LUIS	2	932.500	2	18
SANTA CRUZ	1	585.000	1	6
SANTA FE	8	1.349.814	8	63
SCO. DEL ESTERO	5	47.421	2	7
TUCUMAN	3	360.575	14	79
TOTAL	135	50.478.109	299	2.732

FUENTE: Area de Recursos Naturales y Ecología de la SAGyP

LEGISLACION SOBRE USO DEL SUELO EN LA ARGENTINA¹

Dr. Ricardo Porto

Ing. Agr. Daniel Tomasini

1- INTRODUCCION

La República Argentina presenta una gran variedad de suelos, sobre los cuales se desarrolla una diversificada actividad agropecuaria.

Sobre una superficie territorial de casi 278 millones de hectáreas, la actividad agropecuaria alcanza las 200 millones, lo que significa una ocupación económica efectiva del 72 % del territorio.

Los diferentes usos y manejos dados a la tierra, han determinado diferentes tipos de degradación del suelo, entre los que se destacan la erosión hídrica y eólica, la degradación física y química, hasta el anegamiento.

La erosión hídrica afecta 25.000.000 de hectáreas en todo el país. La erosión eólica afecta a las regiones semiáridas de aptitud ganadero-agrícola y regiones áridas de uso predominantemente ganadero, superando los 25.000.000 de hectáreas. La degradación física es de amplia difusión en las regiones agrícolas y puede estimarse que alcanza a 23.000.000 de hectáreas. La degradación química tiene un fuerte impacto a través de la salinización de los suelos bajo riego, afectando alrededor de 500.000 hectáreas. El anegamiento de tierras productivas tiene origen en el proceso erosivo hídrico de los suelos de la alta y media cuenca. Casi 20.000.000 de hectáreas están sujetas, permanente o temporalmente, a esta condición.

Ante este panorama el estado nacional y los distintos gobiernos provinciales han diseñado un variado y complejo esquema jurídico tendiente a regular el uso, fomentar la conservación y recuperación de los suelos agrícolas.

2- EL DERECHO AMBIENTAL EN LA CONSTITUCION NACIONAL

La Constitución Nacional recientemente promulgada ha incorporado un conjunto de disposiciones vinculadas al derecho ambiental.

¹Documento elaborado para el Curso de Derecho Ambiental de la SRNAH. Agosto de 1994.

La responsabilidad de los particulares.

El artículo 41 en su primera parte señala que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".

De lo expuesto, se desprende que existe una limitación al derecho de propiedad en aras de la preservación de los recursos naturales.

Conforme esta prescripción, los particulares no podrán ejercer su derecho al uso y manejo del suelo en forma indiscriminada y arbitraria. De lo contrario, estarían llevando a cabo un ejercicio abusivo del derecho; no ya penalizado de acuerdo a la doctrina establecida en el artículo 1071 bis del Código Civil; sino que se trataría de un acto de naturaleza inconstitucional.

Más adelante, el mismo artículo 41 agrega que "El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley".

De esta forma, se robustece y complementa la obligación de los particulares de utilizar racionalmente los recursos naturales, adicionándose el deber de recomponer el daño causado. Será la ley quien determine la forma de instrumentarse tal principio.

El rol del Estado

A continuación, el artículo 41 se refiere a las funciones del Estado en cuanto a garantizar la efectiva vigencia de estos preceptos.

"Las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales".

La Constitución Nacional también ha puesto en cabeza del Estado la responsabilidad de proteger y preservar los recursos naturales.

En el ámbito específico de la conservación de los suelos significa que el Estado deberá, no sólo fomentar las prácticas conservacionistas, dictar medidas de estímulo, garantizar el derecho de información y educación ambiental. Además, deberá ejercer acciones específicas que conduzcan a una utilización racional del suelo y que eviten su degradación.

A tenor de estos principios, el Estado podría impedir la concreción de ciertas prácticas agrícolas, o el desarrollo de determinadas actividades, si ello se realiza en forma inadecuada

y que conduzca a la degradación del suelo.

Va de suyo que se plantearán no pocos conflictos jurídicos cuando frente a este hipotético accionar estatal se esgrima la vigencia del artículo 17 de la Constitución Nacional que señala que "La propiedad es inviolable".

Indudablemente, conciliar este derecho de propiedad del titular del fundo y el derecho de la sociedad -actual y futura- a gozar de los recursos naturales será una de las más arduas tareas de nuestros jueces.

El problema de la jurisdicción

Más adelante, el artículo 41 expresa que "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias, para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales".

Este tema conduce al no menos polémico asunto de la jurisdicción en materia de derecho ambiental.

Al respecto, la Constitución señala en su artículo 124 in fine que "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Ello pareciera consagrar la jurisdicción provincial en la materia. No obstante, existe otra corriente de interpretación que postula la jurisdicción nacional.

El basamento de esta última postura está dado, principalmente, por el artículo 75 inciso 18 que faculta al Congreso Nacional a "Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias..." y por el inciso 19, relativo "Proveer lo conducente al desarrollo humano..."

Para los sostenedores de la jurisdicción nacional en la materia, estas normas habilitarían al Congreso Nacional a sancionar leyes ambientales y de recursos naturales.

Por último, están quienes se pronuncian acerca de la existencia de facultades concurrentes entre la Nación y las Provincias en materia de legislación sobre suelos y recursos naturales.

Más allá de esta profunda discusión doctrinaria; lo cierto es que la actual legislación nacional de conservación de suelos la Ley N° 22.428, es una ley de adhesión; es decir que su aplicación depende de la aceptación de ella por parte de las provincias. Cabe recordar, sobre el particular, que la totalidad de las provincias han adherido a esta ley.

Lo que también permanece fuera de debate es la facultad del Estado Nacional de establecer presupuestos mínimos de protección de los suelos. La ley deberá establecer índices de degradación, lo que constituye también un tema polémico y controvertido.

Una primera lectura de este artículo, vinculado específicamente a la temática de los suelos, conduce a observar que se ha establecido el deber de los particulares de preservar el suelo y de recomponerlo si ha sido degradado. A la vez, se fija la obligación estatal de garantizar la efectiva protección del suelo. Finalmente, se determina la misión de fijar presupuestos mínimos de degradación, reservándose a las autoridades provinciales la facultad de complementar tales requisitos.

3- ACCION DE AMPARO AMBIENTAL EN LA CONSTITUCION

El amparo ambiental

El artículo 43 de la Constitución Nacional consagra, en su primera parte, la acción de amparo. Más adelante, expresa que "Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente".

La Constitución Nacional ha privilegiado el derecho ambiental, al enumerarlo expresamente dentro de la categoría de derechos susceptibles de ser amparados.

Luego, la norma especifica que podrá ejercer esa medida "...el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización".

Esta disposición se refiere al arduo tema de la legitimación en la defensa del ambiente y los recursos naturales. Al respecto, cabe recordar que numerosos tribunales rechazaron demandas en defensa de cuestiones ambientales por "falta de legitimación"; es decir por no poder acreditarse, conforme la legislación vigente, el derecho subjetivo afectado. Ello tenía lugar en virtud de la falta de normas ambientales específicas y la consecuente necesidad de recurrir a genéricas -e inadecuadas- disposiciones de derecho civil para fundar la acción.

La Constitución Nacional viene a llenar este vacío normativo; lo cual constituye un invalorable paso adelante en la materia. No obstante, el nuevo texto permite realizar algunas observaciones.

El afectado, el defensor, las ONG

En primer lugar se legitima al "afectado". Ello conduce a que la ley o los jueces deberán determinar quienes son los afectados en determinadas cuestiones ambientales; lo que será una

tarea nada fácil.

Por caso en una situación de erosión hídrica del suelo, el arrastre de agua y partículas trasciende la propiedad afectada e impacta en varias otras propiedades agrícolas y en infraestructura pública y privada, lo que habilitaría la acción de amparo. Pero ¿como se establecería expresamente la causa, el responsable y los efectivamente afectados y en que medida económica?

Luego, la norma faculta al Defensor del Pueblo, institución normada por el art. 86 de la Constitución, que señala que es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación y que actúa con plena autonomía. Se especifica que su misión es la defensa de los derechos humanos y constitucionales, aclarándose que tiene "legitimación procesal".

Tal como se desprende de la norma, no habrá problemas de legitimación activa para el Defensor del Pueblo para iniciar acciones de defensa de los derechos ambientales. Sin embargo, existiría otra limitación; ya que podrá actuar frente a acciones u omisiones de la Administración; y no ante lesiones ambientales fruto de actos de particulares.

Finalmente, la Constitución Nacional faculta a las denominadas ONG a ejercer la acción de amparo ambiental. Asimismo, la norma indica que la ley determinará "los requisitos y formas de organización" de esas ONG.

Es de esperar que la legislación guarde el necesario equilibrio al respecto. Sería inadmisibles una legislación fuertemente restrictiva que obstaculice reglamentariamente el accionar de las ONG, frustrando, de ese modo, al posibilidad de la defensa del ambiente y los recursos naturales.

Igualmente, una política legislativa absolutamente permisiva podría conducir a una proliferación de demandas que colocarían en situación incierta a cualquier utilización del recurso suelo, ya que toda modificación física del mismo genera un impacto ambiental.

4- LEGISLACION NACIONAL

LA LEY NACIONAL 22.428 DE FOMENTO A LA CONSERVACION DE LOS SUELOS

Esta ley, sancionada en Marzo de 1981, tiene por objeto promover y coordinar acciones privadas y públicas con el fin de conservar y recuperar la capacidad productiva de los suelos.

Está destinada a prevenir y controlar la degradación de las tierras, provocada por la acción del hombre y manifestada por la aparición de la erosión, la salinización y alcalinización en áreas de riego y la desertización en regiones áridas y semiáridas.

La tierra en la Argentina está caracterizada por una casi exclusiva pertenencia al dominio privado, mientras que en materia de jurisdicción sobre el recurso, por la estructura federal de la organización política de la Argentina, la misma corresponde exclusivamente a la Provincia.

Por esta razón esta Ley nacional es una ley de adhesión, que no obliga a las provincias hasta que las mismas adhieren a su cumplimiento.

A fines de Noviembre de 1983 se habían adherido al régimen de la ley todas las provincias que componen la Nación.

Los beneficios económicos que otorga la Ley 22.428 son:

a) SUBSIDIOS no reintegrables que provee el Estado nacional, en un monto que oscila entre el 30 y el 70 % de los gastos e inversiones que realiza el productor beneficiado. En algunos casos este subsidio alcanzó hasta el 100 % de la inversión.

b) CREDITOS DE FOMENTO para financiar inversiones no cubiertas con subsidios nacionales o provinciales.

c) Medidas especiales de estímulo que pueda disponer cada provincia que adhiera a la ley, como subsidios adicionales, créditos ó desgravaciones impositivas.

Los beneficios de la ley están dirigidos fundamentalmente a los productores agropecuarios, tanto en su condición de propietarios, como de arrendatarios y aparceros con la autorización del propietario.

El otorgamiento de los beneficios a los productores agropecuarios está condicionado a un proceso operativo que se describe a continuación:

1. La Provincia adherida a la ley 22.428 debe designar una Autoridad de Aplicación que se constituye en la entidad técnica y administrativa responsable de las actuaciones en la Provincia.

2. La Autoridad de Aplicación debe establecer y organizar en una parte de su territorio los DISTRITOS DE CONSERVACION DE SUELOS. Esta acción supone que en el área definida existen procesos de degradación de suelos originados por la actividad antrópica, y que se reconoce y dispone de técnicas apropiadas para controlar y revertir la situación.

3. Los productores agropecuarios pueden constituir dentro de cada Distrito lo que se denominan CONSORCIOS DE CONSERVACION DE SUELOS, asociaciones de dos o más personas físicas o jurídicas, con ingreso y egreso voluntario y libre, con el objeto de llevar a cabo las prácticas de uso y manejo que se consideren imprescindibles para la conservación de la capacidad productiva

de sus predios.

4. Cada consorcio debe establecer un programa básico de acción, en base al cual cada consorcista elabora un plan de actividades para la conservación y recuperación de los suelos de su empresa.

5. Los planes elaborados por los productores, deben ser aprobados por la autoridad responsable de la Provincia, la que a su vez lo tramita ante la Nación para su aprobación definitiva y otorgamiento de los beneficios previstos por la ley.

La aplicación de la Ley 22.428 de Fomento a la Conservación de los Suelos, desarrollada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en acuerdo con las provincias adherentes, sólo consideró para financiar las practicas conservacionistas al mecanismo de entrega de subsidios a los productores .

La utilización de este instrumento económico durante 7 años, (1982-1989) ha permitido incorporar 2.800.000 hectáreas bajo manejo conservacionista y otras 2.500.000 hectáreas como áreas protegidas.

El monto aportado por la Nación de casi 14.000.000 de dólares (actualizados a 1992), correspondió al 40-50 % del total invertido en conservación, siendo el resto aportado por el sector privado compuesto por mas de 1000 productores agropecuarios beneficiados con la ley. Los aportes de la Nación a los productores se discriminan en el Cuadro Nº 1 a nivel de Provincia y periodo.

Participaron 19 Provincias sobre un total de 22, en las que se establecieron 82 Distritos de Conservación con un total de 202 consorcios, conformados por 1022 productores agropecuarios.

Este subsidio sobre el costo privado de la conservación del suelo ha actuado como incentivo económico de las inversiones de los productores que decidieron incorporarse al sistema. Pero sólo el 0.2 % de los productores fueron alcanzados por estos beneficios, para un área total correspondiente al 3 % de la superficie agropecuaria nacional.

No se ha efectuado una estricta evaluación técnico-económica, tanto a nivel nacional como provincial, del impacto de estas acciones en la adopción de tecnología conservacionista mas allá de las prácticas subsidiadas, aunque se descuenta una mayor conciencia de los productores en el problema de la erosión.

En contraposición, la suspensión de los aportes nacionales en 1989 por las dificultades financieras del Estado Nacional sumado al de los estados provinciales, llevó a un marcado deterioro de los equipos técnicos provinciales de conservación de suelos, excepto en aquellas pocas provincias que contaban con una normativa propia para tal objetivo.

5- LEGISLACION PROVINCIAL

Las provincias han regulado el uso y la conservación de suelos a través de diversos instrumentos jurídicos. Al respecto, se han ocupado del tema las constituciones, códigos rurales, leyes específicas de suelos, o genéricas de recursos naturales, decretos, resoluciones, etc.

A la vez, también han recurrido a la creación de Servicios de Conservación, Programas de Recuperación, entre otros mecanismos institucionales de protección del suelo.

Asimismo, la totalidad de las provincias argentinas han adherido a la ley nacional de conservación de suelos N° 22.428.

Observando el derecho público provincial en materia de suelos, queda reflejada, en los hechos, las facultades concurrentes entre la Nación y las Provincias en esta materia.

CHUBUT

La provincia ha dictado la Ley N° 1119 en 1973. Esta norma declara de interés público la conservación de los suelos, propendiendo al uso racional del mismo, con miras a mantenerlo y/o mejorar su capacidad productiva.

La ley faculta al Poder Ejecutivo a establecer regiones de suelos erosionados, establecer técnicas, manejos y recuperación de suelos, establecer créditos de fomento, etc.

También puede el Poder Ejecutivo limitar el derecho al uso del suelo a los particulares, quienes deben denunciar la existencia de suelos degradados y ejecutar los planes de prevención dispuestos por las autoridades, las que colaborarán en su realización.

La ley fija multas para los infractores a la misma.

A través del decreto N° 439, la Provincia reglamenta la ley 1119 y su modificatoria 1740, facultando a la autoridad de aplicación a requerir información a los particulares y fijar planes de recuperación de los suelos; previéndose que la propia entidad estatal lleve a cabo el plan a costa del particular, ante el incumplimiento de éste. Incluso, se contempla la posibilidad de expropiar las áreas erosionadas para lograr su recuperación.

Luego, a través del decreto 843/80 se prohíbe la extracción y transporte de ciertas especies como molle, algarrobo, por provocar daños a los suelos.

CORDOBA

La ley 2111, dictada en 1956, declara de interés público la conservación de los suelos y obligatorio para los habitantes adoptar las medidas necesarias a fin de evitar su degradación.

Los propietarios deben denunciar si existe en su campo erosión del suelo; a su vez deberán realizar los trabajos que sean necesarios para su reparación. Al respecto, las autoridades pueden determinar la concreción de tareas específicas. Asimismo, se prevee la posibilidad de expropiar las tierras erosionadas o degradadas.

A través de los decretos N° 3516/93, 4203/93, 4204/93 y 4205/93, la Provincia declara zonas de erosión, fijando tareas a realizar por los productores de esos lugares.

RIO NEGRO

A través del Decreto 1196/87 se crea la Comisión Provincial de Conservación de Suelos, cuyas función era coordinar acciones institucionales para la ejecución de programas de conservación y mejoramiento de los suelos.

En 1993 se sanciona la ley N° 2631, de "Medio Ambiente", cuyos artículos 9, 10 y 11 se refieren específicamente a la conservación y manejo de los suelos.

La ley impide el uso de químicos que puedan afectar los suelos, así como también el manejo inadecuado de los mismos. Autoriza a las organismos públicos a adoptar medidas orientadas a la recuperación de los suelos.

Esta ley aún no ha sido reglamentada.

TUCUMAN

La ley 6290 declara de interés público la acción oficial y privada que tienda a la conservación del suelos agrícola, procurando mantener y mejorar su capacidad productiva.

Se dispone que los productores deben realizar prácticas conservacionistas, informar la existencia de procesos de degradación y permitir las inspecciones de las autoridades. Asimismo, se prohíbe toda acción que conduzca a la degradación de los suelos.

El Estado fija las normas técnicas a cumplir, otorga créditos, difunde normas de conservación, inspecciona predios, asiste técnicamente a los productores, entre otras acciones específicas.

Se prevee la aplicación de multas a los infractores.

Así también se contempla la creación del Fondo Especial de Conservación de Suelos; aunque éste no fue integrado.

CATAMARCA

La ley 2480 declara de interés público y obligatorio la conservación de los suelos, procurando mantener su capacidad productiva. En función de ello, se faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar y establecer técnicas de uso y manejo de suelos; asesorar a los productores, admitiéndose hasta la posibilidad de expropiar tierras erosionadas a fin de recuperarlas.

Concordantemente con ello, se prohíben ciertos métodos agrícola-ganaderos que conduzcan a la degradación de los suelos. Es también obligación del productor denunciar la existencia de suelos degradados y realizar los trabajos oficiales de prevención y lucha contra la erosión y agotamiento de los suelos.

La ley provee la aplicación de multas a los infractores.

SANTIAGO DEL ESTERO

La Unidad Ejecutora Provincial de Conservación de Suelos, dependiente de la Corporación del Río Dulce, tiene a su cargo el contralor de la leyes provinciales N° 469 y 4886 y sus decretos reglamentarios, referentes a Salinización e Inundación de los Suelos, como así también el Convenio A y E.E - C.R.D, en lo que se refiere a trámites por desempadronamiento y /o reempadronamiento de tierras afectadas por salinidad y/o sodicidad.

Igualmente, es de incumbencia de esa Unidad, el estudio, relevamiento y análisis de los suelos y aguas en todo el ámbito del territorio provincial, con toda la compleja disciplina dentro de los temas suelos-aguas.

A su vez, la C.R.D es la autoridad de aplicación de la ley 22.428 y su decreto reglamentario N° 681/81.

CHACO

A través de las leyes 3295 y 3424 se declara de interés provincial la confección de cartas de suelos en distintas zonas de la provincia.

La ley N° 3035 declara de interés público el mantenimiento y restauración de la capacidad productiva de los suelos.

Se faculta al Estado a establecer técnicas para el uso y

manejo de los suelos, limitando las atribuciones sobre los suelos a los propietarios. Además, se proyecta el fomento a la conservación de suelos, el establecimiento de líneas de crédito, campañas de educación y concientización, etc.

Por medio del decreto 1017/89 se reglamenta la ley 3035, detallando las facultades de la autoridad provincial de aplicación de la legislación de suelos -el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

SANTA FE

Esta provincia ha dictado la más reciente ley de conservación y manejo de los suelos. Se trata de la ley 10552.

Esta norma declara de orden público el control y prevención de la degradación de los suelos, la recuperación y mejoramiento de tierras para la producción, y la promoción de la educación conservacionista.

Se dispone que deberá adecuarse la utilización de la tierra conforme su aptitud y manteniendo el equilibrio del ecosistema, teniendo en cuenta las posibilidades de los usuarios.

La Autoridad de Aplicación de la ley deberá establecer normas para el correcto uso de las prácticas conservacionistas, promover la educación sobre el particular, aprobar el Plan de Conservación de Suelos que presenten los particulares, etc.

La ley prevé estímulos, como exenciones impositivas a quienes se encuentran afectados al Plan de Conservación de Suelos. También se contempla la posibilidad de subsidios, créditos especiales, cesión de maquinarias, etc.

Para acceder a los estímulos deberá presentarse el Certificado de Ejecución de Prácticas, de acuerdo al Plan aprobado.

También se crea el Fondo Provincial de Conservación y Manejo de Suelos, cuyo fin primordial es proporcionar los medios necesarios para fomentar la conservación de los suelos. Se contempla que parte de los impuestos inmobiliarios y sobre los Ingresos Brutos financien al Fondo. También ingresa lo recaudado en concepto de multas, legados, etc.

Finalmente, se dispone que el Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias para que en la planificación y ejecución de obras públicas, viales, férreas y urbanísticas se apliquen las técnicas de conservación de suelos.

A través del decreto 3445 se reglamenta la ley 10552, detallándose las facultades específicas de la Autoridad de Aplicación de la ley. Se hace referencia a la realización de un mapa de suelos, que verifique el grado de degradación de los mismos; se determinan los tipos de prácticas a realizar, las sanciones ante el incumplimiento de lo dispuesto por la ley, etc.

7- CONCLUSIONES

Se ha analizado el ordenamiento jurídico vinculado a la problemática de los suelos; teniéndose particularmente en cuenta lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Fomento a la Conservación de Suelos N° 22.428 y un buen número de leyes provinciales.

Cabe recordar que existen también disposiciones vinculadas al tema en el Código Civil, en los diferentes Códigos Rurales de las Provincias, en la legislación sobre bosques, etc.

No obstante, las normas consideradas en el presente trabajo constituye el esquema jurídico básico en esta materia.

A tenor de lo expuesto en la legislación analizada surge una primera observación, referida a los distintos mecanismos normativos instrumentados para lograr el uso racional del suelo, su conservación y recuperación.

Al respecto, quedan manifiestamente evidenciadas dos metodologías para lograr esos cometidos. Una elige el camino de fomentar la adopción de prácticas conservacionistas; la otra establece medidas de cumplimiento obligatorio para lograr la conservación y recuperación de los suelos.

La Ley Nacional 22.428 de Fomento a la Conservación de Suelos, como su propio nombre lo indica opta por la persuasión. En la Exposición de Motivos de esa norma se explicita la vía elegida: "...es inconveniente pretender imponer un régimen coercitivo y sancionatorio a los productores para obligarlos a conservar sus suelos o combatir la erosión; pues tal tentativa de compulsión despertaría una seria resistencia de quienes tienen que ser voluntaria y razonadamente los que llevan a cabo en sus campos las prácticas conservacionistas que es imperioso que se efectúen con la mayor amplitud posible. En tal sentido se considera que cualquier género de legislación compulsiva sería objetada por sus destinatarios como lesiva al derecho de propiedad privada.."

Luego se agrega que "Se aprecia que, en cambio, que el productor será receptivo a las medidas de fomento como a los estímulos fiscales y crediticios, además de una apropiada asistencia técnica en conservación de suelos.."

Finalmente, se consigna que "Es por ello que el proyecto se define netamente como una ley de fomento a la conservación de los suelos".

Sin descuidar las medidas de fomento, la legislación provincial, en cambio, adopta una posición más intervencionista y asigna un rol preponderante al Estado en materia de conservación de suelos.

La leyes provinciales limitan el derecho del propietario en

el uso del suelo, le asignan obligaciones diversas, como denunciar el grado de erosión, realizar las prácticas dispuestas por las autoridades, etc. Incluso, en algunas provincias se admite la expropiación de los suelos degradados para su recuperación.

Evidentemente, se trata de dos herramientas jurídicas manifiestamente diferenciadas. Una privilegia el derecho de propiedad y confía en la conciencia individual del productor; la otra procura resguardar el interés común de la sociedad en conservar y recuperar los suelos y dispone los instrumentos jurídicos que resulten apropiados para ese objetivo.

Finalmente, pareciera desprenderse de la nueva normativa de la Constitución Nacional que la reformada Carta Magna se inclina hacia posturas jurídicas que privilegian el interés social en la conservación y recuperación de los suelos.

Confirmaría esta aseveración las siguientes disposiciones constitucionales:

1. El derecho a un ambiente sano supone que las actividades productivas pueden satisfacer las necesidades presentes "...sin comprometer las de las generaciones futuras".
2. La obligación de recomponer el daño ambiental causado.
3. Determinar que las autoridades "...proveerán a la protección (del derecho ambiental) y a la utilización racional de los recursos naturales".
4. Facultar a la Nación a dictar presupuestos mínimos de protección.
5. La creación del "amparo ambiental", consagrando una legitimación procesal amplia, que incluye al afectado, al defensor del pueblo y a las ONG.

SUELOS

LEGISLACION NACIONAL

Ley Nº 22.428 de Fomento de Conservación del suelo.

Decreto 681 Reglamentario de la ley 22428/81.

En relación a la mencionada reforma del Código Civil Decreto Ley 17.711/68, que modificó los artículos 2513 y 2514 dicha redacción se define de la siguiente manera: "Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular. Al decir el artículo 'conforme a un ejercicio regular', sustituya la mención de 'según la voluntad del propietario. El puede desnaturalizarla, degradarla o destruir la...'

A la variación indicada debe agregársele el texto del art. siguiente, que dice: 'El ejercicio de estas facultades no puede ser restringido, en cuanto no fuere abusivo, aunque privare a terceros de ventajas o comodidades'. Este segundo artículo agrega la expresión sustancial de que el ejercicio no puede ser abusivo.

En el año 1958 se presentó un proyecto mediante el cual se creaba el Instituto Nacional para la Conservación del Suelo, iniciativa que finalmente no prosperó.

Fuera de la ley nacional 13.246 son pocos los textos legislativos vigentes que se dedican a considerar en forma expresa el tema técnico de la conservación del suelo. La ley de ministerios y demás normas aplicables, sólo tienen referencias indirectas e imprecisas al asunto que nos ocupa.

Fue mucho más preciso el decreto ley 21.680/56, modificado por la ley 15.429, que estableciera el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuando en su artículo 2º, inciso a), dejaron sentado que el organismo promovería las investigaciones sobre los problemas relacionados con los recursos naturales y con la técnica de la producción.

El decreto 32.605/47, reglamentario de la profesión de ingeniero agrónomo, había establecido que a ella competen las funciones técnicas relativas al manejo y conservación del suelo e interpretación de los análisis correspondientes (artículo 1º). En el artículo 3º del Decreto 23.960/53 se estableció el asesoramiento obligatorio, por parte del ingeniero agrónomo, en todo establecimiento que se dedique a la lucha contra la erosión" (Dr. Edmundo Fernando Catalano - Teoría General de los Recursos Naturales / Eduardo A. Pigretti - Derecho Agrario y Recursos Naturales - Política Legal de los Recursos Naturales).

LEYES PROVINCIALES DE ADHESION AL REGIMEN DE LA LEY NACIONAL DE
SUELOS 22.428/81

Catamarca Ley 3957/83
Chaco Ley 2635/81
Córdoba Ley 6628/81
Corrientes Ley 3574/80
Entre Ríos Ley 6752/81
Formosa Ley 1156/82
Tierra del Fuego Ley 5344/81
La Pampa Ley 1074/81
La Rioja Ley 4206/83
Mendoza Ley 4597/81
Misiones Ley 1378/81
Neuquén Ley 1347/82
Río Negro Ley 1556/82
Salta Ley 5973/82
San Juan Ley 5166/82
San Luis Ley 4268/81
Santa Cruz Ley 1427/81
Santa Fe Ley 8829/81
Santiago del Estero Ley 5051/81

CATAMARCA

Ley 3957/83 Adhesión a la conservación de los suelos.

Ley 2480/72. Declaración de interés provincial.

En el Cap. I. Objeto y Funciones, se determina que el Poder Ejecutivo adoptará por medio de la Dirección Agropecuaria Bosques e Industrias algunas de las siguientes medidas: 1) reglamentar el desmonte y la explotación forestal en función de la relación suelo-bosque. 2) Establecer normas para el mejor aprovechamiento de la fertilidad y fijar el régimen de conservación. 3) Establecer un régimen racional de pastoreo en los campos, determinando la capacidad ganadera máxima. 4) Reglamentar la roturación de las praderas naturales, el cultivo total o parcial de las tierras fácilmente erosionables, etc. La ley establece la significación de los términos erosión, agotamiento, degradación, decapitación y conservación de los suelos.

Cap. II Estudio del suelo y planeamiento agrotécnico.

Cap. III Normas edafológicas para la colonización.

Cap. IV Medidas y trabajos para la conservación de los suelos.

CORDOBA

Ley 6628/81 Adhesión al régimen de la ley 22428/81 Modif. por Ley 6748/82 (Deroga Art. 4º)

Ley 4205/93 Uso y manejo inadecuado del suelo. Región de erosión o de suelos agotados o degradados.

CHACO

Ley 2635/81 Adhesión a la ley 22.428.

Ley de Suelos 1323/74.

Decreto Reglamentario 1987/74.

Ley 3035 Mantenimiento y Restauración de la capacidad productiva de los suelos.

LA PAMPA

Ley 1074/81 Adhesión a la ley 22.428

Ley 155/55 De interés público la conservación del suelo agrícola.

Decreto 758/69 Delimitación de 2 zonas de erosión.

LA RIOJA

Adhesión ley 4206/83 al régimen de la ley 22.428/81.

MENDOZA

Ley 4597/81 Ley de conservación de suelos

Decreto 155/82 Dirección Agropecuaria Organismo de Aplicación de la ley 22428/81

NEUQUEN

Ley 1347/82 Adhesión al régimen de la ley 22.428/81.

RIO NEGRO

Ley 1556/82 Adhiérese a la ley Nac. 22.428/81 de fomento a la conservación de los suelos.

SALTA

Ley 5973/82 Adhesión a la ley 22428/81
Ley 6118 Agricultura y Ganadería. Promoción Agropecuaria. Convenio.

SAN JUAN

Ley 5166/82 Adhiere a la ley Nac. 22.428/81.
Ley 5824/87 Preservación de cursos de Agua, Suelo, Aire y Control de la Contaminación.

SAN LUIS

Ley 3400/71 Protección y conservación de suelo, las pasturas y los bosques naturales.
Ley 4268/81 Adhesión a la ley Nac. de suelos.

SANTA CRUZ

Ley 1427/81 Adhiere a la ley 22.428/81.
Ley 229 de conservación de suelos y aprovechamiento de los recursos naturales.
Decreto 900/82 Reglamentación de la ley 14270/81.

SANTIAGO DEL ESTERO

Ley 2852 Prohibición de explotaciones que afecten el estado natural de la flora en las tierras sobre los márgenes de los ríos.
Ley 5051/81 Adhiere a la ley 22.428/81
Decreto 681 Aclarándose la compatibilidad legislativa con las normas preexistentes.
Ley 4646 Tierras Rurales: pautas para calificar los suelos.
Decreto Acuerdo Serie B Nº 2340/80. Normas Reglamentarias sobre Desmontes en el Territorio Provincial.

TIERRA DEL FUEGO

Ley 5344/81

JUJUY

Ley 3785/81 Adhiere a la ley 22428/81
Ley 3103/74 Prohíbese la explotación y/o de ripio, arena y otros materiales en áreas colindantes con ambas riberas de los ríos del Territorio Provincial.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.4. RECURSO SUELO

2.4.2. Aspectos Legales

2.4.2.2. Legislación Seleccionada

INSTRUMENTOS JURIDICOS DE REGULACION DEL USO Y LA CONSERVACION DE LOS SUELOS

ANALISIS

La función de una ley de conservación del suelo, es regular las relaciones entre los productores con la finalidad de un uso racional del suelo. Es una guía de ordenamiento de la conducta.

OPCION SELECTIVA DE REGIMEN LEGISLATIVO CONSIDERADO OPTIMO LEY DE SUELOS 3818/89 de la PROV.DE ENTRE RIOS, MODELO Y GUIA PARA EL DICTADO DE NORMAS EN LEYES PROVINCIALES SEMEJANTES

En la búsqueda selectiva para la obtención de un marco referencial de legislación de suelos sobre la base conceptual del recurso y los factores que insiden especialmente en la degradación del mismo, advertimos la existencia de la Ley 8318/89 de la Prov. de Entre Ríos, la ley 10.552/90 de la Prov. de Santa Fe y conjuntamente tomamos otros enunciados legales de interés que se transcriben textualmente:

- b) La Rioja. Ley 4206 Modelo de Adhesión a la ley 22428, sancionada en el año 1983. Proyecto de ley de suelos 1984 (Ministerio Asuntos Agrarios).
- c) Santa Cruz. Ley 229 Modelo de Incorporación de los postulados constitucionales a la Ley de Suelos, sancionada en el año 1960.
- d) La Pampa. Ley 155 y Decreto 758 Modelo para la explotación y expropiación. Condiciones limitantes. Sancionados ley año 1955, decreto año 1969.
- e) El Chaco. Ley 1323, Decreto 1987. Modelo en relación a obligaciones de los beneficiarios y atribuciones de la autoridad de aplicación. Decreto sancionado año 1974.
- f) Tucumán. Ley 3571, Decreto 25/3, Decreto 922/3 Modelo de medidas prohibitivas; de recuperación. ^{Fondos} Multas. Ley sancionada en el año 1969 y Decretos en 1972 y 1981 respectivamente.
- g) Corrientes. Decretos 681 del 1981 (Reglamento Ley 22.428). Modelo con referencia al factor antrópico y al tema técnico y económico para la conservación del suelo. Ley 4361 año 1982.

LEY DE SUELOS 8318-12 DE DICIEMBRE 1989

PROVINCIA DE ENTRE RIOS (PRINCIPAL MODELO DE REFERENCIA)

La ley de la Provincia de Entre Ríos, además de prever una organización capaz de conducir un estudio de suelos, dicta normas para un parcelamiento racional de las tierras en unidades económicas y fija limitaciones a las explotaciones que originan erosión. Evita la aplicación de penalidades, en el entendimiento de que los productores deberán buscar la aplicación de los métodos de conservación del suelo, por la convicción de que los mismos le serán beneficiosos.

"Es ésta una oportunidad de crear una organización provincial con facultades para formular una política conservacionista, estimular el desarrollo de una mentalidad acorde en la población en general y principalmente ordenar una asistencia directa a los productores."

LEY Nº 8.318 - 12 de Diciembre de 1989

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

C A P I T U L O U N O :

ARTICULO 1º.- Declárase de interés público y sujeto a uso y manejo con servacionista a los suelos de la Provincia que por sus condiciones naturales y por acción antrópica: manifiesten síntomas o susceptibilidad de degradación.-

Se incluye en el concepto de degradación a los efectos provocados por: erosión, agotamiento, deterioro físico, alcalinidad, acidificación, salinidad y el drenaje inadecuado.-

ARTICULO 2º.- A los efectos previstos en el artículo anterior, se adecuará la utilización de los suelos conforme a su aptitud para distintos niveles de incorporación de tecnología y teniendo en cuenta las posibilidades técnicas y económicas del productor.-

C A P I T U L O D O S:

Autoridad de aplicación:

ARTICULO 3º.- La Secretaría Ministerial de Asuntos Agrarios, a través de la Dirección de Suelos y Agua , será la autoridad de aplicación de la Ley y sus disposiciones reglamentarias.

ARTICULO 4º.- Será competencia de la autoridad de aplicación:

a) Especificar las necesidades de conservación y manejo de los suelos, para cada área conforme a su aptitud para los distintos niveles de incorporación de tecnología.-

b) Elaborar un Catálogo de Prácticas conservacionistas que incluya las normas para el adecuado plan de ejecución.-

c) Comunicar toda información necesaria tendiente a la correcta aplicación de la Ley.-

d) Establecer las pautas técnicas y normas para la elaboración de los planes de conservación y manejo de suelos.-

./.

e) Aprobar los planes de conservación y manejo de suelos, verificar su ejecución y el mantenimiento de las obras como así velar por el correcto cumplimiento de la Ley.-

f) Difundir las prácticas conservacionistas en el ámbito de la provincia.-

g) Aplicar sanciones.-

h) Dictar normas de acuerdo con las necesidades que emanen de la Ley y su Decreto Reglamentario.-

C A P I T U L O T R E S :

Areas de conservación de suelos:

ARTICULO 5º.-La autoridad de aplicación determinará las áreas de conservación y manejo de acuerdo con la magnitud del proceso erosivo, como así también para establecer obligaciones y medidas de estímulo, clasificándolas en:

- a) Area de conservación y manejo de suelos voluntario.-
- b) Area de conservación y manejo de suelos obligatorio.-
- c) Area de conservación y manejo de suelos experimental.-

La clasificación de un área podrá ser modificada según criterio de la autoridad de aplicación, sin que este acto anule los beneficios acordados con anterioridad a la modificación.-

ARTICULO 6º.-Se declarará Area de Conservación y Manejo de Suelos Voluntario, aquella donde el organismo de aplicación considere necesario promocionar las prácticas de conservación de suelos.-

ARTICULO 7º.-Se declarará Area de Conservación y Manejo de Suelos Obligatorio, a toda zona donde los procesos de degradación tiendan a ser crecientes y/o se desarrollen en un ámbito que no solo alcance al productor individual, sino que los efectos se prolonguen en el espacio y en el tiempo. En este caso los productores involucrados están sujetos a prácticas de conservación y manejo obligatorio.-

ARTICULO 8º.-Para las Areas de Conservación y Manejo de Suelos Obligatorio, funcionará un servicio para productores de escasos recursos, los que serán asistidos técnica y/o crediticiamente en las tareas de conser

./.

vación de suelos. El servicio técnico será prestado por el organismo de aplicación.-

ARTICULO 9º.- Se declara Area de Conservación y Manejo de Suelos Experimental, cuando sea necesario la realización de trabajos de investigación de adaptación de tecnología o cuando se trate de comprobar la efectividad de una práctica y se cuente con el consentimiento expreso del propietario.

ARTICULO 10º.- En la Resolución de creación de un Area de Conservación y Manejo, se dejará constancia de su clasificación, su superficie, límites, la nómina de los predios incluidos y las prácticas que serán promovidas o desalentadas y si correspondiera las que resulten obligatorias o prohibidas.-

C A P I T U L O C U A T R O :

Estímulos:

ARTICULO 11º.- Tendrán acceso a los estímulos que establece la presente Ley, todos aquellos propietarios, arrendatarios, contratistas, aparceros, usufructuarios y tenedores por cualquier título legítimo de inmuebles rurales ubicados en las zonas declaradas como Areas de Conservación y Manejo de Suelos.-

ARTICULO 12º.- Según las características de los trabajos de conservación realizados en las Areas de Conservación y Manejo se establece la siguiente reducción del Impuesto Inmobiliario:

a) Prácticas permanentes, exención o reducción del Impuesto Inmobiliario Provincial, sobre superficie afectada con este tipo de prácticas durante un plazo no mayor de diez (10) años y siempre que las prácticas se mantengan durante ese período.-

b) Prácticas semipermanentes: exención o reducción del Impuesto Inmobiliario Provincial, sobre superficie afectada con este tipo de práctica, por un plazo de dos (2) a cinco (5) años y siempre que las prácticas se mantengan durante dicho período.-

c) Prácticas anuales: exención o reducción del Impuesto Inmobiliario Provincial, sobre la superficie afectada con este tipo de

./.

prácticas, por un plazo no mayor de dos (2) años y siempre que la práctica se mantenga por dicho lapso.-

La autoridad de aplicación fijará los tipos de prácticas, los plazos, y los porcentajes que se reducen del Impuesto Inmobiliario según el Area.-

ARTICULO 13º.- La Provincia apoyará la conservación y manejo de suelos mediante créditos especiales, atención de problemas de infraestructura, cesión en préstamo o comodatos de maquinarias específicas, etc.-

C A P I T U L O C I N C O :

Requisitos y obligaciones:

ARTICULO 14º.- Para acceder a los estímulos previstos en la presente Ley, se deberá presentar un Plan de Manejo y Conservación de Suelos de cuya elaboración será responsable un Ingeniero Agrónomo. La participación de otros profesionales dentro del plan aludido estará determinada de acuerdo con las incumbencias de cada una de las profesiones. Los profesionales intervinientes deberán estar inscriptos en un Registro que tendrá a su cargo la autoridad de aplicación.-

ARTICULO 15º.- El plan mencionado en el artículo 14º será presentado ante la autoridad de aplicación, para su aprobación y si así resultara se emitirá un certificado al efecto donde constarán los beneficios y estímulos acordados, el que será inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción que corresponda, debiendo dejar constancia en caso de venta o transferencia.-

ARTICULO 16º.- El beneficiario deberá dejar constancia de los beneficios percibidos y de las obligaciones asumidas en todo instrumento público o privado por el que el inmueble fuese objeto de venta, de arrendamiento o de cualquier otra forma que implique su uso por parte de terceros.-

ARTICULO 17º.- En el caso de las Areas de Conservación y Manejo Obligatoria, el plan mencionado en el artículo 14º, deberá ser presentado obligatoriamente por el productor, en un plazo de un año de comunicada la resolución de declaración del Area.-

./.

ARTICULO 18º.- Los titulares de los beneficios acordados por el régimen de la presente Ley, deberán mantener en buenas condiciones de uso y funcionamiento las obras o prácticas para las que se concedió el estímulo, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuitos. Tal obligación deberá mantenerse por un plazo igual al de la vigencia de la obra o práctica fijada por el organismo de aplicación. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se interrumpiera el proceso de recuperación de suelo, el beneficiario comunicará fehacientemente esta situación a la autoridad de aplicación, quién resolverá la presentación de un nuevo plan de conservación que contempla las contingencias que afectaron el predio.-

ARTICULO 19º.- Los propietarios, arrendatarios, contratistas, aparceros y tenedores por otros títulos de la tierra, no podrán oponerse a la ejecución y al mantenimiento de las obras o prácticas de conservación que se lleven a cabo bajo el régimen de la presente Ley.-

ARTICULO 20º.- Cuando la ejecución de un plan de manejo y conservación de suelos signifique una modificación en el uso o goce de la tierra, ésta deberá ser resuelta privadamente por acuerdo entre partes o, en su defecto, por las normas de Derecho común que correspondiere.-

C A P I T U L O S E I S

Sanciones:

ARTICULO 21º: La falta de ejecución total o parcial de las prácticas previstas o la ejecución de las prácticas inadecuadas, acciones para las cuales se haya otorgado algún beneficio por esta Ley o el incumplimiento de lo establecido en el Artículo 18º, producirá las siguientes sanciones:

- a) Caducidad de los beneficios acordados.-
- b) Reintegro de los montos del Impuesto Inmobiliario reducidos, de los créditos otorgados, o de cualquier otro beneficio acordado a valores actualizados, más los intereses correspondientes en los plazos y formas que se establezcan en la reglamentación.-

ARTICULO 22º.- Los propietarios u ocupantes de inmuebles rurales ubicados en las Areas de Conservación y Manejo Obligatoria , que no presenten los planos conforme al Artículo 17º, serán emplazados a presen

./.

tarse dentro de los noventa (90) días, vencido dicho término, el organismo de aplicación sancionará al infractor con una multa anual de hasta el ciento por ciento (100%) del importe que corresponda abonar en concepto del Impuesto Inmobiliario del predio, mientras el plan respectivo no sea presentado.-

Igual sanción corresponderá cuando habiéndose presentado el plan, la autoridad de aplicación comprobare la falta de cumplimiento del mismo.-

ARTICULO 23º.- Toda persona que contravenga las disposiciones de la presente Ley o su reglamentación serán considerados infractores, debiéndose informar de tal situación a todos los organismos públicos de la Provincia y se solicitará que el infractor sea excluido de todo programa de fomento agropecuario con quita de apoyo estatal, hasta tanto no desaparezca el estado de infracción.-

ARTICULO 24º.- Las personas que contravengan el artículo 19º, serán considerados infractores y se actuará conforme a las prescripciones del artículo 23º.-

C A P I T U L O S I E T E :

Responsabilidad Profesional:

ARTICULO 25º.- Los Profesionales que hubieran falseado u ocultado la realidad de la documentación serán solidariamente responsables con los titulares del estímulo y serán sancionados según la naturaleza o importancia de la transgresión; en este caso, se los podrá inhabilitar para actuar en los trabajos relacionados con la presente Ley, por un plazo no mayor de años, y las actuaciones se elevarán al respectivo Colegio Profesional.-

C A P I T U L O O C H O :

Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos:

ARTICULO 26º.- Créase la Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos, con dependencia de la Secretaría Ministerial de Asuntos Agrarios en lo atinente a su organización y a las políticas orientativas de su quehacer específico y como órgano asesor y consultor del Poder Ejecutivo.-

ARTICULO 27º.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

./.

- a) Coordinar las acciones interinstitucionales que se requieran para la implementación y ejecución de la presente Ley.-
- b) Proponer normas de uso y manejo de suelos.-
- c) Participar en el control y evaluación de la Ley de Conservación y Manejo de Suelos.-
- d) Propiciar la difusión de los principios conservacionistas a través de los organismos competentes de Educación y de los medios de comunicación social.-
- e) Otorgar premios y menciones honoríficas a las personas que se destaquen por su accionar conservacionista.-
- f) Asesorar al organismo de aplicación cuando éste lo requiera.-
- g) Establecer las normas que regirán su funcionamiento.-

ARTICULO 28º.- La Comisión será presidida por el Señor Secretario Ministerial de Asuntos Agrarios o la persona que él designe al efecto.-

Serán invitados a integrar esta Comisión las siguientes entidades: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Universidad Nacional de Entre Ríos, Dirección Provincial de Vialidad, Consejo General de Educación, Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Entre Ríos, Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria, Federación Agraria Argentina, Consejo Intercooperativo Agropecuario, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, representantes de los Consorcios de la Ley Nº 22.428 de Fomento a la Conservación de Suelos y de los productores de Areas de Conservación y Manejo Obligatoria.-

ARTICULO 29º.- El Presidente de la Comisión resolverá respecto a la incorporación de otras Instituciones oficiales y privadas que formarán parte de esta Comisión.-

C A P I T U L O N U E V E :

Fondo Provincial de Conservación de Suelos:

ARTICULO 30º.- Créase el Fondo Provincial de Conservación y Manejo de Suelos para atender los requerimientos financieros que demande la aplicación de la presente Ley, el cual estará a cargo de la autoridad de

./.



aplicación y tendrá los siguientes objetivos:

a) Proporcionar los medios necesarios para que la autoridad de aplicación desarrolle las tareas vinculadas con la presente Ley.-

b) Solventar programas de difusión, extensión y educación tendientes a lograr una conciencia conservacionista en el medio rural y en toda la comunidad provincial.-

c) Posibilitar el relevamiento agroecológico de las Areas de Conservación y Manejo de Suelos y de aquellas donde sea imprescindible realizar tareas de conservación de suelos.-

d) Apoyar aquellos proyectos conservacionistas que por su complejidad y alto costo no pueda ser afrontado por los productores.-

e) Solventar los gastos que demande el Servicio a los productores de escasos recursos de las Areas de Conservación y Manejo Obligatorias.-

f) Solventar los gastos que demanden los trabajos realizados en las Areas de Conservación y Manejo Experimental.-

g) Financiar la capacitación y el entrenamiento de Técnicos en Conservación de Suelos.-

ARTICULO 31º.- El Fondo de Conservación y Manejo de Suelos, tendrá afectación especial al cumplimiento de los objetivos señalados y se constituirá por:

a) Un porcentaje de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural según lo establezca la reglamentación.-

b) El producido de las multas aplicadas en virtud de la presente Ley.-

c) Legados, donaciones u otras liberalidades.-

d) Aportes de diversos orígenes nacionales o internacionales.-

ARTICULO 32º.- Anualmente la autoridad de aplicación fijará en la Ley el Presupuesto el porcentaje necesario de los Impuestos mencionados en el artículo anterior.-

ARTICULO 33º.- Los aportes provenientes de los recursos mencionados serán transferidos a una Cuenta Especial denominada Fondo Provincial de

./.

Conservación y Manejo de Suelos que se habilitará a tal efecto en el Banco de la Provincia de Entre Ríos.-

C A P I T U L O D I E Z

Disposiciones Generales:

ARTICULO 34º.- La Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad al efectuar proyectos de obras en la Provincia deberá tener en cuenta la derivación de las aguas pluviales, como consecuencia de la sistematización de los campos, a los efectos de evitar la formación de carcavas a la vera de los caminos.-

ARTICULO 35º.- Los Municipios fomentarán toda acción destinada a la consecución de los fines mencionados en el artículo 1º, pudiendo hacerlo asimismo las entidades intermedias, relacionadas con la actividad agropecuaria.-

ARTICULO 36º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 180 días a partir de su promulgación.-

ARTICULO 37º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-

Sala de Sesiones, Paraná, 12 de Diciembre 1989

ORLANDO V.ENGELANN
Presidente H.C.Diputados

MIGUEL A.CARLIN
Vicepresidente 1º H.Senado
a la Presidencia

RAMON A. DE TORRES
Secretario H.C.Diputados

RAMON Z. GONZALEZ
Secretario H.C.Senadores

ES COPIA AUTENTICA.-

RODOLFO REYES
Prosecretario H.Cámara Senadores

ENTRE RIOS-LEY 8318/89. ANALISIS DE CONTENIDO

CAPITULO 1 - ART. 1 DE LA LEY

INTERES PUBLICO: sujeto a uso y manejo conservacionista por síntomas o susceptibilidad de degradación de los suelos.

CONCEPTO DE DEGRADACION: Cap.1 Art 2 ap.2 de la Ley: Erosión, agotamiento, deterioro físico, alcalinidad, acidificación, salinidad y drenaje adecuado.

AREAS DE CONSERVACION: Cap. I Art.2 Aptitud para distintos niveles de incorporación de tecnología y teniendo en cuenta las posibilidades técnicas y económicas del productor. Cap. 3 Art.5: a) Areas de conservación y manejo de suelos voluntario. b) Area de conservación y manejo de suelos obligatorio. c) Area de conservación y manejo de suelos experimental. Cap. 3 Art.6,7,8,9 y 10: Son descriptivos de las correspondientes áreas.

AUTORIDAD DE APLICACION: Art.5 2do. ap.: podrá modificar la clasificación de un área. Cap. 2 Art. 3: "La Secretaría Ministerial de Asuntos Agrarios" a través de la dirección de suelos y aguas. Cap.8 art.26: Créase la Comisión Provincial de Conservación y manejo de suelos con dependencia en la Secretaría Ministerial de Asuntos Agrarios para la Organización y Políticas orientativas y como órgano asesor y consultor del Poder Ejecutivo. Cap.2 Art.28: Integrantes de la Comisión. Art.29.

ATRIBUCIONES: a) Atribuciones de la autoridad de aplicación: Cap.2 Art. 4º, inc. a,b,c,d,e,f,g,h. Cap.3 Arts.5,6,7,8,9,10.

Cap.3 Art.8: Para las áreas de conservación y manejo de suelos obligatorio funcionará un servicio para productores de escasos recursos, prestado por el organismo de aplicación. Art.30: Fondo Provincial de Conservación de Suelos a su cargo. Art.32. b) Atribuciones de la Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos: Cap.8 art.27 inc.a,b,c,d,e,f,g.

BENEFICIARIOS-ESTIMULOS: Cap.4º art.11: Propietarios, arrendatarios, contratistas, aparceros, usufructuarios y tenedores de inmuebles rurales en zonas declaradas como áreas de conservación y manejo de suelos. Art.12; exenciones impositivas. Art.13: apoyatura provincial.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES: Descriptos en el Cap.5 art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20.

SANCIONES: Capítulo 6 art.21, inc.a y b.

Responsabilidad de los particulares: art.22,art.23,art.24.

Responsabilidad profesional: Cap.7 art.25.

Otras responsabilidades: Cap.X art.34: Dirección Provincial de Vialidad y Dirección Nacional de Vialidad.

Cap.X. Art.35: Municipios.

FONDOS: Fondo Provincial de Conservación de Suelos: Es creado a los fines de atender los requerimientos financieros que demande la aplicación de la presente ley: Capítulo 9, art.30 inc.a,b,c,d,e,f,g.

Art.31:Constitución e integración del fondo.

Art.32: Presupuesto anual.

Art.33:Cuenta especial para el fondo provincial de conservación y manejo de suelos.

Art.13:Apoyatura económica provincial.

RECURSO SUELO

PROVINCIAS DE ENTRE RIOS, SANTA FE,
LA RIOJA, CHACO, LA PAMPA,
SANTA CRUZ, CORRIENTES, TUCUMAN.

Se analiza: Interés público
Concepto de degradación
Areas de conservación
Autoridad de aplicación
Atribuciones.
Beneficios-Estímulos
Requisitos-Obligaciones
Sanciones
Fondos.

DIVERSAS LEYES DE SUELOS COMO REFERENCIA COMPLEMENTARIA (PROV.STA.FE)
Y SUPLEMENTARIAS (DE OTRAS PROVINCIAS:LA RIOJA,SANTA CRUZ,LA PAMPA,
EL CHACO,TUCUMAN y CORRIENTES)

LEY DE SUELOS 10552- 17 DE DICIEMBRE 1990
PROVINCIA DE SANTA FE (MODELO SUPLEMENTARIO)

Interés Público: Art.1 : Declárase de orden público en todo el territorio provincial:a) El control y prevención de todo proceso de degradación de los suelos;b) la recuperación, habilitación y mejoramiento de las tierras para la producción.c)la promoción de la educación conservacionista.

CONCEPTO DE DEGRADACION: A los efectos previstos en el art.anterior deberán implementarse los medios para adecuar la utilización de la tierra, conforme a su aptitud; manteniendo el equilibrio de los ecosistemas de manera de evitar el deterioro de la economía provincial y teniendo en cuenta las posibilidades reales y efectivas de los usuarios. (artículo 2)

Se considerará como proceso de degradación de los suelos,a todo fenómeno por el hecho del hombre o natural que se manifieste con síntomas de erosión, agotamiento, deterioro físico,alcalinidad-salinidad y drenaje inadecuado. A tales afectos se entenderá por: a-Erosión:El proceso de remoción y transporte de las partículas del suelo por acción del agua o viento. b-Agotamiento: La pérdida de la capacidad productiva de un suelo por disminución continuada y progresiva de los contenidos de materia orgánica, nutrientes y de la actividad biológica. c-Deterioro físico:La disminución de la capacidad de almacenamiento y circulación del agua y el aire en el suelo. d-Alcalinidad-Salinidad: La concentración de sodio y de sales solubles en el perfil del suelo, por encima de los valores normales, que perjudican la productividad.e-Drenaje inadecuado: El conjunto de condiciones que provocan un movimiento superficial o profundo, lento o rápido del agua en el suelo, que lo mantiene húmedo o seco por periodos suficientemente prolongados como para originar una notoria disminución de la capacidad productiva. (artículo 3).

La regulación del aprovechamiento o eliminación de montes naturales y artificiales quedará sujeta a los alcances de esta ley.(artículo 4)

La presente ley contemplará el control y manejo del agua almacenada superficialmente en esteros,cañadas y lagunas, para el aprovechamiento y conservación de ésta como elemento y recurso. (artículo 5).

AUTORIDAD DE APLICACION-ATRIBUCIONES:Capítulo 2, capítulo 3,art.14,13 y art.7.

AREAS PARA LA CONSERVACION: Capítulo 3.

Cap.3, Areas de Aplicación: Se declara a todos los suelos de la provincia sujetos al uso y manejo conservacionista.La Autoridad de Aplicación establecerá áreas de conservación y manejo de suelos, en toda zona donde sea técnicamente recomendable y emprender programas de conservación, recuperación,habilitación y mejoramiento de suelos.(art.11).

Artículo 12: Serán consideradas como unidades físicas de aplicación las cuencas,subcuencas o sistemas hídricos y las explotaciones agropecuarias, que por naturaleza del problema,así lo requieran.

Artículo 13: La autoridad de aplicación determinará las "Areas de Conservación y Manejo de Suelos" a través de sus organismos técnicos o a propuesta de:a-Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos, creada por Decreto Nº 1955/86. b-Municipalidades y Comunas. c-Propietarios, arrendatarios, contratistas y tenedores por otros títulos de la tierra. d-Otras organizaciones,organismos o entidades.

Artículo 14: La Autoridad de Aplicación clasificará las "Areas de Conservación y Manejo de Suelos", de acuerdo al tipo de problema que las afecta, magnitud del mismo, y a los fines del otorgamiento de los estímulos en:a-Areas de Conservación y Manejo Total;b-Areas de Conservación y Manejo Parcial.

Artículo 7: Será competencia de la Autoridad de Aplicación:a-Especificar las necesidades de conservación y manejo de los grupos de aptitud de los suelos.b-Establecer normas para el correcto desarrollo y ejecución de las prácticas a través de la elaboración de un catálogo.c-Acceder a la información necesaria existente y conducente a la correcta aplicación de la presente ley. d-Relevar,coordinar,disponer y suministrar la información legal,técnica y básica para la elaboración de los planes y realización de las prácticas,etc.

Artículo 15:Las áreas de conservación y manejo de suelos se clasificarán en:a-Areas de Conservación y Manejo Voluntario y b-Areas de Conservación y Manejo Obligatorio.

Artículo 16.- Se declarará Area de Conservación y Manejo Obligatorio a toda zona donde los procesos de degradación tiendan a ser crecientes y progresivos o se desarrollen en un ámbito que no solo alcancen al productor individual,sino que los efectos se prolonguen en el espacio y

tiempo.

Artículo 17. La Autoridad de Clasificación clasificará las áreas según el tratamiento, de acuerdo a la intensidad en: a-Tratamiento esencial, b-Tratamiento integral.

Artículo 18.- a-Area de Conservación y Manejo Total, b-Area de Conservación y Manejo Parcial; c-Tratamiento esencial, d- Tratamiento integral.

Artículo 19. La declaración de las Areas de Conservación y Manejo de Suelos se efectuará gradualmente de acuerdo a las necesidades de prevención y control de los procesos de degradación, recuperación, habilitación, etc. y en función de las posibilidades técnicas y económicas determinadas por la Autoridad de Aplicación.

DESTINATARIOS

Artículo 23. Podrán acceder a los estímulos que preve la presente Ley, los propietarios, arrendatarios, aparceros, usufructuarios y tenedores por cualquier título legítimo de inmuebles rurales que se encuentren ubicados en las zonas previamente declaradas "Areas de Conservación y Manejo de Suelos".

Artículo 14: ESTIMULOS.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES

Artículo 32: Los destinatarios de los estímulos están obligados a mantener en buenas condiciones de uso y funcionamiento todas aquellas obras o prácticas por cuya realización se hubiese acordado el estímulo (salvo causas de fuerza mayor).

Artículo 31: En las áreas de conservación y manejo obligatorio los destinatarios de los estímulos deberán presentar un plan de conservación de suelos, a pedido de la autoridad de aplicación.

Artículo 29: Para acceder al estímulo previsto deberá acreditarse que se han ejecutado las prácticas de acuerdo al plan aprobado. Dicho plan de conservación de suelos será suscripto por un profesional ingeniero agrónomo, ingeniero en recursos hídricos o licenciado en edafología. El citado plan será presentado ante la autoridad de aplicación, la cual se reserva el derecho de aprobarlo (artículo 26, 27).

INCUMPLIMIENTO-SANCIONES

Art.35. El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 32 dará lugar a las siguientes sanciones: a-Caducidad de los estímulos acordados, b-Reintegro de los montos del Impuesto Inmobiliario eximido o reducido o subsidios acordados, actualizados, más los intereses resarcitorios. c-Multa.

Art.36. Los destinatarios de los estímulos previstos que no presenten el plan de conservación de suelos en el plazo establecido en el art. 32 serán emplazados y luego pasibles de una multa.

Art.37. La falta de ejecución parcial o total de prácticas, no justificadas debidamente, previstas en el plan de conservación de suelos, implicará el reintegro, más los intereses resarcitorios correspondientes. y en áreas de conservación y manejo obligatorio esta falta será pasible además de una multa.

Art.38. La ejecución de prácticas inadecuadas para la conservación del suelo será pasible de una multa, cuyo monto podrá ser de hasta 100% del importe que corresponda abonar anualmente en concepto de Impuesto Inmobiliario.

Art.39. Cuando el estímulo fuese la reducción del Impuesto Inmobiliario, las sanciones recaerán en quienes fuesen los titulares de los estímulos al momento de producirse la infracción.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Art.40. Los profesionales que hubiesen falseado u ocultado la realidad de los hechos en la documentación que deben suscribir, serán solidaria e ilimitadamente responsables con los titulares del estímulo, en caso de convivencia dolosa entre ambos.

Art.41. Los profesionales podrán ser inhabilitados para actuar en trabajos relacionados con esta ley en el ámbito provincial, por un período inferior a 10 años.

Art.42. Serán además pasibles de la aplicación de multas por un monto equivalente a los estímulos acordados.

FONDO PROVINCIAL DE CONSERVACION Y MANEJO DE SUELOS

Art.43: Tendrán los siguientes objetivos: Financiar relevamientos agroecológicos, otorgar subsidios para la realización de prácticas conservacio-

./.

nistas que por elevado costo así lo requieran. Costear obras mayores de conservación de suelos, que por su costo no puedan ser afrontadas por el propio productor. Adquirir maquinarias específicas para la realización de prácticas conservacionistas. Financiar la capacitación y entrenamiento de técnicos en conservación y manejo de suelos. Atender todo gasto tendiente al efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Art.44. El Fondo se constituirá con aportes provenientes de: porcentaje de lo recaudado en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural-Provincial; de lo recaudado en concepto de impuestos sobre los ingresos brutos-provincial; producto de las multas aplicadas; legados, donaciones y herencias; saldos no utilizados en años anteriores; aportes nacionales e internacionales y tendrá afectación especial al cumplimiento de los objetivos previstos.

Art.45. Los porcentajes de los impuestos mencionados se establecerán anualmente en la ley de presupuestos en base a requerimientos de la Autoridad de Aplicación.

DISPOSICIONES GENERALES

Art.48. El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que en la planificación y ejecución de obras públicas, viales, hidroviales, férreas y urbanísticas, se apliquen las técnicas de conservación de suelos.

Art.49. Las personas que contravengan las disposiciones de esta ley o su reglamentación, no gozarán de créditos en las instituciones bancarias oficiales o de cualquier otra forma de ayuda económica oficial, hasta que desaparezcan las causas que motivaron la penalidad.

LEY DE SUELOS 4206 - 17 DE MARZO 1983

PROVINCIA DE LA RIOJA (MODELO COMPLEMENTARIO)

FUNDAMENTOS: "la ley 22.428 fue sancionada por el Estado Nacional el 16 de marzo de 1981. Y contempla aspectos legales para el fomento y estímulo fiscal, tendientes a la conservación y mejoramiento de los suelos en el país, contando con la adhesión de los Estados Provinciales a fin de su participación en la determinación de los distritos de suelos que necesitan de técnicas para un manejo racional de este recurso, proponiendo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, el plan de manejo de conservación o recuperación aprobado".

En esta provincia, el problema suelo no fue considerado hasta ahora con la importancia que le corresponde, ni por el sector privado, ni por el oficial, - año 1981 -.

INTERES PUBLICO: El principal motivo de dicha ley, es la carencia de un régimen legal que reglamente el aprovechamiento de tan importante recurso.

DEGRADACION: "En el uso del suelo se observa un marcado desconocimiento en su conservación. Es decir que se ha producido un estancamiento en este sentido, ante la falta de conocimiento del manejo racional que actualmente exige los altos niveles de producción. Esta situación produjo que suelos cultivados se hayan transformado en suelos esquilados y empobrecidos, erosionados y en muchos casos salinizados".

AREAS PARA LA CONSERVACION: Considerando un cultivo básico, como es la vid, en esta Provincia, su rendimiento promedio, estimado en 10.000 Kgs./Has., no respondería al potencial productivo, atribuible como causa limitante entre otras al mal manejo del suelo.

En el área ganadera, el problema posiblemente es más grave, ya que el pastoreo y ramoneo indiscriminado de cabezas de ganado, tanto mayor como menor, sumado a la destrucción de los estratos superiores con fines forestales, hizo que la erosión se apoderara del ambiente y el poder de infiltración de los suelos disminuyera. Vastas áreas desarrollaron cárcavas anchas y profundas. El suelo es arrasado por el viento y el agua a medida que se destruye la cobertura vegetal. Algo similar ocurre en faldos, donde la pendiente favorece los procesos erosivos y las cuen-

./.

cas sufren el pastoreo y pisoteo indiscriminado, produciendo escurrimientos por torrentes, cubriendo con sedimentos las áreas más bajas y el fondo de diques, disminuyendo su vida útil.

AUTORIDAD DE APLICACION: "Será organismo de aplicación de la ley Nº 22.428, la Secretaría de Estado de Asuntos Agrarios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de la Provincia, que tendrá a su cargo también la coordinación con la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de La Rioja y Subsecretaría de Hacienda, así como otros organismos que deban participar en la adopción de medidas de estímulo previstas en la ley 22.428".

ATRIBUCIONES: El estado deberá desarrollar una adecuada asistencia técnica, como así también encarar obras de infraestructura que hagan a la protección, conservación y recuperación de los suelos.

BENEFICIARIOS: En los beneficios que ha de recibir de esta ley el productor, preve los créditos especiales y reintegros que establezcan las provincias al ajustarse al régimen de adhesión. El Derecho a recibir subsidios federales y exenciones impositivas por los montos recibidos, como así también al capital y al patrimonio durante un período de 5 años y de 10 años en el caso de predios ubicados en zonas de frontera.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES: Este procedimiento implica la necesidad de cumplir con el requisito que exige el régimen de adhesión, cual es, el contar con una autoridad de aplicación. También el régimen de adhesión exige que la provincia cuente con un relevamiento edafológico y agroecológico completo, careciendo la misma de éste último elemento.

LEY DE SUELOS 1323 - 1974

DECRETO REGLAMENTARIO 1987 - 1974

PROVINCIA DEL CHACO (MODELO COMPLEMENTARIO)

INTERES PUBLICO: Art. 1: Se declara en todo el territorio de la provincia, el mantenimiento y restauración de la capacidad productiva de los suelos. Quedan expresamente incorporados al régimen de la presente, en lo referente a la aplicación de las técnicas pertinentes, las áreas comprendidas dentro de los ejidos municipales que por su apropiación productiva o por extensión o influencia resulten necesarios, como así las tierras públicas y privadas.

AREAS DE CONSERVACION: Art. 2: Se deberán reconocer y clasificar los suelos según su calidad, situación de conservación y vocación productiva.

AUTORIDAD DE APLICACION-ATRIBUCIONES: Art. 2. A los efectos del mantenimiento y la restauración de los suelos, el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su calidad de organismo de aplicación, deberá: a) reconocer y clasificar los suelos...; b) establecer en base a las técnicas que se resuelvan, limitaciones y obligaciones al estado provincial, las municipalidades, los concesionarios de tierras fiscales, a los que se les asignen predios y a los propietarios; c) dictar normas de uso y manejo racional del suelo, en especial en lo relativo a riego, reversión de los procesos de salinización y alcalinización, fertilización, complementación orgánica y mineral y detención del proceso de erosión.; d) difundir prácticas que hagan a la formación de una conciencia de conservación de los recursos productivos del suelo, proponiendo en especial censos y clases en establecimientos de enseñanza oficial o sometidos a control del estado provincial; e) participar en la planificación del uso de la tierra y su asignación en programas de colonización, proponiendo modificaciones y ajustes a los efectos de asegurar las defensas, incremento y conservación del valor productivo del recurso. Proponer mecanismos de redistribución y/o concentración parcelaria que permitan el recupero del recurso productivo; f) propiciar y celebrar convenios con la Nación, las Municipalidades, Universidades y otros organismos oficiales y privados para el desarrollo de programas de estudio, tecnologías y sistemas de defensa y recuperación del potencial productivo de los suelos o su incremento; g) propiciar la creación o aplicación de líneas especiales de crédito, conforme al programa que se realice; h) entender de oficio o a petición en todo lo relativo a la conserva-

ción del potencial productivo de los suelos (colonización, obras viales, canales, regadíos, desagües pluviales, regulación de cursos de aguas y otros).

Dictar los reglamentos de cumplimiento obligatorio para la defensa, conservación y recuperación de suelos y las relaciones del mismo con los recursos forestales e hídricos, sean estos superficiales o subterráneos.

Art.3. El Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo de aplicación de esta ley, podrá imponer incluso con el uso de la fuerza pública, la detención en la realización de obras y trabajos que afecten los recursos protegidos u obligar a la realización de trabajos y la aplicación de técnicas de conservación, defensa y recuperación a las personas de existencia real o ideal comprendidas en el art. 1.

OBLIGACIONES: Art.4 Toda persona, ocupante por cualquier título de tierras públicas dentro del territorio de la provincia, estará obligada a: 1) Denunciar la degradación manifiesta de los suelos que observe o la existencia de situaciones que estime puedan afectarlos en su valor productivo; 2) Realizar en su predio los trabajos o aplicar las técnicas conservacionistas o recuperatorias que se le indique por autoridad competente y dar cumplimiento a las tareas emergentes del programas aprobados por la autoridad de aplicación.

Art.5: Las obras o trabajos dispuestos para la defensa de la calidad productiva de los suelos o en general en programas de su recuperación y/o incrementos, serán de ejecución obligatoria por los titulares de los predios, tenedores, ocupantes o responsables legales. Vencido el término asignado a los emplazamientos efectuados, el organismo de aplicación efectuará o dispondrá la realización de los mismos, a cargo del tenedor legal, sin perjuicio de la imposición de las multas previstas.

SANCIONES: Las infracciones a la presente ley, a las reglamentaciones que se dicten, harán pasibles a los responsables de multas que se graduarán por la reglamentación entre los \$ 100 y 100.000, según la gravedad y perjuicios provocados y la reincidencia en las infracciones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería queda facultado a aplicar multas hasta \$ 5000.- y las que superen ese monto lo serán por Decreto del Poder Ejecutivo. El cumplimiento de las multas no liberará al responsable de la realización de obras y/o trabajos para el recupero de los suelos afectados.

FONDO

El presupuesto anual de la Provincia proveerá la asignación de recursos financieros para el cumplimiento de la presente y afectará en especial a los siguientes recursos: a) el importe de los trabajos que se efectúen a cuenta de terceros a modo de recupero; b) multas ingresadas por infracciones a la presente; c) las contribuciones voluntarias, legados y donaciones; d) los subsidios, subvenciones y aportes reintegrables o no, que se reciban de organismos provinciales, nacionales o internacionales.

El presupuesto general, el Poder Ejecutivo podrá crear cuentas especiales o mecanismos contables similares para la administración de programas de recuperación o incremento de la capacidad productiva de los suelos. En todos los casos, la administración de estos programas se ajustará a la legislación contable en vigor.

DECRETO 1987/74

Art.5 Degradación: Menciona los factores de degradación por erosión eólica e hídrica, salinización, anegabilidad, escurrimiento, monocultivo y otros.

AREAS DE CONSERVACION: Art.2 En coordinación con los Municipios, se determinarán las áreas de los ejidos municipales que por su aptitud productiva, por su extensión o su influencia resultan necesarias a los fines de la ley. Art.3- Art.4.

AUTORIDAD DE APLICACION: Art.1 La Dirección de Suelos y Agua Rural, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, será el organismo de aplicación de la ley 1323 y de la presente reglamentación.

Art.6 La Dirección de Suelos y agua rural será la responsable de determinar las áreas potencialmente aptas para regadío y de establecer las normas a que deberá sujetarse su aplicación, sobre la base de los respectivos estudios de suelos, agua y necesidades de drenaje, en coordinación con la administración provincial de recursos hídricos.

ATRIBUCIONES: Art.7. En los suelos afectados por procesos de salinización, deberán realizarse estudios especiales tendientes a establecer las normas de manejo para su recuperación o integración productiva.

Art.8. A efectos del incremento vertical de la productividad, deberán desarrollarse programas de investigaciones para determinar la carencia de elementos nutrientes y establecer las necesidades y posibilidades de

fertilización química y orgánica, como asimismo dictar las normas de aplicación y control en la distribución comercial de fertilizantes.

Art.9. Deberá sistematizarse y coordinarse la transferencia de conocimientos sobre prácticas conservacionistas del recurso, tendientes a formar conciencia en todos los sectores de la comunidad, y a planificar las tareas agropecuarias en la forma que más convenga, utilizando el contacto directo y todos los medios de difusión disponibles.

Art.11. La participación del organismo específico en la planificación del uso de la tierra en programas de colonización, consistirá en los aportes resultantes de los arts. 3 al 8 del presente Decreto y en la proposición de criterios técnicos tendientes a conformar unidades de producción económicamente rentables para los casos de distribución, redistribución y concentración parcelaria.

Art.14. Análogamente a lo previsto en el art.11 del presente Decreto, el organismo de aplicación deberá participar en todo lo relativo a la conservación del potencial productivo de los suelos al tratarse de proyectos de obras públicas, tales como canales, caminos, vías férreas, regulación de cursos de agua, que puedan afectar a aquellos, al igual que en los programas de uso del agua rural.

Art.10. Deberá propiciarse por ante organismos crediticios un sistema de créditos especiales para el cumplimiento de la ley y que simultáneamente contemple el desaliento o la restricción de créditos a los productores que no apliquen las normas estipuladas en ella.

Art.12,13,15,16.

Art. 7 a 16: Pautas para la investigación sobre prácticas conservacionistas, colonización, unidades de producción, tecnologías, créditos de estímulo, conservación del potencial productivo de los suelos en proyectos de obras públicas y programas de uso del agua rural. Correcto manejo de suelos y aguas, control del impacto ambiental por obras y trabajos públicos y privados.

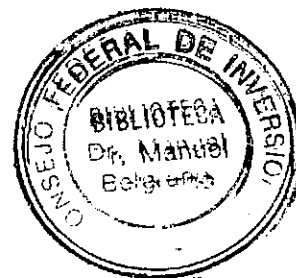
MULTAS: Art.19 -realizar obras que afecten sensiblemente la capacidad productiva de los suelos; no denunciar los hechos a que está obligado en virtud de la ley el incumplimiento a las órdenes impartidas por el organismo de la aplicación de la ley; falsear las informaciones requeridas por el organismo de aplicación; entorpecer la ejecución de obras previstas en el cumplimiento de la ley, modificarlas o destruirlas, no atender a la conservación de las obras ya ejecutadas, de acuerdo a las obligaciones que le fueren impuestas; el incumplimiento a los tra-

bajos y programas sobre manejo del suelo, dispuestas por el organismo de aplicación.

Art.21. En los casos de reincidencia, las multas que correspondieren podrán duplicarse.

Art.22. No se concederá recurso alguno en relación a multas aplicadas si el responsable no abonare previamente su importe.

Art.23. A los efectos del mejor cumplimiento de los fines previstos por la ley 1323 y esta reglamentación de Dirección de Suelos y agua rural contemplará la participación de los productores y otros sectores que se estime conveniente, en la adopción de programas y otras acciones, proponiendo al Ministerio de Agricultura y Ganadería la forma o formas de esa participación.



LEY DE SUELOS 155 - 1955

DECRETO 758 - 1969

(Actualmente se encuentra en Cámara de Diputados un Proyecto de Ley de Suelos)

PROVINCIA DE LA PAMPA (MODELO COMPLEMENTARIO EN PRIMER LUGAR)

INTERES PUBLICO

Art.1. Déclarase de interés público en todo el territorio de la Provincia la conservación del suelo agrícola,entendiéndose por tal el mantenimiento y mejoramiento de su capacidad productiva. Art.12 Declárase de orden público las disposiciones de la presente ley.

DEGRADACION

Art.6 inc.a)(no expreso) Existencia manifiesta de erosión de los suelos.

AUTORIDAD DE APLICACION (Concepto degradación)ATRIBUCIONES

El Poder Ejecutivo establecerá las regiones o áreas de suelos erosionados.A tales efectos se entiende por erosión el proceso de remoción y transportes notorios de las partículas del suelo por acción del viento y/o del agua en movimiento, que determina la pérdida de su integridad.

Art.3.Facúltase al Poder Ejecutivo para adoptar las siguientes medidas, determinar técnicas de manejo y recuperación de los suelos,establecer normas para el mejor aprovechamiento de la fertilidad y fijar regímenes de conservación; expropiar para llevar a cabo planes regionales de recuperación,tierras erosionadas, médanos,tierras de las nacientes de los cursos de agua, destinando las áreas restauradas a la explotación bajo regímenes conservacionistas o declarándolas de reserva.

Art.4. El Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la aplicación de normas agrotécnicas,limitar y prohibir las explotaciones que originan erosión de aquellos lugares donde las condiciones ecológicas favorecen ese proceso en forma manifiesta y/o cuya iniciación haya sido comprobada. El Poder Ejecutivo levantará las limitaciones o prohibiciones antes citadas al desaparecer los peligros que motivaron lasmedidas adoptadas,etc.

BENEFICIARIOS-OBLIGACIONES

Todo propietario,arrendatario,tenedor u ocupante de la tierra a cualquier título está obligado en la forma que fije la reglamentación de esta ley a:denunciar la existencia manifiesta de erosión de los suelos, rejecutar los planes oficiales de prevención y lucha contra la erosión de los suelos,realizar en su predio los trabajos necesarios de lucha contra la erosión tendientes a evitar daños a terceros.

OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR : Contribuir con el 50% de los gastos que demande la lucha contra la erosión y el médano, si ellos existieran al momento de contraer el arriendo.

OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: Mantener a su costa el predio libre de erosión y médanos, si lo ocupa en esas condiciones y contribuir con el 50% de los gastos que demande la lucha contra los mismos, si estos existieran al ser arrendado el predio.

Art. 11

SANCIONES

Art. 10 y 11.

FONDOS

Art. 9 Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán costeados con los recursos mencionados a continuación. a) Las sumas que se fijan anualmente en el Presupuesto General de la Provincia; b) el importe de las sumas que se perciban por trabajos requeridos por terceros (particulares o entidades oficiales); c) el importe de las contribuciones voluntarias, legados y donaciones, destinadas a promover la conservación del suelo; d) las multas por infracciones a esta ley.

Art. 5 A los efectos de la presente ley, el Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios procederá a: a) llevar a cabo y asesorar en la ejecución de trabajos de conservación del suelo y propender a la formación de una conciencia conservacionista a partir de la enseñanza elemental; b) facilitar la realización de trabajos por la colaboración entre los propietarios o poseedores a cualquier título de las tierras afectadas y las reparticiones correspondientes; c) posibilitar el uso económico de semillas, plantas y maquinarias especializadas para la conservación del suelo; d) disponer el asesoramiento gratuito de los productores agrarios y cooperativas organizadas.

DECRETO 758-1969

INTERES PUBLICO: "Durante un largo lapso los organismos técnicos han venido haciendo conciencia sobre la imperiosa necesidad de conservar el recurso natural básico, ya que el desarrollo provincial indiscutiblemente está ligado a la integridad y fertilidad del suelo y al uso atinado que del mismo se realice. Que los adelantos tecnológicos permiten hoy la aplicación de una serie de medidas agrotécnicas preventivas de la ero-

sión. Es necesario contar con la reglamentación del instrumento legal que permita llamar a la reflexión a aquellos que la acción persuasiva de extensión no logre convencerlos de los beneficios que implica la conservación del suelo y el deber que en tal sentido tiene el productor pampeano."

AREAS DE CONSERVACION: A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 155, se delimitan en la Prov. de La Pampa dos zonas de erosión de características ecológicas y económicas bien definidas. La zona I, con aptitud para la ganadería y la agricultura forrajera o de cosecha. La zona II, ganadera. Inclúyese además el área de agricultura intensiva, situada dentro de la zona II y que corresponde a las tierras irrigadas del río Colorado. A la Zona I se le asignará prioridad.

Art.2. El Ministerio de Economía y Obras Públicas establecerá planes orientativos de explotación elemental, ajustados a la real capacidad dentro de los suelos...

Art.4. Cuando en áreas colonizadas la superficie de unidad de explotación resulte exigua para practicar un manejo racional del suelo que impida la acción erosiva, el Poder Ejecutivo procederá a un nuevo ordenamiento de la distribución de la tierra...

AUTORIDAD DE APLICACION

Art.3 Los planes destinados a recuperar tierras para la explotación bajo sistemas conservacionistas o bien para mantenerlas como reservas, deberán ser ejecutados por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios (2da. parte).

Art.11,13,14,16,17. Agente directo de la Subs.de A.Agrarios será la D.de Agr.

ATRIBUCIONES

Art.2, 2do.y 3er. apartado: La Subsecretaría de Asuntos Agrarios cumplirá el proceso educativo tendiente a la formación de una adecuada conciencia conservacionista del suelo por intermedio de la Dirección de Extensión y Fomento Agropecuario.

Art.5. Para extender y promover la conservación del suelo el Ministerio de Economía y Obras Públicas adoptará las medidas siguientes: a) Impulsar la creación de consorcios locales de productores agropecuarios, a los que la Subsecretaría de Asuntos Agrarios brindará asistencia especial. b) Difundir conocimientos sobre el cuidado del suelo, recabar la cooperación del I.N.T.A. e) Propiciar antes Bancos Oficiales y Privados

el otorgamiento de créditos liberales; f) la asistencia técnica sin cargo y que podrá incluir la venta de semillas y plantas a precios de fomento y la prestación a bajo costo de maquinaria especial para la conservación del suelo.

Art.8:La Subsecretaría de Asuntos Agrarios aconsejará en cada caso las medidas a adoptar para controlar el proceso activo de erosión eólica,que deberán llevarse a cabo en un término que podrá oscilar entre 1 semana y 3 meses, según las características de dicho proceso y a partir de la notificación correspondiente. al productor.

Art.11.Facúltase a la Secretaría de Asuntos Agrarios a constituir un consejo asesor especial integrado con representantes de entidades agrarias reconocidas. El Consejo deberá intervenir en todos los casos en que corresponda la aplicación de medidas coercitivas y análisis de planes orientativos, ya sean éstos de oficio o mediando pedido del productor rural (art.13).

El Consejo deberá propiciar anualmente la actualización de las multas establecidas por la presente reglamentación.

BENEFICIARIOS-OBLIGACIONES

Art.6. Dentro de los 12 meses de publicada la presente, todo productor agropecuario deberá informar a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios sobre el estado del predio que explota, en relación con la conservación del suelo, cumplimentando las siguientes referencias:a) Superficie del predio;b) Superficie ocupada por médanos desnudos y estabilizados, superficie con procesos notorios de erosión en los tres últimos años; superficie cubierta por zanjones y barrancos y superficie cubierta por salitrales;c) Tipos de arados y sembradoras de uso corriente;d) Receptividad estimada de la superficie que se destina a ganadería y carga actual de ganado.

La información se hará con carácter de declaración jurada, verificando la provincia su fidelidad.La Subsecretaría extenderá una constancia de recibo de la información debidamente cumplimentada;la no remisión o falseamiento de ésta será penada con multa.

Art.7 Todo propietario, arrendatario, tenedor u ocupante de la tierra a cualquier título deberá comunicar a la Secretaría de Asuntos Agrarios por carta certificada con aviso de retorno y dentro de un lapso no mayor de 30 días la presencia de un proceso activo de erosión eólica.La omisión de esta información será pasible de multa...

Art.9 Todo propietario o usuario de la tierra que tenga médanos desnudos en su predio procederá a consolidarlos mediante "praderización" y/o forestación o combinación de ambos sistemas de fijación, graduando el tiempo de recuperación de acuerdo con la gravedad del problema y dentro de un plazo máximo de tres (3) años a partir de la publicación de esta reglamentación. Cuando los médanos causen daños a terceros, debidamente comprobados por funcionario oficial, el plazo máximo de los trabajos de recuperación quedará limitado a 6 meses.

Art.15. A partir del año 1972 quien ocupe un predio rural en carácter de nuevo propietario o arrendatario y el mismo presente médanos no consolidados u otras manifestaciones avanzadas de erosión, será reputado único responsable de ello, debiendo cumplir todas las obligaciones que se ponen en cabeza del propietario o usuario de la tierra y haciéndose pasible del máximo de las multas instituidas solo por dicha causa.

SANCIONES-MULTAS: Art.15 último párrafo, art.3 (expropiación de tierras erosionadas, etc.

Art.8 última parte. Art.9 Segunda parte. Art.10. Art.7 (última parte).

APELACION: Podrá interponerse apelación ante el Poder Ejecutivo por recurso jerárquico y siempre que el recurrente justifique la imposibilidad material para realizar los trabajos respectivos, los que en tal caso podrán ser ejecutados por la Secretaría por cuenta del mismo. Cuando sin mediar apelación, no se diera cumplimiento a la segunda intimación, la Subsecretaría podrá efectuar los trabajos por cuenta del responsable de ejecutarlos y con un recargo de hasta el 50% del costo de estos trabajos.

LEY DE SUELOS 229 - AÑO 1960

PROVINCIA DE SANTA CRUZ (MODELO COMPLEMENTARIO)

Ley 229 - año 1960: Se analiza esta ley, anterior a la ley provincial de adhesión a la Nacional Nº 22428/80 y debido a que la misma capta algunos postulados constitucionales comprendidos en los arts. 74-67-61, etc., que expresan que "la ley agraria tenderá a la defensa de los suelos, fomentando la forestación, reforestación, riego, defensa de las especies vegetales y velará por la explotación racional de los mismos". "La tierra será objeto de una explotación racional". "La Cámara elaborará un plan destinado a recientizar las explotaciones rurales".

La ley 229 se divide en 5 capítulos. El primero, cuyo objeto es asegurar la conservación y el mantenimiento de la capacidad productiva, se refiere a: a) el desmonte de la vegetación arbórea y la explotación forestal; b) Técnicas culturales de manejo y conservación de suelos e implantación de pasturas; c) pastoreos; d) créditos; e) aprovechamiento de la fertilidad y regímenes de conservación; f) expropiación de tierras erosionadas; g) adquisición de máquinas para el cumplimiento de los fines; h) realización de investigaciones; i) Roturación de praderas, cultivo total o parcial de tierras erosionables y métodos o sistemas de labores que provoquen erosión. 2) Suscripción de convenios.

Los arts. 3 y 4 de la ley definen los conceptos de erosión, agotamiento, degradación, decapitación y conservación de suelos.

El Cap. II se refiere al estudio del suelo y planeamiento agrotécnico.

El Cap. III contiene normas edafológicas para la colonización, según agrícola y régimen de la tierra. Constituye un conjunto de obligaciones que incluyen al Estado Provincial.

El Cap. IV se refiere a medidas y trabajos para la conservación de los suelos (obliga a propietarios, arrendatarios, permisionarios y ocupantes legales).

El art. 15 de la ley dice "toda tierra en aptitud de producción expuesta a la erosión, que se encuentre abandonada en un 50% queda de por sí sujeta al régimen de trabajos Nacionales fijados por el Consejo Provincial Agrario, quien puede ejecutar trabajos en el predio sin necesidad de expropiar".

La misma facultad tiene el mencionado Consejo cuando se trata de trabajos a realizar en tierras del dominio fiscal.

Asimismo, el Consejo agrario es el encargado de realizar estudios del suelo y planeamiento agrotécnico, medidas de fomento, encomendándosele los deberes que el Código Rural de Buenos Aires encomienda al Poder Ejecutivo. Se destacan sus atribuciones de reglamentación en la materia. Finalmente, el Cap. 5 de la Ley se relaciona con sanciones por incumplimiento, multas y caducidad de la adjudicación del inmueble en tierras fiscales.

DECRETO 681/81 Reglamentario de la Ley Nacional de Suelos 22428

LEY DE SUELOS 4361/89

DECRETO 903/92 Reglamentario de la ley 4361/89 (Creación del Distrito de Conservación de Suelos - PROV. DE CORRIENTES (MODELO COMPLEMENTARIO))

CONCEPTO DE DEGRADACION: las autoridades de aplicación de la ley, deberán ajustarse a las siguientes pautas técnicas mínimas: a) que la degradación actual o potencial del suelo, sea de origen antrópico, de evidente gravedad y clara incidencia sobre la producción agropecuaria. No serán consideradas como áreas degradadas, aquellas en las que sus suelos presenten por causas naturales y en forma habitual, alto contenido de sales solubles; de sodio, de elementos tóxicos para las plantas comunes o animales domésticos; de baja fertilidad química nativa; capa de agua alta o suspendida que anule o disminuye muy notoriamente el crecimiento radicular de las plantas útiles; que requieran riego constante o suplementario, de desmonte o desmalezado; o cualquiera otra práctica que configure la habilitación al uso agropecuario de nuevas tierras.

AREAS PARA LA CONSERVACION - AUTORIDAD DE APLICACION - ATRIBUCIONES

La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, mediante resolución fundada podrá establecer cuales son los procesos de degradación de origen antrópico que serán considerados prioritarios a los efectos del otorgamiento de los beneficios federales previstos en esta ley.

b) Que el área elegida sea relativamente homogénea del punto de vista ecológico y económico, en un grado tal que permite presumir una aplicación general exitosa de las técnicas a recomendar; dicha homogeneidad deberá basarse en información técnica básica suficiente.

c) Existen prácticas técnicas específicas probadas en el lugar o en condiciones ecológicas similares que permitan solucionar eficientemente la degradación actual o potencial identificada. Las técnicas que a juicio de la autoridad de aplicación se consideren probadas para el área de cada Distrito, deberán ser explicitadas por ésta en todas sus partes y especificaciones técnicas, inclusive en soluciones alternativas, si ello correspondiere. Con ellas se confeccionará un catálogo técnico para el ámbito provincial, que podrá ser actualizado anualmente.

A tales efectos, podrá solicitar la intervención técnica que comprenda, al I.N.T.A.

A su vez, se podrá solicitar asistencia técnica a otros organismos oficiales o privados que estime conveniente.

d) Establecer como superficie máxima a asignar a los distritos de conservación de suelos, valores en concepto de: áreas de secano, con 700 o más milímetros de lluvia anual, doscientos mil hectáreas; entre 450 a 699 milímetros, seiscientos mil hectáreas; para menos de 449 milímetros, dos millones de hectáreas; para áreas de riego, diez mil hectáreas. La autoridad provincial de aplicación podrá fijar de acuerdo a la naturaleza y características de cada caso, la escala de trabajo en que se deberá realizar el reconocimiento.

"En regiones áridas o con suelos aún poco alterados o poco evolucionados, en las cuales solo se proyecta mejorar su aptitud ganadera, podrá reemplazarse la información edáfica exigida por un inventario anti-cuantitativo de la vegetación natural existente indicando las especies útiles e invasoras presentes y las posibles consecuencias del uso ganadero sobre la sucesión vegetal.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES

La presentación de los planes de conservación de los Consorcionistas al consorcio y por éste a la autoridad provincial de aplicación, se regirá por las siguientes pautas técnicas: a) identificación del representante y del predio; b) información básica suficiente de suelos; c) planificación de uso de las tierras; d) síntesis de las finalidades del programa (período de tiempo necesario para obtener resultados).

Cada plan deberá estar firmado por el solicitante y el profesional responsable y deberá incluir en su caso, la conformidad por escrito del propietario del predio para la realización del plan que se propone.

La afectación especial del bien, tendrá una duración de hasta 10 años. No obstante, la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, podrá levantar dicha afectación en los siguientes casos: obras o trabajos destruidos por caso fortuito o fuerza mayor o cuando lo requieran necesidades de seguridad pública o defensa nacional.

FONDOS

La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación podrá destinar hasta 15% del monto previsto en cada programa anual de Promoción a la Conservación y recuperación del suelo, para la adquisi-

ción de maquinarias e implementos en el cumplimiento de los planos de trabajos aprobados para un Consorcio de Conservación de Suelos.

LEY 4361 DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Art.1 CONCEPTO DE DEGRADACION: Los efectos de los agentes que ocasionen la pérdida del suelo, como el agua y el viento o la alteración de sus características originales por aquellos que provoquen acciones mecánicas, físicas, químicas o biológicas como consecuencia de la intervención humana.

AUTORIDAD DE APLICACION

Art.23 "Crease la Dirección del Servicio de Conservación de Suelos en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, a los cuales estará jerárquicamente subordinada, tanto en el desenvolvimiento administrativo, cuanto en la implementación de las políticas orientadoras de su quehacer específico".

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS:

Art.16: Los mandatarios y otros tenedores de la tierra obligados al pago del impuesto inmobiliario, no podrán oponerse a las prácticas de conservación de suelos que establece la presente ley. Si los titulares de los inmuebles optan por acogerse a los beneficios de la misma.

La modificación en el uso y goce de la tierra, deberá ser resuelta periódicamente por ambas partes o en su defecto, por las normas del derecho común que correspondiere.

Art.18: Dentro de los distritos de conservación de suelos, los inmuebles cuyos planes de conservación sean aprobados por la autoridad de aplicación, serán eximidos de hasta el 30% del impuesto inmobiliario durante el plazo establecido para la vigencia del plan."

Art.21. Cuando se concede la exención impositiva prevista en el art.18, se dejará constancia de ello en el Registro de la Propiedad, conforme a las normas que la reglamentación establezca. Asimismo, durante la duración del plan, deberá dejarse expresamente aclarado que dicha parcela se encuentra afectada a prácticas conservacionistas.

FONDOS

Art.20 El Banco de la Provincia de Corrientes, establecerá dentro de sus posibilidades financieras, líneas de crédito para: a) la ejecución de prácticas estructurales de control de la erosión hídrica y las destinadas al control de la erosión eólica. b) la adquisición de maquinarias para movimientos de tierras.

DECRETO 903 Reglamentario de la Ley 4361

Autorízase la creación de distritos de conservación de suelos, a los cuales a través de la autoridad de aplicación, se ajustarán y persiguirán los siguientes cometidos básicos: a) integrar un área máxima de 100.000 Has. en lo posible delimitados en una cuenca o subcuenca. b) Deberá proporcionarse para el Distrito un Manual o Catálogo de Técnica de Prácticas probadas y sencillas de aplicar. En aquellos casos en los cuales no se conozca las técnicas de manejo apropiadas, se proporcionarán el ensayo y prueba en las propiedades de los productores. c) Ejecutar medidas de fomento, tales como asignación de subsidios especiales por única vez, con la obligación de mantener las prácticas agroeconómicas por lo menos por 5 años y las de ingeniería 10 años. d) Eximir del impuesto inmobiliario anual - un máximo de un 70% a aquellos productores durante igual plazo al establecido para la vigencia de su plan, sobre la superficie efectiva del mismo. e) Designar un responsable en cada distrito con el título de Ing. Agrónomo, quien tendrá a su cargo el asesoramiento directo a los productores, elevando a la Autoridad Superior las inquietudes de aquellos y girar los planes de conservación a la autoridad de aplicación. A su vez deberá informar de anomalías que se comprueben en el área de su distrito.

1) Organízase los consorcios de conservación de suelos. Cada distrito estará constituido por como mínimo dos productores con la condición de vecindad de los mismos. 2) Estableciendo que el accionar de los consorcios estará coordinado por una junta, cuya presidencia estará a cargo de un productor elegido libremente por sus pares. 3) Establécese la preparación de planes de Conservación de suelos, elaborados y dirigidos por un profesional agrónomo: a-Exigidos por la autoridad de aplicación con la información básica sobre suelos, vegetación prácticas de manejo aprobados por el Distrito; b-El catálogo de Práctica de manejo, cuyo contenido será ampliado y/o actualizado por nuevas tecnologías aplicables a la zona que lo requiere. 4) Informar a los propietarios que las prácticas

incluidas en los planes de conservación deberán programarse por un período de 10 diez años.

Los mandatarios y otros tenedores de las tierras no podrán oponerse a las prácticas de las mismas cuando los titulares opten por acogerse a los beneficios.

LEY DE SUELOS 3571 - 29 de MAYO DE 1969

DECRETO 25/3 - 1972 Reglamenta la ley 3571/69 (no se aplica)

DECRETO 922/3 DE 1981 - Sustituye a la anterior. Define la redacción definitiva del decreto 25/3, debido a que éste adolece de insuficiencia de normas y ello dificulta la aplicación de sus disposiciones.

PROVINCIA DE TUCUMAN (MODELO COMPLEMENTARIO)

INTERES PUBLICO: Se declara por la conservación del suelo agrícola, entendiéndose por ello el mantenimiento y mejoramiento de su capacidad productiva.

Art.13 Declárase de orden pública las disposiciones de la presente ley.

DEGRADACION: Art. 2,2da.parte: Se entiende por erosión el proceso de remoción y transporte notorios de las partículas del suelo por acción del viento y/o del agua en movimiento que determina la pérdida de su integridad. Art.4 La planificación y el ordenamiento del regadío a partir de la presente ley se hará en base a estudios y antecedentes agua-suelo-planta.

AUTORIDAD DE APLICACION: Art.2: Para la aplicación del régimen obligatorio de conservación de los suelos fijados por esta ley, el poder ejecutivo establecerá las regiones o áreas de suelos erosionados, degradados y agotados. Art.5: La Secretaría de Agricultura y Ganadería, tomará, realizará y fomentará los trabajos de conservación de suelos, de acuerdo a lo que fije la reglamentación.

ATRIBUCIONES: Art.3: El Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería procederá a adoptar las siguientes medidas: a) Levantar la carta de los suelos de la Provincia, precisando sus deficiencias químicas y biológicas y a clasificarlos por su capacidad agrológica; b) Determinar técnicas culturales de manejo y recuperación de suelos; c) Establecer normas para el mejor aprovechamiento de la fertilidad de los suelos y fijar regímenes de conservación; d) Fijar las normas técnicas para el riego, la explotación conservacionista de las tierras pastoriles, la explotación de las zonas semidrídas y de los suelos con proceso de acelerada erosión. Art.7: El P.E. determinará sobre la obligación de combatir las especies animales o vegetales declaradas plagas en los lugares donde los métodos a aplicar en la lucha contra las mismas aumenten o provoquen la erosión, el agotamiento o la degradación de los suelos.

Art.8: El P.E. adoptará medidas necesarias para que en el planeamiento y ejecución de obras públicas, tales como caminos, ferrocarriles, canales, etc. se apliquen los principios y técnicas de conservación de suelo y del agua.

BENEFICIARIOS- REQUISITOS-OBLIGACIONES

Los propietarios arrendatarios, tenedores u ocupantes que contravengan las disposiciones de esta ley o de sus reglamentos no gozarán de créditos en las instituciones bancarias oficiales o de cualquier otra forma de ayuda económica oficial, hasta que desaparezcan las causas que motivaron esta penalidad.

SANCIONES: Art.11-Art.10: Las infracciones a la presente ley o a los reglamentos que se dicten se reprimirán con multas de un mil a cien mil pesos. Estas multas hasta la suma de 50.000 pesos serán aplicadas directamente por la Secretaría de Agricultura y Ganadería; las de monto superior, deberán ser aplicadas por el P.E. Las multas serán apelables en relación para ante el Juez del Crimen en el plazo de 10 días.

FONDOS: Art.9: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán costeados con los recursos siguientes: a) Las sumas que se fijan en el presupuesto general de la provincia y las que se asignen por la presente ley u otras leyes especiales; b) El importe de los derechos por trabajos requeridos por terceros que se perciban, se trate de particulares o entidades oficiales.; c) El producido de la venta de mapas, publicaciones, colecciones, que se realice de acuerdo a esta ley; d) el importe de las contribuciones voluntarias, legados y donaciones destinadas a promover el conocimiento y uso racional del suelo; e) Las multas por infracciones a esta ley.

Art.12: A los efectos de la aplicación inmediata de esta ley destínanse las sumas detalladas a continuación: a) 30 millones de pesos en concepto de dotación, por una sola vez de inmuebles e instalaciones, laboratorio y estaciones agrotécnicas de la actual dirección de conservación de suelos. b) 10 millones anuales por un período de cinco años para el funcionamiento de los servicios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Los saldos al cierre del ejercicio se transferirán al siguiente.

DECRETO 922/3 - 1981

INTERES PUBLICO

Que resulta necesario a fin de preservar y proteger el patrimonio suelo, modificar la reglamentación existente, adoptando normas tendientes a dar una mayor protección al recurso. Por lo tanto se procede a revisar el decreto 25/3 de 1972, el que quedará redactado en la forma que se establece en este instrumento legal.

DEGRADACION: Queda prohibida la degradación de los suelos en cualquiera de las formas siguientes: a) Por obstrucción o desvío de los aluviones o avenidas de agua provocados por precipitaciones pluviales, sin previa autorización otorgada por la Dirección de Conservación de Suelos; b) Por la obstrucción de cauces naturales o artificiales, cualquiera fuere su naturaleza; c) Por desvíos de cauces naturales o artificiales sin estudios previos que demuestren su eficiencia en cuanto a recuperación del área; d) Por desmonte o deforestación de los suelos de clase agrológica V, VI, VII y VIII; e) Por sobrepastoreo de los campos; f) Por la no aplicación de prácticas conservacionistas a partir de la clasificación agrológica Nº II; g) Por el uso irracional del agua de riego (volúmenes excesivos, mala calidad); h) Por el manejo inadecuado de los suelos en zonas áridas y semiáridas.

AREAS PARA LA CONSERVACION: Se establecen 4 áreas conservacionistas, perfectamente diferenciadas, tanto fisiográficamente como por la naturaleza físico-química y biológica de sus suelos y la índole y magnitud de sus limitantes. Art. 8. Con el objeto de fijar normas conservacionistas de suelos y a los fines de que todo usufructuario se obligue a conservarlos, se establece la siguiente clasificación agrológica: a) Suelos apropiados para cultivar: Clase I, II, III. b) Apropriadas para cultivos ocasionales o limitados: Clase IV; c) Suelos no apropiados para cultivos pero adecuados para vegetación que protejan el suelo en forma permanente: Clase V, VII y VIII; d) Suelos no apropiados para explotaciones agropecuarias o forestal: Clase VIII.

AUTORIDAD DE APLICACION-ATRIBUCIONES

Art. 2 La Dirección de Conservación de Suelos impondrá directivas en cuanto a los trabajos necesarios para la conservación y/o recuperación del suelo, para evitar la propagación o agravación de los procesos de degradación a los particulares propietarios, arrendatarios, etc.

inc.c) Realizará inspecciones en relación con el uso y manejo del suelo de las propiedades rurales. Art.3 inc.a y b) Cuando la magnitud de la degradación afecte a un área conservacionista, dicho organismo planeará y proyectará la recuperación de los suelos, cuyos trabajos se realizarán previa autorización del P.E. - Si la degradación asume magnitudes menores a nivel de predio, la conservación de suelos a solicitud del interesado aplicará las técnicas conservacionistas que correspondan, para la cual se regirá por los aranceles establecidos por decreto 2770/3. Art.5 La Dirección de Suelos pondrá en conocimiento de las instituciones oficiales de créditos una lista de infractores que no cumplan con las disposiciones contenidas en el art.1 y 2 de la presente reglamentación, con el objeto de que adopten las medidas correspondientes en concordancia con los fines del presente decreto.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES:

Art.3 inc.b)y c): sobre procesos de degradación .Rol del interesado. Art.5, Art.2: Los propietarios, arrendatarios, aparceros, usuarios o usufructuarios de inmuebles rurales, como responsables del uso y manejo del suelo deberán: a) Informar a la Dirección de Conservación de Suelos la existencia de evidentes procesos de degradación de los suelos. b) Efectuar los trabajos necesarios para la conservación y/o recuperación del suelo, para evitar la propagación o agravamiento de los procesos de degradación, sin producir daños a terceros. c) Permitir las inspecciones que disponga la autoridad competente en relación con el uso y manejo del suelo de las propiedades rurales. Art.1: Declárase obligatorio para las personas de existencia visible, jurídicas, privadas y asociaciones que adquieran, arrienden o usufructúen alguna fracción de terreno de interés agropecuario la realización de prácticas conservacionistas en cuanto al uso del suelo y la mejor manera de aprovecharlo sin que pierda su potencial productivo, entendiéndose por tal la capacidad de uso natural del suelo, como así también queda prohibida la degradación del suelo en las formas siguientes, inc.a, b, c, d, e, f, g, h. Art.8 Se establece la clasificación agrológica del art.8 a los fines de que todo usufructuario se obligue a conservar los suelos conforme a normas conservacionistas.

SANCIONES: Art.6. Las contravenciones a las disposiciones contenidas en el presente decreto reglamentario serán penadas según los montos que dispone el decreto ley 3571, actualizados.

Para establecer el grado de responsabilidad del usufructuario se otorgará un plazo prudencial, a los fines de rectificar los sistemas de manejo del predio, plazo que podrá variar con la naturaleza de la explotación. Si cumplido dicho plazo, que constará en actas, no se efectúan las correcciones aconsejadas, se notificará al responsable de la sanción a los fines de su efectivización.

TECNICAS PARA LA CONSERVACION DEL SUELO

Además de la ley nacional 13.246, son escasos los textos legislativos referidos expresamente al tema técnico de la conservación del suelo, por ello se destaca el Decreto Ley 21680/56, modificado por la ley 15.429 que estableciere el INTA., cuando en su art.2º inc.a) se menciona que el organismo promovería investigaciones sobre los problemas relacionados con los recursos naturales y con la técnica de la producción (técnicas de trabajo en el suelo).

En el Decreto 23960/53 art.3 se estableció el asesoramiento obligatorio por parte del ingeniero agrónomo, en todo establecimiento que se dedique a la lucha contra la erosión.

Por Decreto 2763/1992 de la Pcia. de Neuquén, se puntualiza como uno de los objetivos prioritarios la mejora de las condiciones de vida de la familia rural, el aumento de la productividad mediante el manejo de los recursos con el uso de técnicas apropiadas. Por lo que la Provincia posee 4.500.000 Has. de tierras fiscales en diferentes grados de erosión, el art. 1º declara de interés provincial el proyecto de prevención y control de la desertificación en la Patagonia que lleva adelante el I.N.T.A.; estableciendo acciones conjuntas con participación del Ministro de la producción, a través de la Secretaría de Estado de Producción Agraria.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(Formas de Tenencia de la Tierra)

2.5.1. Consideraciones Generales

2.5.1.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROPIEDAD DE LA TIERRA

En las apreciaciones referidas al tema, el Dr. Adolfo A Coscia en su libro "Agricultura Sostenible", analiza las Formas de Tenencia y las diversas situaciones en que la propiedad privada y fiscal se caracterizan por un "componente general en todos los casos, que es la falta de idoneidad de los ocupantes para actuar como agricultores en una economía moderna".

"La propiedad privada de la tierra es la que mejor asegura la preservación del suelo, aunque cuando se trata de ecosistemas frágiles, un enfoque equivocado de manejo puede tener consecuencias irreversibles, como en el caso del sobrepastoreo y la diversificación".

Los intrusos, que siendo ocupantes naturales, no legalizaron su derecho de propiedad y por lo tanto recae su actividad sobre tierras que aun pertenecen a las provincias. La inestabilidad de este ocupante determina falta de estímulo para el cuidado del suelo, la forestación, etc.

Las propiedades con títulos imperfectos o no delimitados adecuadamente, dan origen a la inseguridad y un manejo no ordenado en base a un plan a largo plazo, se agrava, cuando existen posibilidades de riesgo.

Las propiedades que se transmiten por herencia y que siendo varios los herederos se presenta un condominio forzado. Si la unidad de producción que se transmite es divisible, se corre el riesgo de que el campo se divida y el plantel de animales, la maquinaria exis

tente resulte sobredimensionada para la nueva superficie, de menor fracción.

En concordancia, el Diputado Provincial Dr. Raúl Barneche en oportunidad de la sanción de la ley de Tierra Fiscal, indicó que en Chubut casi 5 millones de ha. se encuentran ocupadas por más de 1800 personas con distintos grados de tenencia. Por lo que se deduce que un cuarto de la superficie provincial está caracterizada por el minifundio.

Aseverando que "esas tierras se transforman en entes 'anti económicos' porque no se sustentan a sí mismas y en 'antisociales' porque someten a sus ocupantes a condiciones de vida que rozan lo inhumano, define al latifundio independientemente de la extensión que posee". Se refiere de esta manera al concepto de "racional utilización de la tierra y su responsable administración" y manifiesta que la ley sancionada avanza sobre el otorgamiento de la tierra en propiedad, aunque sin medidas de control sobre el alcance y efectos concretos sobre las consecuencias de esas pertenencias, por faltar mecanismos, programas y formas de precisarlos.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.5.2. Aspectos Legales

2.5.2.1. Legislación General

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LEGISLACION NACIONAL

Normas con incidencia directa en la propiedad fundiaria y en la empresa agraria.

"La ley de reforma agraria de los Estados de América Latina ofrece una documentación instructiva de lo que se puede llamar la visión ecológica del objeto del derecho agrario. La ley de reforma agraria del Ecuador se refiere a la expropiación de los terrenos en que la actividad productiva se desarrolle mediante prácticas contrarias a la conservación de los recursos renovables, como es el caso de terrenos expuestos a la erosión eólica, hídrica o biológica que no fueron protegidos con implantaciones de bosques o a la implantación de pastos o con otros medios protectivos (art.12). Preponderantemente sin embargo acuden disposiciones cuyo objetivo principal es la tutela de los recursos naturales en función de la actividad productiva".

"En nuestra legislación nacional el tema se encuentra legislado en el Código Civil, en las leyes de tierras públicas, de colonización, de ordenamiento territorial y en los códigos rurales.

Las leyes sobre catastro y registros inmobiliarios, a su vez, establecen las condiciones para una correcta identificación física y jurídica de las parcelas y proporcionan información sobre la riqueza territorial del país.

La reforma de la ley 17.711 en materia de división de la tierra ha incorporado el viejo concepto de la unidad económica, que se aplica tanto a la división de las cosas en general, como en el caso de parcelamiento de inmuebles.

El art.2326 dispone que no podrán dividirse las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento y faculta a las autoridades locales para reglamentar en materia de inmuebles la superficie mínima de la unidad económica, la que en esta forma podrá adecuarse a las distintas condiciones agroeconómicas y demográficas imperantes en las regiones del territorio nacional. Art.3475 bis.

El criterio que preside la indivisibilidad de las parcelas inmobiliarias establecidos por la ley es puramente económico y no ambiental. En realidad la idea de unidad económica aparece más como una conquista agraria que de tipo urbano."

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CORDOBA

Ley 7398 Fondo de colonización y reordenamiento agrario.
Decreto 5303 Autoridad de aplicación del fondo: Secretaría.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
Ley 7497 Venta de tierras fiscales provinciales.
Decreto 7122/86
Ley 9319 Agricultura y Ganadería. Inmuebles Rurales. Unidad Económica.
Ley 4967.
Ley 12636 Nac. de Colonización
Ley 5487/72 Colonización y Reordenamiento Agrario.

CHACO

Ley 2424/79 Tierras fiscales en zonas de frontera.
Ley Nacional 21900 Regula Régimen de Tierras Fiscales en Zona de Frontera.

JUJUY

Ley 4394/88 Tierras Fiscales Rurales, colonización y fomento.

LA PAMPA

Ley 487/68 sustituye un apartado de la ley 277/62.
Ley 580/74 sustituye el apartado 4) y 5) inc.a Art.30 Ley 277/62
Ley 923/86 Modif.Ley 277 incorporando art. 35 bis
Ley 277/62 sobre Tierras Fiscales
Decreto 22/63 Modif.art. 5º ley 277/62.

MENDOZA

Ley 4626/92 tierras fiscales provinciales rurales en zonas de frontera.
Ley 4711/82 Proyecto Ley de ordenamiento territorial.
Ley 4438/80 Registro de uso de la tierra.
Ley 2251/80 Dirección Agropecuaria.Organiz.
Proyecto de ley de ordenamiento territorial.
Decreto 3525/88 Créase la Coordinación General de Tierras no irrigadas en la Provincia.

NEUQUEN

Ley 1875 Principios de preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio.
Ley 263.Tierras.Función de la tierra.Decreto 0826 reglamenta Ley 263.
Anteproyecto Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para la provincia de Neuquén.
Ley 1306/81.Regula delimitación, registro, adjudicación, uso y cesión de las tierras fiscales rurales pertenecientes al dominio privado de la Provincia.
Decreto 1165.Mejoramiento de la Educación Rural.

RIO NEGRO

Ley 279/71 Reconocimiento de titularidad sobre tierras fiscales existentes en el ámbito territorial.
Ley 1932/84 Creación del Fondo de Tierras Fiscales
Ley 1537/81 Tierras Fiscales en zonas de frontera.
Ley 1894/84 Modif.Ley 1537/81.
Decreto 395/76 Transferencia de mejoras en tierras fiscales.
Decreto 357/67 Solución de controversias en tierras fiscales.
Ley 1232/77 Desocupación de Inmuebles Fiscales.
Decreto 764/81 Subdivisión de Inmuebles Rurales.
Ley 104/59 Deslinde y Amojonamiento.
Decreto 878/85 Utilización racional de los recursos (área de frontera El Bolsón)
Ley 662 Economía-Catastro y Topografía.Registro.
Ley 1452/80 Recursos Naturales-Tierras y Colonias.Tierras Fiscales.
Ley 1499 Recursos Naturales.Código Rural.Guía de Tránsito.
Ley 2380. Código Rural. Anteproyecto.
Ley 1903 Tierras y Colonias.Tierras Fiscales. Venta.Escrituras.
Convenio sobre regularización de adjudicaciones de tierras fiscales rurales en zonas de frontera de la Provincia de Río Negro.
Ley 1516. Consejo Provincial de Educación.Programa de Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural.
Ley 1492 Educación en el Medio Rural.Convenio.

SALTA

Ley 5740.Educación Rural.
Ley 6023/82 Dirección General de Inmuebles.Valores Fiscales de parcelas rurales (incorporación a parcelas rurales de superficies desmontadas).
Ley 5304.Unidad Económica.

SAN JUAN

Decreto 0067/80 Dirección General Política de Frontera.
Ley 3861/73 Créase el Instituto de Tierras y Colonización (I.T.I.C.O.)
Ley 4319/77 Funciones del I.T.I.C.O.
Ley 4627/79 Régimen de las Tierras Fiscales en Zonas de Frontera.

TIERRA DEL FUEGO

Ley 372 Censo Población Rural
Ley 351 Red de Comunicación de Escuelas Rurales y Periféricas.
Ley 325 Censo General de Tierras Fiscales
Ley 480 Código Fiscal.
Ley 146 Catastro Territorial.

2. LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL

2.5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.5.2. Aspectos Legales

2.5.2.2. Legislación Seleccionada

2.5.2.2.

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA

PROVINCIAS DE RIO NEGRO, LA PAMPA,

SAN JUAN, EL CHACO, MENDOZA,

NEUQUEN

Se analiza: Función de la tierra
unidad económica agraria,
autoridad de aplicación,
obligaciones, fondos.

RIO NEGRO-LEY 279

FUNCION DE LA TIERRA: Es un instrumento de producción, considerada en función social para alcanzar los siguientes fines. Ej.: ordenamiento metódico y racional de la política demográfica.

Para la ejecución planificada de la política de promoción agraria, se considera esencial: la clasificación de la tierra rural en agrícola pastoral y forestal, el ordenamiento racional de la tierra rural, etc.

A los fines de esta ley, la tierra rural se subdividirá en forma tal que cada predio constituirá una unidad económica de explotación.

UNIDAD ECONOMICA AGRARIA: Se entenderá por unidad económica de explotación, todo predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajados por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, le permita subvenir a sus necesidades, a su mejoramiento social y a una evolución favorable de la empresa.

AUTORIDAD DE APLICACION: Créase el Instituto de Promoción Agraria de la Provincia de Río Negro (I.P.A.). El IPA estará regido por un Directorio y tendrá la siguiente estructura orgánica: a) Servicio de tierras y colonias, b) Servicio de colonización.

FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA: Serán funciones y deberes del Directorio del I.P.A., entre otras: aprobar el mapa agroecológico de la provincia; declarar las zonas y subzonas de colonización agrícola y pecuaria; Estructurar y hacer ejecutar los planes de colonización; expedirse de oficio en todo proyecto de colonización.

(Contra las resoluciones del I.P.A., podrá interponerse recurso por ante el Poder Ejecutivo dentro del término de 15 días). Determinar la disponibilidad de ciertas tierras fiscales rurales; mantener una información actualizada acerca de la propiedad rural y de su forma de tenencia y explotación, con especificación de sus caracteres intrínsecos y extrínsecos; cantidad de propietarios, arrendatarios, aparceros y obreros rurales; declarar reservas con los siguientes fines: fundación y ampliación de poblaciones rurales, establecimientos de futuras colonias, implantación de bosques y montes; determinar normas técnicas a que se ajustarán los inmuebles adjudicados y por cualquiera de los títulos prescriptos por esta ley, a fin de alcanzar su racional explotación mediante cláusulas obligacionales.

Mantener relaciones directas con los gobiernos de Provincias densamente pobladas que acusen características de monoproducción, a fin de celebrar tratados con la aprobación de la legislatura y con conocimiento del Congreso Federal, para la radicación de familias rurales; celebrar convenios con el I.N.T.A. a los fines de esa ley, y en especial, con el objeto de obtener la colaboración de profesionales, destinado exclusivamente a la planificación y promoción de los planes agrarios.

DEL SERVICIO DE TIERRAS Y COLONIAS: Será de su competencia: Tipificar y clasificar los modelos de instrumentos de adjudicación de la tierra fiscal, registrar, codificar y custodiar los instrumentos otorgados, confeccionar las liquidaciones por ventas, intereses, multas, los que serán abonados ante la dirección de rentas o sus delegaciones; ejercer la policía de la tierra fiscal, impidiendo su ocupación indebida, pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública, etc.

DEL SERVICIO DE COLONIZACION: Será de su competencia: fijar las bases técnicas para la determinación y actualización permanente de los valores de las tierras colonizables, sean estas fiscales o de particulares, teniendo en cuenta el grado de aptitud productiva, etc., proponer el conjunto de normas técnicas que regulen la explotación de las tierras colonizables y la determinación de los medios más idóneos para su consecución. Confeccionar planes concretos de colonización zonales, fundados en estudios técnicos, etc. y toda otra función que en virtud de esta ley la encomienda el Directorio.

DEL I.P.A.: RECURSOS: Proviene del producido de las ventas, arrendamientos y pastajes de las tierras fiscales y de toda otra que se transfiera, las partidas que anualmente le asigne la ley de presupuesto, las subvenciones de la industria, el comercio y el agro, el producido de las operaciones de crédito que realice con entidades nacionales o extranjeras, para el desarrollo de los planes de colonización.

DEL FONDO DE EXPANSION AGRARIA: RECURSOS: Se integrará con no menos del 25% sobre el total de los recursos previstos en el art. 20 inc. a y la partida que anualmente le destina la ley de presupuesto. El fondo será afectado exclusivamente a los siguientes fines: el otorgamiento de crédito a los adjudicatarios; para expropiación de inmuebles con fines de colonización cuando resulten insuficientes otros recursos. El beneficio del crédito será extensivo a todo productor que se halla radicado en las zonas declaradas colonizables, sea o no adjudicatario y siempre

que se acoja al régimen de esta ley, observando las normas técnicas jurídicas de explotación racional que establezca el I.P.A.

REQUISITOS Y PRIORIDADES PARA LAS ADJUDICACIONES: No ser propietario de predios que representen unidad económica, con excepción de que ésta fuese excedida por la capacidad familiar de trabajo del productor-propietario.

Dentro de cada uno de los órdenes de prelación para las adjudicaciones de unidades económicas, será un factor: estar domiciliado en la región, contar con implementos agrarios para la explotación, tendrá ampliación de la adjudicación cuando acreciere su familia.

BENEFICIARIOS. DERECHOS-OBLIGACIONES: Además del beneficio del crédito y el derecho a adjudicación, los adjudicatarios de unidades económicas quedan exonerados del pago de todo impuesto provincial por el término de 5 años desde la fecha en que se le otorgue la posesión.

Tendrán las siguientes obligaciones: cumplir con los planes oficiales de forestación, observar las leyes de policía sanitaria, animal y vegetal, de suelos, de conservación de recursos naturales renovables en general, explotar el predio acatando leyes, reglamentos que importe al I.P.A. El precio de venta de cada unidad económica será fijado por las características naturales, ubicación y aptitud productiva del suelo.

Al adjudicatario se le extenderá el título de dominio, habiendo cumplido con todas sus obligaciones, a los cinco años de ocupación del predio. Se declaran inembargables las unidades económicas adjudicadas.

Otorgado el título de dominio, el propietario deberá mantener la unidad económica en grado racional de productividad. Esta obligación regirá para los sucesivos adquirentes sin término de prescripción. En su defecto, las tierras podrán ser expropiadas por el I.P.A. con aprobación del Poder Ejecutivo, a cuyo fin se las declara de utilidad pública.

En todos los títulos de propiedad que se otorguen, se insertarán bajo pena de nulidad, las siguientes cláusulas: la prohibición de arrendar, subarrendar, tomar hacienda o pastaje, ceder a título alguno los derechos sobre el predio, subdividir o anexas la unidad económica sin la autorización del Directorio; constituir en indivisión forzosa la unidad económica, imponiéndole a todos sus herederos hasta que alcancen la mayoría de edad o en su defecto por un plazo de 10 años a contar desde su fallecimiento.

De la venta de fracciones inadecuadas (Art.74);de las tierras comprometidas (Art.75);del permiso precario de ocupación (Art.76):El I.P.A. otorgará permisos precarios de ocupación con destino a pastaje en tierras no adjudicadas con promesa de venta, no sujeción a límites de receptividad por zona o subzonas, por el plazo de hasta un año,prorrogable. El precio del pastaje se determinará periódicamente por ciclos de producción. Tendrán preferencia los productores pecuarios linderos o más próximos que acrediten el cumplimiento de las normas de policía sanitaria animal y planes de lucha contra especies perjudiciales y plagas de la ganadería y entre estos, aquellos que obtuvieren mayor excedente de haciendas en relación con la receptividad de sus respectivos campos.

DE LA CONCESION EN ARRENDAMIENTO:La tierra que se concede en arrendamiento deberá ser determinada como unidad económica. Los concesionarios que hubieren cumplido con las obligaciones,transcurridos 5 años al frente de la explotación, gozarán de preferencia en primer grado para la adjudicación con promesa de venta, habiéndose determinado definitivamente la unidad económica. Si además hubieren construido mejoras imprescindibles para la racional explotación del inmueble, y solo cuando se tratara de tierras pastoril de baja receptividad, los arrendamientos pagados le serán imputados a cuenta del precio de venta.

Los particulares o empresas que desearan acogerse al régimen de colonización privada, deberán presentar al I.P.A. los estudios técnicos,económicos, financieros, agrológicos y de mensura.

Los compradores de unidades económicas en el presente régimen de colonización por convenio,tendrán la misma franquicia impositiva de todo adjudicatario

REGIMENES ESPECIALES DE COLONIZACION

El I.P.A. podrá reservar en las zonas declaradas colonizables hasta el 25% de las unidades económicas para adjudicarlas a inmigrantes campesinos que lleguen al país para radicarse en la Provincia en virtud de convenios celebrados con autorización del Poder Ejecutivo,aprobación de la legislatura y de las autoridades nacionales competentes. En estos casos, no regirán los requisitos esenciales ni las órdenes de prelación, ni los factores de selección, sino subsidiariamente y en la medida de lo compatible con las leyes de inmigración y con el convenio.

LA PAMPA LEY Nº 277/62 SOBRE TIERRAS FISCALES

Cap.Art.1 Créase la Dirección de Tierras, dependiente del Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios. El citado organismo intervendrá en: a) la determinación de las características agroeconómicas de unidades mínimas u óptimas de explotación racional; 2) el control de la subdivisión de inmuebles rurales, asegurando que los lotes proyectados cumplan con las características mínimas constitutivas de la unidad económica de explotación.

Cap.3 DE LA COLONIZACION-FUNCION DE LA TIERRA-Unidad Económica Agraria
Art.14 Las tierras rurales o subrurales de propiedad del Estado Provincial que reúnan las condiciones mínimas necesarias para permitir una explotación eficiente mediante la aplicación de prácticas agrícola-ganaderas aconsejadas por la técnica moderna en íntima vinculación a los factores económicos y sociales, serán divididas o no según corresponde en lotes que constituyan unidades económicas de explotación.

UNIDAD ECONOMICA: Se entenderá por unidad económica de explotación todo predio que por su superficie, configuración geométrica, calidad de la tierra, mejoras y demás características de explotación, que racionalmente trabajada por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permite subvenir a sus necesidades y un desarrollo favorable de la Empresa.

FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA: El Poder Ejecutivo fijará las bases técnicas generales que permitan a la Dirección de Tierras precisar la extensión superficial constitutiva de la unidad económica, sobre la base del poder potencial de producción del suelo y posición geográfica de la unidad que se analice. La Dirección de Tierras realizará la determinación, en consideración a los distintos sistemas y clases de explotación y las condiciones económico sociales de cada región. Ejecutará todas las operaciones técnico necesarias para dicha determinación.

Los inmuebles de propiedad del Estado constituidos en unidades económicas de explotación, se estructurarán según sus condiciones particulares, de modo que en su evolución se vayan transformando en centros sociales de vida económica propia.

El Poder Ejecutivo adjudicará las unidades agrarias por concurso. o por adjudicación directa.

Los adjudicatarios con promesa de venta, tendrán obligación de explotar la tierra racionalmente. Los ocupantes por cualquier título de tierra fiscal rural, excepto los adjudicatarios con promesa de venta, abonarán por anualidades vencidas un canon cuyo monto no podrá exceder del 5% del valor de la tierra, calculado en base a su productividad.

SAN JUAN LEY 3861/73: Créase el Instituto de Tierras y Colonización (I.T.I.C.O.), con autarquía técnica, financiera y jurisd. en todo el territorio de la Provincia dep. del Ministerio de Economía, para entre otras cosas, elaborar, aplicar, controlar y coordinar los planes de colonización y llevar la administración de todas las colonias fundadas o a crearse.

Quedan afectados al cumplimiento de los objetivos de esta ley: a) los inmuebles del dominio privado del Estado; 2) los inmuebles de propiedad particular con título imperfecto o consistente en derechos y acciones de número y contenido incierto; 3) los inmuebles de propiedad particular inexplorados o explotados en forma irracional de acuerdo al concepto de unidad económica y a sus posibilidades productivas y que el I.T.I.C.O. creyere necesario colonizar; 4) los inmuebles en situación de condominio cuyo N° de condominios sea mayor de 5 o no puede precisarse o cuando impide una racional división económica; 5) los inmuebles rurales no incorporados al proceso productivo y que cuenten con posibilidades de una racional explotación económica.

Art.5. Aprobado el respectivo plan la zona de colonización podrá ser adjudicada de acuerdo a dos formas de explotación: a) por acción individual o familiar; b) por acción colectiva o comunitaria.

SAN JUAN LEY 4319/77

Se deja sin efecto la autarquía técnica y financiera del I.T.I.C.O. creada por ley 3861/73. Dicho organismo, con los bienes que le correspondan tendrá funciones como organismo centralizado bajo la dependencia de la Dirección de Asuntos Agropecuarios, Área del Ministerio de Economía. La misma ejercerá las funciones de administración de aquél.

SAN JUAN LEY 4627/79 MODELO DE REGIMEN DE LAS TIERRAS FISCALES EN ZONAS DE FRONTERA (de acuerdo a lo dispuesto por la ley 21.900).

Institúyese con carácter complementario del establecido por la ley 21.900, el sistema provincial de delimitación, registro, adjudicación, uso y cesión de las tierras fiscales rurales situadas en zonas de frontera dentro del territorio provincial, el que deberá ajustarse por las pautas legales en cuanto a los requisitos que deben reunir los programas y proyectos de producción, explotación y aprovechamiento de recursos naturales existentes.

FUNCION DE LA TIERRA

Art.2 La adjudicación de tierras tendrá por finalidad exclusiva de pobladores y núcleos socioeconómicos para el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales..."

FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA

Art.3 El Poder Ejecutivo Provincial por intermedio de los órganos competentes, estudiará las tierras fiscales y resolverá su incorporación a los programas de colonización en lo que se refiere el Título II de la ley 21.900.

Art.6 El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de la autoridad de aplicación registrará las tierras de propiedad fiscal y procederá a venderlas, permutarlas o reservarlas;asimismo determinará y fiscalizará su destino. El Poder Ejecutivo se reservará la facultad indelegable del otorgamiento definitivo del título de propiedad.

Art.7 El Poder Ejecutivo Provincial por medio de los organismos competentes podrá recuperar sus tierras fiscales en zonas de frontera, ocupadas por intrusos o por tenedores con contrato vencido o rescindido;recurriendo a la justicia en su caso.

Art.8 Cuando a juicio del Poder Ejecutivo, convenga a los objetivos de colonización, los precios de venta de tierras fijados de acuerdo a las características naturales y aptitudes productivas del suelo, podrán ser promocionales como medida de fomento y estímulo.

Art.15. El Poder Ejecutivo Provincial podrá proponer a organismos competentes del Estado Nacional por vía de excepción, la realización de programas cuya adjudicación no se ajuste a los requisitos establecidos por la ley.

Art.9 La autoridad de aplicación designada elaborará programas destinados a la habilitación de las tierras fiscales ubicadas en zonas de frontera en superficies seleccionadas.

UNIDAD ECONOMICA

Los programas que se formulan deberán, entre otras cosas:Establecer las condiciones requeridas para el aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes en dichas tierras;prever la dimensión de las parcelas en función y forma proporcionada a su destino, a fin de que sean productivas económicamente, constituyendo unidades económicas de producción.

Se considera como unidad económica de producción, a la superficie que asegure la rentabilidad de la explotación, su tecnificación y un adecuado proceso de reinversión, que permita una evolución favorable de la empresa.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Art.15 Las adjudicaciones de tierras deberán ajustarse a lo dispuesto en la ley 21900 incluyendo las obligaciones a cargo del adjudicatario, la de cultivar el 50% de la tierra apta y acatar las directivas de la Autoridad de Aplicación. No podrán ser adjudicatarios de tierras fiscales en zonas de frontera: 1) Los Miembros de los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales (Nacional y Provincial); 2) Los funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal; 3) los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en actividad; 4) Los Funcionarios del organismo de Aplicación de la presente ley; 5) Las personas condenadas por delitos de traición, subversión, o aquellas a quienes se hubiere privado de la ciudadanía argentina.

AUTORIDAD DE APLICACION

Art.12 La autoridad de aplicación organizará y mantendrá actualizado el Registro de Tierras Fiscales en zona de frontera, con la colaboración de información de organismos nacionales y provinciales, (datos referentes a ubicación, dimensiones, ocupación, características de los mismos, etc.).

SAN JUAN DECRETO 0067/80 - Dirección General de Política de Frontera

Art.1 - Créase la Dirección General de Política de Frontera de la Provincia, con Dependencia del Ministerio de Gobierno, que consistirá en un organismo centralizado y tendrá como objetivo general la promoción del desarrollo integral de las regiones del Territorio Provincial adyacente al país limítrofe para reafirmar el ejercicio de la soberanía en función de la seguridad nacional, preservando la integridad territorial.

FUNCION Y COMPETENCIA: Proponer medidas para el desarrollo de la infraestructura productiva basada en la explotación racional y rentable de los recursos naturales de la zona, cuyo dimensionamiento asegure la satisfacción de la demanda de los mercados locales y regionales; proponer programas de adjudicación de tierras fiscales para la radicación de po-

bladores y núcleos socioeconómicos que tiendan al aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes, sobre la base de las normas legales vigentes.

CHACO LEY 2424/79

MODELO DE REGIMEN DE LAS TIERRAS FISCALES EN ZONA DE FRONTERA

Exp. de motivos:(de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.900)

La Provincia, en virtud del ordenamiento especial y la integración poblacional del territorio considerado como zona de frontera, implementa sistemas de adjudicación de tierras fiscales que posibilitan el aprovechamiento integral de los recursos naturales.

FUNCION DE LA TIERRA

Art.2 "La adjudicación de tierras fiscales en zonas de frontera tendrá por finalidad la radicación de pobladores y núcleos socioeconómicos para el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA

Art.4 El Ministerio de Gobierno elaborará programas destinados a la habilitación de tierras fiscales.

UNIDAD ECONOMICA: Estos deberán:a) Establecer las condiciones para el aprovechamiento racional de los recursos naturales;b)prever la dimensión de las parcelas en función y forma proporcionada a su destino, a fin de que las explotaciones que se realicen resulten productivas económicamente;c) ser elaborados con intervención de organismos técnicos oficiales competentes, según la naturaleza del programa.

Art.5º Las Tierras Fiscales cuyo dominio pertenezca a organismos del Estado Nacional, ubicados en Territorio Provincial, podrán ser incluidas dentro de los programas aludidos, previo acuerdo y aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Art.10 - Las tierras fiscales en zona de frontera solo podía ser adjudicadas en propiedad (salvo las adjudicaciones destinadas a explotación mineras y de bosques fiscales, que se regirán en cuanto al título por el que se otorguen, por sus respectivas disposiciones.

Art.12 La adjudicación de tierras fiscales en zonas de frontera se efectuará por concurso público. El llamado deberá incluir:objetivos del programa,destino a conferirse a las tierras,obligaciones por los adjudicatarios y sucesivos adquirentes, sanciones por incumplimiento.etc.

Art.14 Las pautas de selección para la adjudicación a personas jurídicas se estructurará sobre la base de un sistema de puntaje, con prioridades, como el aporte de tecnología a la explotación racional de los recursos naturales y de medios que posibiliten el incremento de la producción.

AUTORIDAD DE APLICACION

Art.9 La Dirección de Catastro organizará y mantendrá actualizado el Registro de Tierras Fiscales en zona de Frontera, con colaboración de organismos provinciales, Gobierno de la Provincia de la Nación.

Art.16 OBLIGACION DEL ADJUDICATARIO: No ceder, transferir, arrendar, dar en aparcería o comodato el predio adjudicado, cumplir las normas y directivas generales contenidas en los pliegos; cumplir con las modalidades de uso y explotación establecidas para garantizar la permanencia de los recursos naturales renovables.

Art.22 Otorgado el título traslativo de dominio, el propietario deberá mantener la tierra en condiciones de producción racional y ocupación previstas en el contrato de adjudicación o autorización con posterioridad. Esta obligación regirá para los sucesivos adquirentes. Deberá constar en la escritura y será asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble.

MENDOZA - LEY 4711/82 LEY DE COLONIZACION

FUNCION DE LA TIERRA:

Art.1 La Provincia de Mendoza desarrollará de acuerdo con la presente ley, planes de colonización cuyos objetivos serían:extender la frontera agropecuaria mediante la incorporación de nuevas tierras al cultivo, racionalizar las explotaciones rurales,eleva el bienestar de los hombres de campo,la propiedad de la tierra colonizada en cumplimiento de esta ley, queda sujeta a las limitaciones y restricciones que en ella se determinen.

En los proyectos de colonización, la subdivisión parcelaria deberá asegurar el mínimo de superficie necesaria para la integración de unidades económicas según los tipos de explotación posible de realizar en la zona de localización de cada proyecto.

UNIDAD ECONOMICA AGRARIA:Se entenderá que la unidad económica se conforme en cada caso con la combinación adecuada de factores para la obtención de una razonable rentabilidad que posibilite la subsistencia digna del adjudicatario y su familia, el desarrollo tecnológico de la explotación familiar y un progresivo proceso de reinversión que asegure su favorable evolución.

Art.25-26 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS:Tendrá derecho al asesoramiento técnico para una adecuada explotación del predio,etc. y serán obligaciones: mantener el predio en grado racional de productividad,no dividir la unidad adjudicada,etc.

ORGANO DE APLICACION:Será la Dirección Agropecuaria dependiente del Ministerio de Economía de la Pcia. o el organismo en quien recayeren las funciones en caso de supresión o transformación.

FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA:La colonización por personas privadas solo podrá efectuarse con la aprobación del órgano de aplicación de esta ley. Corresponderá al organismo de aplicación, controlar que el fraccionamiento de tierras resulte en superficies compatibles con el tipo de empresa agraria técnicamente posible de desarrollar,dentro de las características agroecológicas de la zona y de los requerimientos de capital.

El órgano de aplicación debe cumplir y hacer cumplir esta ley,elaborar,ejecutar y ejercer control sobre los proyectos,etc.

LEY 4626/92 TIERRAS PROVINCIALES FISCALES RURALES EN ZONAS DE FRONTERA

FUNCION DE LA TIERRA

Art.2. La adjudicación de tierras (ley 21.900) tendrá por finalidad exclusiva la radicación de pobladores y núcleos socio-económicos para el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales.

AUTORIDAD DE APLICACION:elaborará programas para la habilitación de sus tierras fiscales en zona de frontera en superficies seleccionadas.Los programas deberán establecer las condiciones requeridas para el aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes en dichas tierras.

BENEFICIARIOS:Las adjudicaciones de las tierras deberán ajustarse a las disposiciones del títuloIII de la ley 21.900,incluyendo entre las obligaciones a cargo del adjudicatario la de cultivar el 50% de tierra apta y acatar las directivas de la autoridad de aplicación.

LEY 4438/80 REGISTRO DE USO DE LA TIERRA:

Art.1 La Dirección Agropecuaria llevará un registro permanente del uso de la tierra,cuyo funcionamiento será reglamentado por el P.Ejecutivo. Serán funciones del Registro: Mantener información actualizada sobre el empleo de la tierra,cualquiera fuere el uso o destino que se le diese, detectar tendencias y expectativas de producción y hacerlas conocer al P.Ejecutivo a través del Ministerio de Economía.

Los productores agropecuarios serán o no propietarios,están obligados a suministrar, bajo declaración jurada, las informaciones que disponga el Poder Ejecutivo.

DECRETO 2251/80: La Dirección Agropecuaria será la sede de funcionamiento del Consejo Asesor del Registro permanente de uso de la tierra. El Registro llevará a cabo empadronamientos agropecuarios;mediante técnicas apropiadas llevará a cabo estimaciones de superficie aprovechada y producción esperada por tipo de actividad. Se registrarán los precios esperados, los obtenidos el año anterior, la forma de comercialización, etc.

NEUQUEN LEY 1875: Principios para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio.

Son finalidades concretas de la ley: a) el ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de poblamiento, expansión de fronteras productivas en general, en función de los valores del ambiente; b) la utilización racional del suelo, etc.

LEY 263 DE TIERRAS - FUNCION DE LA TIERRA: El Poder Ejecutivo promoverá el cumplimiento de la función social de las tierras fiscales, mediante su arrendamiento y/o enajenación.

UNIDAD ECONOMICA AGRARIA: Art. 4 El parcelamiento de predios rurales destinados a explotación agropecuarias se hará teniendo en cuenta su ubicación geográfica o condiciones agroecológicas y destino a que serán sometidos, debiendo constituir cada parcela una unidad económica para subvenir a las necesidades de su titular.

Art. 5 Excepción a las concesiones de tierras.

OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS: Explotación por cuenta propia, residir en el predio, introducir todas las mejoras para una racional explotación, etc.

Decreto 0826 Regl. de la ley 263: Considera que su aplicación efectiva, se traducirá en una más racional utilización de la tierra.

SALTA LEY 6023/82

INCORPORACION A PARCELAS RURALES DE SUPERFICIES DESMONTADAS

AUTORIDAD DE APLICACION

Facúltase a la Dirección de Inmuebles a incorporar al solo efecto de la determinación de los valores fiscales de las parcelas rurales, las superficies desmontadas.

Serán beneficiarios los titulares de inmuebles rurales que soliciten acogerse a los beneficios de este régimen por descuentos realizados a partir de 1977.

UNIDAD ECONOMICA

La Dirección General de Inmuebles determinará las superficies mínimas de la unidad económica en predios rurales y estará facultada para dictar las respectivas resoluciones generales.